

252

Saberes

Fragmentos para la historia
México en el siglo XX

Elsa Muñiz
Marco Antonio González
(Coordinadores)

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
METROPOLITANA



Casa abierta al tiempo

Azcapotzalco

Fragmentos para la historia
México en el siglo XX

COLECCIÓN HUMANIDADES
SERIE SABERES

BIBLIOTECA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Fragmentos para la historia

México en el siglo XX

218908

C.B. 2896086

Elsa Muñiz

Marco Antonio González

(Coordinadores)



2896086

Universidad Autónoma Metropolitana

Rector General

Dr. José Lema Labadie

Secretario General

Mtro. Luis Javier Melgoza Valdivia

Unidad Azcapotzalco

Rector

Dr. Adrián de Garay Sánchez

Secretaria

Dra. Sylvie Turpin Marion

UAM
F1226
F7.3

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Director

Dr. Roberto Gutiérrez López

Secretario Académico

Mtro. Gerardo González Ascencio

Jefe del Departamento de Humanidades

Dr. José Ronzón León

Coordinadora de Difusión y Publicaciones

Dra. Elsa Muñoz García

Primera edición, 2008

Los derechos de reproducción de esta obra pertenecen al autor

© **Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco**

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Coordinación de Difusión y Publicaciones

Av. San Pablo 180, Edificio E, Salón 004,

Col. Reynosa Tamaulipas, Deleg. Azcapotzalco,

C.P. 02200, México D.F., Tel. 5318-9109

www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades *link publicaciones*

Colaboración técnica:

Jaqueline García Bautista

Daniela Acuña Gutiérrez

Diseño de portada:

Jazmín Morales Contreras

ISBN: 978-970-31-1044-5

Se prohíbe la reproducción por cualquier medio, sin el consentimiento de los titulares de los derechos de la obra.

Impreso y hecho en México / *Printed and made in Mexico*

Índice

Introducción	11
------------------------	----

Capítulo I

La decisión del Tata: Voluntad, proceso y contexto en la expropiación del petróleo	23
<i>Arturo Grunstein Dickter</i>	

Capítulo II

El voto femenino en México: La lucha del siglo . . .	69
<i>Elsa Muñiz</i>	

Capítulo III

La crisis de 1994-1995 en México	109
<i>Marco Antonio González Gómez</i>	

Capítulo IV

La rebelión neozapatista en Chiapas	151
<i>Armando Cisneros Sosa</i>	

Glosario	205
--------------------	-----

Bibliografía	215
------------------------	-----

Introducción

En la presentación que Marc Bloch hace de su clásica obra *Introducción a la historia*,¹ nos recuerda el papel que el historiador tiene como pedagogo. El objetivo de la investigación histórica no está completo si no se vierte a la sociedad el conocimiento obtenido. Sin embargo, esta función pedagógica del historiador no se agota en las aulas, aunque es en ellas en las que plenamente se cumple el cometido de transmitir lo que se ha indagado sobre la sociedad en la que vivimos.

La importancia que adquiere el conocimiento histórico también trasciende el mundo de lo público, en particular el político, el económico o el bélico, tema este último, preferido por los representantes de la historia positivista o de bronce. La historia, es bien sabido y no por ello ocioso repetirlo, nos da identidad, nos ubica en un tiempo y en un espacio, nos hace reconocernos como producto de múltiples procesos que nos son comunes y

¹ Marc Bloch. *Introducción a la Historia*, Trad. Pablo González Casanova y Max Aub, México, Fondo de Cultura Económica, 1952. (Col. Breviarios,)

como seres de nuestro tiempo. El pasado, es pues, parte de una cultura vigente.

Desafortunadamente, la herencia de una visión estrecha respecto a lo que es la historia, lo que significa y la importancia que tiene en nuestra propia definición como sujetos, ha hecho que los estudiantes, en la mayoría de los casos, mantengan un cierto desánimo o en muchos casos un abierto rechazo hacia la historia. En ese sentido cabría preguntarse ¿Un libro más de historia? ¿Acaso no hay suficientes ya?

Quienes nos dedicamos de manera profesional a esta difícil tarea, tenemos que enfrentar ese desgaste que han dejado años y años de la enseñanza de una historia que no tiene ningún sentido para los jóvenes cuya mira está siempre puesta en el futuro y no en el pasado. El estudio de la historia, sólo como conocimiento del pasado, es otra de las inercias que provocan en los estudiantes el desinterés y la apatía. En este sentido, Marc Bloch señaló, en el texto referido, que el estudio del pasado obedece a una necesidad del presente. La historia concebida como un proceso del cual formamos parte, nos permite entender que cada generación busca distintas cosas en ese pasado que se piensa muerto.

Roland Barthes,² por su parte, ha sugerido que revisar periódicamente los objetos del pasado y describirlos de nuevo debería ser un proceso regular de valoración de

² Roland Barthes. *Crítica y verdad*, Trad. José Bianco, Buenos Aires, Siglo XXI, 3ª ed., 1972.

las sociedades y, es en ese sentido, que escribir otro libro de historia no está de más, sobre todo, si esa apreciación diferente pasa por el interés de transmitir a los estudiantes conocimientos históricos que les sean significativos.

El presente no es en principio un libro de texto, es más bien un ejercicio que algunos profesores dedicados a la investigación histórica nos hemos propuesto realizar a partir de ciertas inquietudes y preocupaciones que nos ha dejado la práctica docente. A través de nuestro trabajo como profesores universitarios, hemos encontrado que uno de los retos a la vez más complicados y fascinantes de la enseñanza y aprendizaje de la historia es el de transmitir a los estudiantes la profunda complejidad de los procesos histórico-sociales en los que los protagonistas jugaron un papel fundamental al tomar decisiones que a la postre resultaron decisivas. Consideramos que las coyunturas que marcan la importancia de ciertos acontecimientos, son además, productos de los procesos que en un momento dado colocan a los sujetos en situaciones cuyas opciones se ven limitadas, y eso es, en buena medida, lo que le imprime un carácter dramático, en muchas ocasiones incluso trágico, al devenir de los acontecimientos de la historia.

Es así, que a partir de estas y otras reflexiones consideramos, con Mario Carretero,³ que resulta fundamen-

³ Mario Carretero. "Perspectivas disciplinares, cognitivas y didácticas en la enseñanza de las Ciencias Sociales y la Historia" en Mario Carretero. *Construir y enseñar. Las Ciencias Sociales y la Historia*, Madrid AIQUE, 1993.

tal tener claro *qué* es el conocimiento histórico para los alumnos, es decir, entender qué procesos están implicados en dicho conocimiento, en su elaboración dentro y fuera de las aulas; asimismo, pensar en el tipo de información y de procesos cognitivos implicados en la comprensión de diversos procesos sociales, como parte del quehacer diario de la enseñanza. En un segundo momento, resulta fundamental el *cómo* o la manera en la que se transmite dicho conocimiento histórico, es decir, los métodos didácticos utilizados para conseguir de manera eficaz y adecuada que los alumnos consigan aquello que se pretenda que aprendan. Y por último, destacamos *a quiénes enseñar*, con esto nos referimos a las características que tienen nuestros alumnos, aquellos a quienes debemos introducir a una disciplina cuyos estigmas pesan en el imaginario de los estudiantes, a lo cual tenemos que agregar la particularidad de la importancia que el contenido a transmitir tiene en su formación como profesionistas del Derecho, la Sociología, la Economía y la Administración, a la vez que como hombres y mujeres de su tiempo o, mejor dicho, como sujetos de la historia.

Claves para leer este libro

Lo que encontrarán en las páginas siguientes son ensayos históricos elaborados, cada uno de ellos desde un profundo conocimiento de los diversos temas, por investigadores que además de incursionar en la historia,

participan de otras disciplinas como la Sociología, la Antropología, la Política y los Estudios de Género.

Los trabajos que se ofrecen se han estructurado a partir ciertas premisas que han de tomarse en cuenta al momento de leerlos.

Suponemos que el conocimiento histórico parte de un estudio del pasado, pero siempre desde herramientas conceptuales que tienen sentido en el presente, y lo que es más importante, obedecen a preguntas e inquietudes que los estudiantes e investigadores plantean desde su realidad actual.

Consideramos que el conocimiento histórico ha de vincularse con el que brindan otras ciencias sociales para obtener una mejor comprensión de los fenómenos sociales y atender a su historicidad, de ahí la importancia de la diversidad disciplinaria de los autores del presente libro.

Los textos aquí compilados son ensayos que contienen la visión de cada uno de los investigadores, cuyos trabajos participan de variadas corrientes historiográficas. Al mismo tiempo que se puede advertir la manera en la que cada uno de ellos participa o cuestiona lo que ha dado en llamarse la “historia oficial”, al brindar al análisis elementos novedosos y críticos para ser discutidos por los estudiantes.

El conocimiento histórico cumple un papel determinante en la conformación de la identidad y la subjetividad de los individuos. Asimismo, participa en la construcción de las representaciones de la realidad que poseen los ciudadanos y que impactan su comporta-

miento ya que están ligadas a la presencia de valores políticos e ideológicos que han sido explicitados por los autores, al tiempo que brindan elementos para reflexionar sobre ello.

En algunos de los ensayos se ha incluido más de una versión de ciertos aspectos fundamentales para que se establezca un espacio en el que se cuestionen las versiones que se reciben. De hecho, es un objetivo de este libro promover el cuestionamiento y discusión de las diferentes versiones en relación a los hechos aquí expuestos.

Los textos se han elaborado a partir de la selección que cada autor hizo de un acontecimiento histórico, según su tema particular de interés y de su apuesta teórica e historiográfica. De ahí que se enfatice en la distinción entre los datos aportados por los documentos, las estadísticas y las teorías desde las cuales se elabora una determinada explicación, lo cual permite reconocer que los hechos históricos están sujetos a interpretaciones diversas. En este sentido, se enfatiza que el conocimiento histórico no es una sucesión de clasificaciones, fechas y nombres, es más bien, un producto de la flexibilidad del razonamiento y de la comprensión.

Pensamos que es fundamental orientar a los estudiantes en el conocimiento de otras realidades y procesos similares a los que acontecieron, por ejemplo, en México, lo cual permitirá establecer continuidades y diferencias, y en tal sentido encontrar regularidades que permitan reconocer modelos generales aplicables a situaciones distintas en el tiempo, tema este al que se debe dar un espacio importante en la reflexión.

Queremos llamar la atención de los estudiantes en relación a las diferentes interpretaciones de los acontecimientos, así como propiciar su reflexión en torno a la plausibilidad de dichas interpretaciones, haciendo un análisis serio de las fuentes utilizadas, para evitar pensar la historia como una serie de anécdotas. Nos interesa mostrar a la historia como una narración que puede ser contada de maneras distintas y dejarles claro que cualquier hecho histórico tiene unos agentes, una o varias acciones, una secuencia en el tiempo y un desenlace.

La idea de elegir un hecho histórico determinado en cada uno de los ensayos aquí ofrecidos, obedece en mucho a este ejercicio de reconocimiento y distinción entre los actores, las acciones y la secuencia en el tiempo. Estamos convencidos que desde esta perspectiva permitirá entender que las explicaciones históricas y sociales incluyen los motivos y las intenciones de sus agentes actuando en un contexto determinado.

El contenido

Los hechos históricos elegidos por cada uno de los autores corresponden a etapas distintas del desarrollo de la sociedad mexicana en el siglo XX y, dado que lo hemos concebido como un proceso, elegimos presentarlo cronológicamente con el fin de ubicar a los lectores en una línea de tiempo que lo remita a referentes conocidos.

Es muy importante señalar que los investigadores presentan el producto de sus búsquedas, tanto en fuen-

tes de primera mano como son archivos y documentos, en fuentes hemerográficas y en investigaciones ya realizadas de las cuales retoman discusiones y a partir de la cuales presentan nuevos debates.

Arturo Grunstein se propone mejorar nuestra comprensión de la expropiación petrolera realizada 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas, sin duda importante acontecimiento histórico, por medio de un análisis en el que se busca equilibrar las fuerzas estructurales con la voluntad de los actores.

En el fondo de esta reflexión se encuentran dos problemas centrales del conocimiento histórico:

1. El primero es cómo interpretar el sentido de las acciones de las personas en el pasado desde la perspectiva privilegiada del presente, es decir, de alguien que ya sabe lo que aconteció. ¿Acaso la forma en que se dieron los acontecimientos era inevitable?
2. El segundo se trata de ponderar el peso de las condiciones que impone el contexto histórico, es decir, las circunstancias heredadas (o las “estructuras”, a decir de algunos investigadores) sobre el margen de maniobra o la voluntad de los actores o personajes de la historia (los “agentes” como le suelen llamar los mismos estudiosos). La expropiación del petróleo por el gobierno cardenista, nos ofrece una valiosa oportunidad para tratar de examinar la forma en que las condiciones históricas heredadas interactúan con la voluntad de los personajes en el desarrollo de un proceso o acontecimiento histórico. Como ya se

ha señalado, en las explicaciones existentes se le ha prestado insuficiente atención a las condiciones que empujaron y al mismo tiempo permitieron llevar a cabo la expropiación. Por otro lado, sería un error eliminar del entramado a los individuos, incluyendo al presidente, ya que finalmente ellos fueron los que, personal y colectivamente, tomaron las decisiones que a la postre se volvieron históricas. Los individuos no somos capaces de moldear las fuerzas de la historia enteramente a nuestro gusto, pero tampoco somos meramente sus peones (además de que, desde luego, hay de individuos a individuos).

Elsa Muñiz presenta un recorrido por el proceso que condujo a la obtención del sufragio universal femenino en México. Dicho proceso, poco difundido en las lecciones de la historia contemporánea de nuestro país dirigidas a estudiantes, es un buen ejemplo para analizar la participación de diversos sectores sociales, en particular los que tradicionalmente se omiten por no considerarse de relevancia. La autora se remonta a las últimas décadas del siglo XIX en las que comienza la inquietud de algunas mujeres por la obtención de derechos civiles, incluido el voto y transita por los momentos más significativos de la lucha sufragista en nuestro país, hasta llegar al año 1953 en el que se aprueba la iniciativa que modificaba el artículo 34 constitucional. A lo largo del texto, la autora plasma la relación que se establece entre los sujetos, protagonistas de los procesos narrados, y el contexto que hace posible que las decisiones de algunos

gobernantes funcionen como parteaguas en dichos procesos históricos como es el caso de la obtención de la ciudadanía por parte de más del 50% de la población mexicana.

Marco Antonio González analiza de manera minuciosa la crisis política y social que impactó la vida nacional en el año de 1994. El autor señala que la historia de México es prolija en ejemplos de esos fenómenos genéricamente denominados crisis, los cuales podemos definir como procesos generadores de desestabilización en un ámbito específico como el económico, el político, o el social, es decir, las crisis usualmente inciden en mayor medida en un sector específico de la totalidad social, lo que nos permite hablar de crisis políticas, económicas o sociales. Siendo la realidad sociohistórica una totalidad en el que las diversas estructuras políticas, económicas y sociales se encuentran estrechamente interrelacionadas, interinfluyéndose y formando parte de un todo, las crisis siempre afectan a todos los diversos niveles de la realidad social, aunque no a todas las estructuras con la misma intensidad, por tanto, las crisis se presentan generalmente como fenómenos disruptivos que afectan con más fuerza a un campo sociohistórico específico.

Armando Cisneros, por su parte, aborda las causas del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Para ello recupera la historia de la toma de tierras en Chiapas y en particular en la zona Lacandona, así como a las diferentes formas de interacción que han tenido los indígenas con las autoridades,

los grandes propietarios de tierras y la Iglesia. El levantamiento neozapatista aparece así como culminación de una serie de rupturas entre los indígenas y las estructuras institucionales.

Finalmente, nos gustaría señalar que éste es el primer producto de un esfuerzo colectivo por proporcionar conocimiento histórico significativo a los estudiantes a partir del *Seminario Interdepartamental de Investigación Docente* que funciona de manera permanente desde el año 2003 en la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

Seminario Interdepartamental de Investigación Docente
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Primavera, 2008

Capítulo I

La decisión del Tata: Voluntad, proceso y contexto en la expropiación del petróleo

*Arturo Grunstein Dickter**

18 de marzo.

En el acuerdo colectivo celebrado hoy a las 20 horas comuniqué al Gabinete que se aplicará la ley de expropiación a los bienes de las compañías petroleras por su actitud rebelde, habiendo sido aprobada la decisión del Ejecutivo Federal.

A las 22 horas di a conocer por radio a toda la Nación el paso dado por el gobierno en defensa de su soberanía reintegrando a su dominio la riqueza petrolera que el capital imperialista ha venido aprovechando para mantener al país dentro de una situación humillante.¹

Estas son las palabras que escribió el Presidente Lázaro Cárdenas en su libreta de apuntes, probablemente a unas cuantas horas de haber firmado el acuerdo colectivo y dirigido su famoso “Mensaje a la nación” desde su despacho del Palacio Nacional, en donde se sabe permaneció hasta la madrugada del día siguiente. Con la

* Profesor-Investigador del Departamento de Sociología de la UAM-Azcapotzalco.

¹ Lázaro Cárdenas. *Apuntes autobiográficos*. Vol. I, p. 390.

rúbrica del documento y su anuncio transmitido por las ondas sonoras – al que el embajador de los Estados Unidos Josephus Daniels calificó como la irrupción de un “rayo en el cielo azul” (es decir despejado) – culminaba el conflicto que habían entablado los líderes y políticos revolucionarios con las empresas petroleras extranjeras por aproximadamente dos décadas.

Desde aquel momento histórico, de una u otra manera, generación tras generación de ciudadanos mexicanos hemos aprendido que la expropiación del petróleo fue el desenlace esperado de las políticas enérgicas de reivindicación a favor de los intereses populares (obreros y campesinos) y nacionales de la Revolución Mexicana que llegaron a su cumbre durante el cardenismo. Desde esa perspectiva tradicional, cualquier otro curso de acción hubiese representado una claudicación inaceptable e inconcebible para un líder revolucionario de la talla del “Tata” Cárdenas. Se trataba en buena medida, pues, de un final anunciado.

La magnitud de la expropiación del petróleo por parte del gobierno mexicano no se puede menospreciar. No es muy aventurado considerar que constituye un acontecimiento de relevancia no sólo para la historia de México, sino también para la de Latinoamérica y, quizá, del mundo entero. Así, por ejemplo, al nacionalizar el petróleo iraní en 1951, Mohammed Mussadeq buscó y recibió el apoyo de Cárdenas.² Aún en nuestros días, al-

² Mary Ann Heiss. *Empire and Nationhood. The United States, Great Britain and Iranian Oil, 1950-1954*, p. 109.

gunos líderes sudamericanos ocasionalmente invocan la expropiación mexicana y la figura del general michoacano al realizar actos similares.

Como bien señalaba retrospectivamente uno de los personajes del gobierno mexicano que vivieron de cerca el proceso: “Expropiar es cosa que se dice fácilmente, pero no que se hace tan fácilmente como se dice; ni menos tratándose de toda una industria, de una industria vital, mundialmente importante y constituida en su 95% por empresas extranjeras, de capital nada menos que inglés y norteamericano...Eran empresas, ya desde entonces genuinamente transnacionales.”³

Quizá nunca antes, un gobernante de un país atrasado se había atrevido a desafiar a un grupo tan poderoso de intereses económicos de las naciones avanzadas. Obviamente, el presidente y los miembros de su gabinete estaban plenamente conscientes de la trascendencia histórica de sus acciones. Según testimonios, al firmar los acuerdos colectivos, el Secretario de Relaciones Exteriores Eduardo Hay, expresó “en voz alta y solemne”: “Señores: estamos firmando el acta de la Segunda Independencia de México.”⁴

Sin embargo, la mayoría de los libros de texto explican bastante poco sobre el proceso que condujo en aquellos días de mediados de marzo de 1938, a la decisión por parte del presidente para finalmente llevar a cabo la

³ Gustavo Corona. *Lázaro Cárdenas y la expropiación de la industria petrolera en México*, p. 1.

⁴ *Ibidem.* p. 2.

nacionalización. Así pues, en este ensayo me propongo mejorar nuestra comprensión de este, sin duda, importante acontecimiento histórico, por medio de un análisis en el que se busca equilibrar las fuerzas estructurales con la voluntad de los actores.

En el fondo de esta reflexión se encuentran dos problemas centrales del conocimiento histórico:

1. El primero es cómo interpretar el sentido de las acciones de las personas en el pasado desde la perspectiva privilegiada del presente, es decir, de alguien que ya sabe lo que aconteció. ¿Acaso la forma en que se dieron los acontecimientos era inevitable?
2. El segundo se trata de ponderar el peso de las condiciones que impone el contexto histórico, es decir, las circunstancias heredadas (o las “estructuras”, a decir de algunos investigadores) sobre el margen de maniobra, o la voluntad de los actores o personajes de la historia (los “agentes” como le suelen llamar los mismos estudiosos).

A través de mi trabajo como profesor universitario he encontrado que uno de los retos a la vez más complicados y fascinantes de la enseñanza y aprendizaje de la historia es el de transmitirle a mis estudiantes la profunda complejidad de las alternativas entre las que los personajes del pasado tenían que elegir, y la naturaleza difícil y por lo común muy incierta de las situaciones a las que se enfrentaban. En ocasiones, es también verdad que las opciones se ven muy limitadas o parecen redu-

cirse a la posibilidad de una sola, ya sea desde la perspectiva de los que están decidiendo sobre el escenario de la historia o, incluso, de aquellos que los contemplan con visión retrospectiva.

Lo anterior es cierto para el suceso que aquí nos concierne: la expropiación del petróleo por el gobierno cardenista. Veremos cómo su análisis nos ofrece una valiosa oportunidad para tratar de examinar la forma en que las condiciones históricas heredadas interactúan con la voluntad de los personajes en el desarrollo de un proceso o acontecimiento histórico. Como ya se ha señalado, en las explicaciones existentes se le ha prestado insuficiente atención a las condiciones que empujaron y al mismo tiempo permitieron llevar a cabo la expropiación. Por otro lado, sería un error eliminar del entramado a los individuos, incluyendo al presidente, ya que finalmente ellos fueron los que, personal y colectivamente, tomaron las decisiones que a la postre se volvieron históricas. Los individuos no somos capaces de moldear las fuerzas de la historia enteramente a nuestro gusto, pero tampoco somos meramente sus peones (además de que, desde luego, hay de individuos a individuos).

Tres factores “estructurales” y “coyunturales”

En tiempos recientes, han aparecido algunos estudios académicos muy interesantes, los que revelan con claridad la tensión entre voluntad y contexto en el proceso

histórico del conflicto petrolero. Entre éstos, destacan los del historiador estadounidense Jonathan Brown.⁵

En distintos trabajos, Brown insiste en que “para explicar cómo sucedió la expropiación del petróleo hay que considerar tan sobresaliente hecho en sus contextos estructural y de coyuntura.” ¿Cuáles son para Brown los aspectos estructurales? Pese a lo intimidante que puede resultar el concepto, en realidad Brown ofrece una definición muy clara de su significado para fines del tema que analiza en sus estudios. Así, explica que “la transformación de la industria dentro de la economía nacional e internacional proporcionó sus elementos estructurales,” aunque también entrarían aquí, como el mismo lo indica, los cambios en la economía nacional. Vale la pena aclarar: en la situación de la industria y sus cambios influyeron factores tales como el tamaño de las reservas disponibles, los costos de extracción y distribución, la demanda externa e interna, los precios, los ciclos de crecimiento o contracción económica, la carga impositiva, etc.

Ya vimos que Brown también considera el papel que jugaron los coyunturales. ¿Qué entiende este historiador por éstos? Nuevamente es bastante preciso al respecto: “Los factores de coyuntura –nos dice– se explican en

⁵ Jonathan C. Brown. “The structure of the foreign-owned petroleum industry in Mexico, 1880-1938”, pp. 1-35; “Empresa y política: cómo y porqué se nacionalizó la industria petrolera”, pp. 317-342 y *Oil and Revolution in Mexico*.

las diferencias peculiares con que las compañías condujeron sus relaciones con el Estado y por la reacción extraordinaria de los obreros a las condiciones cambiantes en su lugar de trabajo”.

Para los propósitos de nuestra reflexión resulta muy interesante el hecho de que para Brown la expropiación haya sido, por lo menos “hasta cierto punto”, “un suceso imprevisto”, es decir, que “no había sido planeada de antemano ni en la Constitución de 1917 ni en el Plan Sexenal de 1934 ni por Cárdenas.”

Con base en su perspectiva analítica, la que, como ya hemos indicado, privilegia el papel de los factores estructurales y coyunturales, Brown intenta reinterpretar y explicar el significado de la nacionalización. Al hacerlo se centra en el desarrollo de la industria, el Estado mexicano y los obreros del sector, así como en la forma en que estos tres elementos interactuaron a través del tiempo para finalmente llegar a la expropiación cardenista.

“¿Qué pasó?” Se pregunta de entrada, y contesta:

...en 1920 las compañías extranjeras, el Estado mexicano y los trabajadores petroleros estaban por entrar a un cauce que los llevaría directamente a la colisión. Este cauce consistía de tres avenidas separadas pero que, ocasionalmente se entrecruzaban. Vamos a analizar cada una de ellas. La primera se relacionaba con la situación cambiante de la industria petrolera dentro de la economía mexicana. En la segunda exploraremos la evolución de las relaciones entre el gobierno y la(s) compañía(s). Finalmente, la tercera ave-

nida se refiere a la creciente militancia entre los trabajadores mexicanos del petróleo.⁶

Y luego añade: “No sería justo para la complejidad de nuestra historia separar los tres componentes de esta manera, porque el desenlace de las compañías petroleras en México —el 18 de marzo de 1938— fue más bien una progresión continua que un cruce accidental de tres trayectorias separadas”.⁷

Veamos ahora con un poco de más detenimiento la forma en que Brown va tejiendo su explicación histórica “estructural —coyuntural”, en la que se entrelazan la evolución de estas tres fuerzas:

1. La evolución de la industria y las empresas.
2. La posición de los gobiernos posrevolucionarios.
3. La situación de los obreros, sus organizaciones y las relaciones laborales.

La evolución de la industria y las empresas

Los orígenes de la industria extractiva del petróleo en México se remontan a la última década del porfiriato. Entre fines del siglo XIX y principios del XX, como resultado del aumento de la actividad económica, se incrementó el consumo de productos derivados del petróleo,

⁶ Jonathan C. Brown. “Empresa y política: cómo y porqué se nacionalizó la industria petrolera”. p. 319.

⁷ *loc. cit.*

sobre todo de kerosene para lubricación e iluminación, para luego incluir también los combustibles utilizados principalmente por las locomotoras del ferrocarril. Hasta los últimos años del porfiriato, la mayor parte del petróleo se importaba como crudo y se refinaba en las plantas localizadas en la Ciudad de México, Monterrey y Tampico operadas por una empresa estadounidense llamada *Waters Pierce Co. de St. Louis*. Esta compañía, propiedad del magnate estadounidense Henry Clay Pierce, gozaba de varias ventajas arancelarias para no tener que competir con artículos similares elaborados en otros países. A partir de 1902-1904, Pierce fue poco a poco perdiendo el monopolio del mercado mexicano, cuando la empresa del estadounidense Edward Doheny, la *Mexican Petroleum Company*, comenzó a extraer crudo mexicano en el Ebanito ubicado en la zona de la Huasteca. En un principio, Doheny se dedicó a elaborar combustible para los ferrocarriles y asfalto para el mercado mexicano, pero con el descubrimiento de abundantes yacimientos en 1910, comenzó a exportar los excedentes (o sea, la producción que superaba a lo que podía vender en México) a través de un contrato de distribución con el gigantesco trust de Rockefeller, *Standard Oil*. Preocupado por las conexiones entre Doheny y los Rockefeller, el gobierno de Porfirio Díaz le otorgó una concesión para la explotación de varios terrenos en dos zonas: Tuxpan y el Istmo de Tehuantepec, a la compañía recién formada llamada El Águila perteneciente a un contratista británico Weetman Pearson (también conocido por su título nobiliario como Lord Cowdray). Las perforaciones condujeron a

la explotación de dos riquísimos pozos –Dos Bocas y El Potrero del Llano– y a que El Águila de Cowdray pronto se convirtiera en un peligroso rival para las empresas estadounidenses. Así pues, al caer el presidente Díaz, la estructura de la industria petrolera mexicana había transitado de las importaciones a las exportaciones y del monopolio (control del mercado por una sola empresa) al oligopolio (competencia entre un número reducido de empresas).

Pese a la violencia de la lucha armada revolucionaria, entre 1911 y 1920, la industria petrolera mexicana atravesó por un ciclo de crecimiento impresionante. A ello ayudó el que la mayor parte de los pozos se encontraran cerca de las costas y en zonas alejadas, incluso relativamente aisladas, de los sitios donde se dieron los grandes enfrentamientos militares. En la zona petrolera más importante, la franja desde Tuxpan a Tampico, un caudillo y líder revolucionario local, el general Manuel Peláez pactó con las empresas para que a cambio de protegerlas aquellas le dieran recursos para adquirir pertrechos y mantener sus huestes. El estallido de la primera guerra mundial y la conversión de las flotas de los países beligerantes del carbón al petróleo, condujo a un aumento significativo de la demanda y de los precios para las exportaciones de hidrocarburos de México, sobre todo a partir de 1916. Estas condiciones atraieron el flujo de capitales hacia los campos petroleros de nuestro país y llevaron al establecimiento de numerosas empresas de distintas magnitudes, algunas auténticas corporaciones

multinacionales otras de menor escala, incluso pequeñas operaciones individuales.

Mientras la *Waters-Pierce* declinaba, El Águila de Cowdray y la *Mexican Petroleum* de Doheny ampliaban y consolidaban sus respectivas posiciones. Por otra parte, nuevos consorcios, en su mayoría estadounidenses, incluida la poderosa *Standard Oil* de Nueva Jersey, pero también europeas e igualmente importantes como la anglo-holandesa *Royal Dutch Shell*, no podían dejar pasar la oportunidad de hacerse de su propia tajada del abundante oro negro mexicano. Entre 1912 y 1918 las últimas obtuvieron acceso al crudo de nuestro país, sobre todo de la zona de Faja de Oro en las riberas del Río Pánuco, ya sea a través de la organización de nuevas empresas (por ej. "La Corona" de *Shell*) o la adquisición de otras más chicas como fue el caso, por ejemplo, de la compra de la Transcontinental por parte de *Jersey Standard*.

Este dinámico desarrollo se dio en un contexto en el que, aprovechando las ventajas del colapso del Estado mexicano, la abundante mano de obra al ser expulsada de las regiones centrales, así como también la debilidad relativa de los sindicatos, las compañías gozaron de un grado excepcional de autonomía. En otras palabras, en estos primeros años de bonanza, sin estar inmunes, las empresas no sufrieron un grado considerable de interferencia en sus actividades ni por parte del gobierno ni tampoco de las organizaciones obreras.

Enseguida, Brown destaca el colapso de la producción global en la industria en los años veinte. Luego de alcanzar su ápice en 1920-21, la extracción fue disminu-

yendo gradualmente hasta 1923, se recuperó un poco entre 1924-1925, para luego desplomarse de nuevo en el último quinquenio de la década. El agotamiento de los pozos, causado en parte por la invasión de agua salada, se agravó de forma significativa por la disminución de los precios en los mercados internacionales (el costo de un barril cayó 45% entre 1920 y 1921 hasta los \$1.73 dólares para luego precipitarse a \$1.17 en 1928) así como también por la retirada, casi podría decirse estampida, de las inversiones de las grandes compañías estadounidenses y europeas hacia los recién descubiertos campos venezolanos. En consecuencia, para, 1929, Venezuela ya había desplazado a México como tercer productor a nivel mundial, mientras que nuestro país descendió hasta el séptimo puesto. El telón estaba cayendo sobre el escenario de la primera bonanza petrolera en la historia de México.

La respuesta de las compañías al declive de los precios y a la debilidad creciente de sus operaciones en México fue, como suele suceder en situaciones similares, realizar una serie de fusiones y consolidaciones. Cuando se achican los mercados es común que las empresas busquen repartírselos entre menos contendientes. El primer paso ya lo había dado El Águila al formalizar su unión con la multinacional *Shell* en 1919. Por su parte Doheny primero vendió el control de la Huasteca a la *Standard Oil* de Indiana, la cual a su vez le transfirió la propiedad a su hermana mayor, la gigante de Nueva Jersey, en 1932.

No todas las empresas se vieron afectadas de igual manera por la crisis y sus secuelas. Así, la Compañía El Águila, la cual como ya se ha señalado había tenido el liderazgo del sector, iba perdiendo cada vez más terreno tanto en el control de yacimientos, refinación, exportación, como en las ventas al mercado nacional, frente a sus rivales estadounidenses, principalmente la Huasteca de Doheny. En la medida que se reactivaba el crecimiento de la economía mexicana, la demanda doméstica de gasolina aumentaba también, pero en ese momento las empresas estadounidenses, aún se encontraban mejor posicionadas que la británica para abastecer dicho consumo.

Mientras tanto, como hemos visto, México estaba quedando marginado del mercado mundial. A fines de la década, la industria, y en particular la compañía El Águila tuvo un breve respiro. La asociación de esta última con la *Shell*, le permitió introducir tecnología de vanguardia para descubrir en 1929 nuevos y ricos campos en la región de Poza Rica, los cuales en pocos años llegarían a cubrir la tercera parte de la producción total de México.

La producción volvió a descender como consecuencia de la crisis de la Gran Depresión. No obstante, México “se recuperó bastante pronto”. Los estímulos para la reactivación de la economía nacional fueron internos. La implementación de un ambicioso programa de construcción de carreteras y el crecimiento de la industria por sustitución de importaciones incrementaron la demanda de combustibles. Para 1937, el 70% de la pro-

ducción de petróleo mexicano era consumido en el país y, luego de ser superada por sus rivales estadounidenses por espacio de algunos años, El Águila había retomado el liderazgo del sector.

En resumidas cuentas, hacia principios de los años treinta, la estructura de la industria nuevamente había atravesado por cambios importantes. En primer lugar, la propiedad se había consolidado al grado de que dos grandes consorcios – la *Shell* asociada al Águila y seguida por la *Jersey Standard* ahora en control de la Huasteca – dominaban la producción y distribución de nuestro petróleo. En segundo lugar, México había dejado de ser un productor significativo en los mercados internacionales. En tercer lugar, la creciente importancia del mercado nacional le permitió al gobierno tener mayor injerencia reguladora de las operaciones de la industria. Finalmente, el frente de las empresas se encontraba cada vez más dividido, porque los intereses de El Águila, ligados casi exclusivamente a la producción y distribución en México, divergían de los de *Jersey Standard*, con su presencia menguante en México y su proyección cada vez más internacional. Ya que la presencia de la última en nuestro país había disminuido de forma bastante significativa, sus preocupaciones se centraban en las repercusiones que podrían tener las políticas económicas nacionalistas mexicanas en otros países como Venezuela, donde sus inversiones estaban aumentando.

Con respecto a este primer factor, es decir la evolución de la estructura de la industria, Brown concluye de la forma siguiente:

¿Qué elementos dentro de esta tendencia presagiaban la expropiación? **Ninguno de ellos por sí mismo.** Pero es bastante claro que la marginación internacional de la industria mexicana y la creciente importancia del mercado nacional concedieron al gobierno una influencia adicional sobre las compañías petroleras. Por otra parte, el resultado específico de las tendencias en la producción y consolidación colocaron a la empresa El Águila en la posición más elevada dentro de la industria, mientras que los intereses estadounidenses, dirigidos por la *Standard Oil* de New Jersey, quedaban en una segunda posición. **Las características aquí mencionadas cimentaron la base de los cambios en las relaciones de las compañías extranjeras con el gobierno y los trabajadores.**⁸

La posición de los gobiernos posrevolucionarios

El segundo proceso que contempla Brown en su análisis, consiste en la posición cambiante del gobierno en relación a los consorcios petroleros extranjeros desde principios de los años veinte hasta el momento de la expropiación.

Al llegar al poder, los líderes revolucionarios triunfantes se encontraban muy urgidos de recursos, pero, como resultado de casi diez años de guerras civiles, la economía se encontraba postrada y las fuentes fiscales eran bastante escasas. Difícilmente, se podía exigir y obtener

⁸ *Ibidem.* p. 325.

recursos de haciendas, industrias y comercios en quiebra. Por las razones que ya hemos explicado, el sector del petróleo era la excepción. Así que, Carranza y luego los sonorenses (De la Huerta, Obregón y Calles) intentaron obtener una porción de las inmensas ganancias de la industria más próspera que operaba en aquel entonces en el país. Con ese propósito pugnaron por incrementar el control del naciente estado posrevolucionario sobre la industria del petróleo basándose en el derecho de propiedad de la nación sobre el subsuelo establecido en el artículo 27 de la Constitución. Por su lado, al responder a estas iniciativas, las empresas se resistieron tenazmente a renunciar a sus derechos previamente adquiridos por distintos medios, incluyendo la formación de una asociación de productores, para defender sus intereses así como para cabildear la protección por parte de sus gobiernos de origen. Los estadounidenses con *Standard Oil* de Nueva Jersey a la cabeza estaban particularmente consternados por la inminente aplicación retroactiva de la legislación, ya que a diferencia de El Águila, habían adquirido, principalmente a través de arrendamientos, la mayor parte de sus terrenos después de mayo de 1917.

En este marco, en febrero de 1918, el “Varón de Cuatro Ciénegas” trató de obligar a las empresas a que, independientemente del momento en que habían recibido sus concesiones, solicitaran autorización del gobierno federal para seguir operando. Poco después varias acciones del presidente Álvaro Obregón hostigaron a las compañías petroleras. Luego de neutralizar militarmente a Peláez, el gobierno del “manco de Celaya” emitió

una serie de concesiones para la explotación de pozos a los Ferrocarriles Nacionales de México y a algunos pequeños productores independientes en tierras que eran consideradas como federales (sobre todo aledañas a las riberas) por el gobierno y de propiedad exclusivamente privada por parte de las grandes compañías. Además Obregón insistió en que las empresas estaban obligadas a solicitar “concesiones confirmatorias de perforación” tratándose en muchas ocasiones de nuevos pozos localizados en zonas de explotación viejas y que entraban en el marco de los contratos de concesión anteriores a 1917. Pero el enfrentamiento más importante se dio en 1921 en torno a un nuevo impuesto a las exportaciones, el que según las empresas violaba los términos de los contratos preconstitucionales. Pese a una huelga patronal desatada por iniciativa de los estadounidenses que tuvo como resultado inmediato el cierre de más de la mitad de la industria y llevó al despido de miles de trabajadores, las compañías finalmente cedieron y las tasas impositivas a las exportaciones aumentaron. Sin embargo, las presiones económicas, diplomáticas y militares ejercidas sobre el gobierno de Obregón hicieron efecto, ya que a cambio del reconocimiento de Washington, en las Conferencias de Bucareli se comprometió a no afectar las concesiones obtenidas antes de la entrada en vigor de la Constitución. Lo anterior, no resultó de mucho alivio para la *Standard Oil* de Nueva Jersey ya que los yacimientos que había adquirido antes de 1917 se estaban agotando rápidamente, y su principal filial en México, la Transcontinental había optado por suspender sus planes

de expansión después de ese año hasta que se aclarara el panorama político y legal.

Al llegar a la presidencia en 1924, Plutarco Elías Calles estaba decidido a aumentar el dominio de la nación sobre la industria petrolera. El 31 de diciembre de 1925, se promulgó una nueva ley que obligaba a todas las empresas a solicitar concesiones confirmatorias. Además, la ley propuesta por el ejecutivo nacionalizaba los derechos del subsuelo que aunque fuesen propiedad privada antes de 1917, hubieran sido arrendados después. “Los competidores de *Standard Oil* de Nueva Jersey –La Huasteca y El Águila– tenían razones para estar satisfechos: contaban con numerosos contratos de arrendamiento previos a 1917, y sus rutinarias protestas sólo aludían a los impuestos.”

Por lo anterior, el frente de las empresas se escindió aún más, y la compañía inglesa incluso decidió abandonar la Asociación formada entre todas unos cuantos años antes con el propósito de defenderse de las acciones del gobierno. Mientras tanto se aceleraba el declive de la producción mexicana. Hacia fines de 1927, el gobierno suavizó su posición gracias en parte a la oportuna intervención del embajador de los Estados Unidos Dwight Morrow. Este último negoció un compromiso con el presidente Calles basado en dos arreglos fundamentales: 1. los campos adquiridos antes de 1917 no serían por ningún motivo sometidos retroactivamente a la nacionalización del subsuelo. 2. Las cuestiones restantes relacionadas con el petróleo se resolverían en los tribunales locales.

Por iniciativa de Calles, el Congreso mexicano reformó la Ley del Petróleo de acuerdo a estos principios. Pero aún así, la *Standard Oil* de Nueva Jersey insistió en que las condiciones impuestas por el nuevo acuerdo, aunque de cierta manera habían mejorado con respecto a la Ley de 1925, seguían siendo bastante desfavorables para sus intereses. Ante este panorama, en 1929 finalmente clausuró las operaciones de su principal filial en México, la Trancontinental. Por su parte, El Águila “aceptó a regañadientes el acuerdo Calles-Morrow” y prefirió, pese a los inconvenientes que prevalecían en el nuevo marco legal, mantener su posición en México. De hecho, pocos años después de reformada la ley, El Águila comenzó a producir en los nuevos campos de Poza Rica. Así pues, la transigencia hacia el gobierno desplegada por la compañía británica le redituó en el corto plazo, pero también contribuyó a ensanchar la brecha con sus colegas estadounidenses y, en consecuencia, a debilitar la capacidad de presión y negociación de la industria en su conjunto. Al mismo tiempo, el poder del Estado posrevolucionario iba en aumento. Poco pudieron hacer las corporaciones frente a las demoras frecuentes de las autoridades mexicanas en el otorgamiento de permisos de perforación. Las quejas y reclamos aislados, sobre todo de los consorcios estadounidenses, de que no se estaban respetando los acuerdos “Calles-Morrow”, no surtieron los efectos esperados.

A medida que aumentaba la importancia del mercado nacional en relación a las exportaciones, lo hacía también la capacidad fiscal (es decir, para introducir y

recaudar impuestos) y regulatoria (o sea, para fijar los precios de los productos del petróleo) del Estado mexicano. Esto se hizo evidente cuando a fines de 1934, es decir, recién inaugurado, el gobierno cardenista logró impedir que El Águila subiera el precio de la gasolina. La decisión de esa compañía se entiende a la luz de la dependencia creciente del consumo doméstico de sus productos y de la buena voluntad de las autoridades para seguir explotando los yacimientos de Poza Rica, así como del distanciamiento político de sus competidores estadounidenses. En 1937, para asegurarse de la confirmación y extensión de sus contratos de concesión por parte del gobierno mexicano, la misma compañía accedió a pagar regalías de hasta 25 y 35% de su producción de Poza Rica. “¿Qué le importaba a El Águila?”, si al fin, como indica Brown, “no tenía propiedades en Venezuela, México era su única área de operación, y el acuerdo permitía el crecimiento de sus actividades internas.”

Por el lado de las empresas estadounidenses, aunque sus intereses directos en México habían declinado notoriamente, para *Standard Oil* y los otros consorcios de ese país, lo que ocurría con las políticas de nuestro país importaba en la medida en que podía servirle como modelo a otros gobiernos, principalmente al de Venezuela. Así, como Brown explica claramente,

En realidad lo que los políticos mexicanos consideraron como una necesidad fiscal era interpretado como nacionalismo por las compañías petroleras. Pronto, los funciona-

rios del gobierno mexicano también empezaron a ver estas cuestiones en términos nacionalistas. Fueron arrastrados a este punto de vista por las quejas constantes de los petroleros ante el previo intento de confiscación de sus bienes, la crítica incesante de los ejecutivos respecto a la santidad de los contratos, y el rechazo de las compañías extranjeras a cualquier compromiso y ante cada nuevo impuesto. Fueron en particular los petroleros estadounidenses quienes hicieron estas cosas porque –naturalmente México ya no era importante para ellos (excepto como un ejemplo).⁹

Según Brown, el presidente Cárdenas tenía intenciones de llegar a un acuerdo similar al de El Águila con la Huasteca (la cual, para ese momento ya era propiedad de la *Standard Oil* de Nueva Jersey). Pero no lo lograría. Por las razones expuestas, a diferencia de la británica, a la corporación estadounidense ni le convenía ni tampoco le interesaba un arreglo de esa naturaleza en México. Aún más importante fue el hecho de que los sindicatos “estaban elaborando sus propias demandas.”

La situación de los obreros, sus organizaciones y las relaciones laborales

El tercer y último factor “estructural-coyuntural” que examina Brown es el ascenso de las organizaciones y militancia de los trabajadores petroleros y su capacidad

⁹ *Ibidem.* p. 331.

creciente para impulsar sus demandas ante las compañías y el gobierno. Los primeros esfuerzos de organización y movilización de los petroleros tuvieron lugar en medio de la etapa armada de la revolución y de la concomitante primera bonanza. En 1914, los obreros, principalmente los más calificados de las refinerías Tampico y Minatitlán, exigieron aumentos salariales importantes para hacer frente a la escalada en el costo de la vida causado por el impacto económico de la revolución y la escasez de ciertas importaciones por el inicio de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, pese a sus “altísimas ganancias”, en un principio las compañías extranjeras se rehusaron a ceder frente a las pretensiones de sus empleados. En respuesta, surgieron los primeros esfuerzos de organización de sindicatos. Una serie de huelgas entre 1916 y 1917 obligó a las empresas a incrementar los salarios, reducir las horas de trabajo y mejorar las prestaciones. El auge de la industria les permitió hacer frente a estas reivindicaciones sin poner en riesgo su rentabilidad.

La situación dio un giro radical en los primeros años de la década de los veinte. Como era de esperarse no sólo las compañías sino también los trabajadores sufrieron los estragos del agudo declive de la industria a partir de 1921. A medida que se derrumbaban los precios y la producción, disminuyeron los sueldos y aumentaron los despidos, sin que los trabajadores ni sus organizaciones pudieran hacer nada para impedirlo.

Un par de años después la situación se había modificado al darse una ligera y transitoria recuperación del

mercado del petróleo y de la industria mexicana. Entre 1923-1925, los trabajadores aprovecharon esta oportunidad para fortalecer sus organizaciones y presionar para conseguir mejores salarios y seguridad en el empleo. Al hacerlo, por lo general, contaron con el apoyo de las autoridades federales y estatales (el gobernador de Veracruz Adalberto Tejeda era un político de inclinaciones socialistas que simpatizaba con su causa). Así, por ejemplo, en 1924, los trabajadores de la refinería de El Águila en Minatitlán se declararon en huelga exigiendo entre otras cosas, que la compañía respetara sus nuevos derechos de acuerdo a lo establecido en el artículo 123 de la Constitución. Aunque, los ejecutivos estadounidenses instaron a los británicos a que resistieran, El Águila terminó por ceder. Las consecuencias fueron evidentes. Pocos meses después, los trabajadores de la Huasteca exigieron condiciones similares y suspendieron labores en las instalaciones de la empresa de Doheny. En primera instancia los obreros de la Huasteca consiguieron unificarse en un sólo sindicato pero al radicalizar sus demandas perdieron el apoyo del gobierno y fueron derrotados en una segunda huelga. Aún así, Brown argumenta que el saldo de la ascendente militancia sindical de la segunda mitad de la década fue positivo para los trabajadores. Sin embargo, no pudieron gozar de sus logros por mucho tiempo:

...la depresión internacional y la caída mundial de los precios nuevamente debilitaron a los sindicatos petroleros. Las compañías respondieron con despidos y reducción de

suelos. Al principio los trabajadores estaban desorientados por el continuo decaimiento de la industria, y sus líderes encontraron poco apoyo para huelgas y acciones laborales...los sindicatos se desintegraron...En 1932, el número de trabajadores petroleros llegó a su punto más bajo: tal vez solamente 13 mil obreros habían quedado de los más de 50 mil empleados en la industria en 1921.¹⁰

Una vez más, con el inicio de un nuevo ciclo expansivo a partir de 1933, la situación de los trabajadores se volvió más favorable. Las compañías necesitaban mano de obra y eso pronto contribuyó a mejorar la posición negociadora de los sindicatos. En 1934, estalló nuevamente una huelga en la refinería de Minatitlán, en la que se unieron seis sindicatos diferentes y “fue una prueba decisiva de resolución laboral”. El presidente en turno, Abelardo Rodríguez fungió como intermediario entre los sindicatos y la empresa, concediéndole al fin a los primeros “un número decisivo de prestaciones”, entre las que se encontraban: la igualación de los sueldos y condiciones de trabajo de los empleados de la refinería y de los campos petroleros en la zona del Istmo; la aceptación de la “cláusula de exclusión” en los contratos mediante la cual los sindicatos ahora controlaban el empleo de nuevos trabajadores y los despidos que consideraran convenientes mediante la exclusión de su organización. “Sindicato tras sindicato, de inmediato, se

¹⁰ *Ibidem.* p. 336.

declararon en huelga para conseguir las mismas concesiones.”

Al llegar al poder Cárdenas, recibió el apoyo de los sindicatos petroleros en el conflicto que entabló y del cual finalmente salió victorioso al expulsar del país al “jefe máximo” Calles. Con el apoyo de esta alianza, en 1936 el gremio de El Águila impulsó la unificación de todas las organizaciones obreras del sector, para formar el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

Con el fin de afianzar su poder, en la primavera de 1937 los líderes del STPRM necesitaban la firma de un nuevo contrato colectivo único para toda la industria, y convocaron una huelga. Entre las demandas se incluía un aumento considerable de salarios, la igualdad de condiciones para mexicanos y extranjeros, y mayor control sindical sobre los asuntos administrativos de las empresas.

El resto de la trama es bien conocido. A partir de ese momento, cambió la balanza del poder entre los obreros y el Estado mexicano por un lado y las empresas extranjeras por el otro, al tiempo que la intensidad del conflicto iba *in crescendo*. Los sucesos se precipitaron uno tras otro hasta llegar al clímax del 18 de marzo: el fracaso de la negociación de un nuevo contrato colectivo de trabajo y el estallido de la huelga, el 31 mayo de 1937; la suspensión del paro con base en la declaración de “conflicto económico” el 9 de julio; la conclusión de la investigación del comité de expertos estableciendo la capacidad de las empresas para hacer frente a las de-

mandas sindicales en agosto; la decisión de la Junta de Conciliación y Arbitraje a favor de las recomendaciones del mencionado comité el 18 de diciembre; la negativa de las empresas a someterse al fallo y su solicitud de amparo el 7 de enero de 1938; la confirmación del laudo de la Junta por parte de la Suprema Corte el 1° de marzo de 1938; hasta llegar, finalmente, a la anulación de los contratos en la mañana y a la acción del presidente en respuesta a la rebeldía de las empresas la noche del 18 de marzo de 1938.

Al concluir, Brown nuevamente retoma el asunto que tanto nos concierne en este trabajo sobre la relación entre el contexto y la voluntad. Así, nos dice que lo que ha pretendido con su análisis centrado en los contextos estructurales y coyunturales es “corregir la percepción histórica de que una sola persona, el presidente Cárdenas, nacionalizó la industria. “En realidad,” agrega “fue un proceso más denso y complejo, del cuál Cárdenas *fue solamente el agente*”.¹¹

Me parece que Brown ha logrado convencernos acerca de la importancia de las fuerzas estructurales y coyunturales indicadas en el proceso de la expropiación. De su explicación se puede aprender aspectos muy interesantes sobre la importancia de la evolución de la industria y cómo ésta en buena medida montó el escenario sobre el cuál interactuaron las empresas, el Estado mexicano y los trabajadores.

¹¹ *Ibidem.* p. 340.

Sin embargo, parece que el historiador estadounidense exagera al subestimar el papel de los agentes, principalmente el del presidente, pero también el de sus colaboradores más cercanos. Considero que no hay mucho que objetarle al argumento de Brown de que no debemos exagerar el protagonismo del presidente Cárdenas en la expropiación del petróleo. Por otro lado, me parece que va demasiado lejos al señalar que el presidente “fue solamente el agente”. *¿Solamente el agente?! La implicación de esta aseveración es que aunque el agente hizo lo suyo (decidió, implementó, actuó, es decir, aprovechó las circunstancias históricas para expropiar), su participación no fue realmente de trascendencia para el desenlace del conflicto. Parece que el análisis de Brown se inclina demasiado del lado del contexto y los factores estructurales y coyunturales.*

Así pues, de lo que se trata es de reestablecer el equilibrio para que, sin ignorar las condiciones estructurales y coyunturales que nos enseñan las investigaciones de Brown, reaparezcan en el escenario los actores históricos. Una vez que tenemos claro el contexto (estructural y coyuntural), ahora debemos centrarnos en los personajes principales del drama de la expropiación, y en particular en las razones de la decisión del “Tata”. Es importante conocer y entender el contexto histórico. Por eso, con la ayuda de Brown, le hemos dedicado suficiente atención a los tres factores estructurales y coyunturales. En otras palabras, lo que procede a continuación es indagar acerca de las motivaciones que condujeron a Cárdenas a su decisión histórica. De entrada tenemos



que preguntarnos sí, al enfrentar a los grandes consorcios petroleros, Cárdenas siempre estuvo convencido de que la expropiación era el camino que el gobierno de México debía seguir. *De no ser así, entonces tendríamos que averiguar cómo, porqué y a partir de qué momento fue que Cárdenas eligió dicho camino.*

El historiador se convierte un poco en detective. Con la evidencia que encuentra (sobre todo indicios documentales)¹² y una buena dosis de sentido común, procura revelar las intenciones así como los resultados – tanto esperados como inesperados – de las acciones de los personajes y grupos que participaron en el acontecimiento del pasado que le interesa explicar.

El papel del(os) agente(s): Cárdenas y la decisión de expropiar

En muchos relatos, la expropiación aparece principalmente como el resultado de la voluntad de Cárdenas y sus colaboradores. En algunos de ellos, la decisión gubernamental es considerada positivamente, es decir, como una prueba de la congruencia revolucionaria y

¹² Los historiadores recurrimos sobre todo a los indicios disponibles que se encuentran en los documentos escritos, por lo general depositados en archivos o, con un poco de suerte, publicados. En nuestro caso, el primer referente obligado es lo que escribió al respecto Cárdenas (quien por cierto era bastante parco) en diario, del cual ya hemos citado algunos pasajes y que fue publicado bajo el título: *Apuntes autobiográficos*.

fuerza del compromiso con los intereses nacionales por parte de Cárdenas y sus aliados dentro y fuera del gobierno. En otros casos, lo que prevalece es la imagen de un complot premeditado en el que conspiraron sobre todo una red de políticos y líderes sindicales mexicanos encabezada por el presidente, para ir conduciendo deliberadamente los sucesos hasta llegar a su cometido, es decir, la confiscación o estatización del petróleo. Tal era, por cierto, la visión que prevaleció entre los dueños y administradores de las empresas extranjeras, los cuales al reflexionar retrospectivamente sobre lo acontecido, descartaban cualquier posibilidad real de haber logrado una salida negociada, así como tampoco reconocen haber cometido errores en su manejo de la situación, para, en cambio, afirmar que desde el principio del conflicto los funcionarios cardenistas estaban resueltos a expropiarlos.

Es indudable que Cárdenas así como algunos de sus aliados políticos entre los que destacaban el dirigente de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) Lombardo Toledano y el Secretario de Comunicaciones el General Francisco J. Múgica, estaban plenamente convencidos de la necesidad de mexicanizar la industria petrolera. Pero existe también evidencia para sostener que los mismos (quizá con la excepción de Múgica) consideraban que el proceso tendría que ser progresivo pero gradual, y no a través de una sola acción terminante y dramática. Como hemos visto, con sus vaivenes esa había sido la orientación general de la política gubernamental antes de la llegada de Cárdenas al poder,

y durante los primeros años de su administración no se vislumbró claramente una ruptura con dichas tendencias.

Desde un principio, el presidente Cárdenas estaba resuelto a llevar a la práctica una política revolucionaria bastante más nacionalista que sus antecesores. Sin embargo, esto no tenía que traducirse necesariamente en la expropiación. Lo que más le preocupaba al presidente era tomar pasos firmes para ir sometiendo al capital extranjero a las leyes mexicanas, para eliminar los privilegios injustificados de los que había gozado en el pasado.

En varias ocasiones, el presidente expresó su apoyo al desarrollo de la compañía pública recién creada por su antecesor (Abelardo Rodríguez) en la presidencia llamada Petromex, pero a la vez insistió en que esta empresa nacional no constituía una amenaza para las compañías extranjeras. Junto con el impulso a Petromex, el novedoso proyecto para llevar a cabo la explotación de la zona de Poza Rica en sociedad con El Águila en 1937, podría considerarse como un indicio importante de que las intenciones del gobierno cardenista eran precisamente aumentar la participación nacional y el control gubernamental del sector petrolero, pero, cabe insistir, de forma progresiva y gradual, es decir, sin afectar la producción ni eliminar de tajo la presencia del capital extranjero.¹³

No obstante, a fin de cuentas el presidente Cárdenas fue el actor principal en la decisión de la expropiación.

¹³ Alan Knight, "The Politics of the Expropriation". pp. 92-93.

Lo que no queda del todo claro, entonces, es el proceso decisorio. Incluso algunos personajes de la época se mostraban confundidos al respecto de lo que ocurría en los meses y días críticos previos a la expropiación. Así el Ministro Británico señalaba que “una especie de neblina oriental de intriga y de artificio, cubre la lucha entablada entre el Presidente, sus consejeros, los líderes sindicales, los jefes militares, etc.”¹⁴ Si bien Múgica podría estar a favor de medidas radicales, incluyendo la misma expropiación, otros como el Secretario de Hacienda Eduardo Suárez mantuvieron casi hasta el final posiciones más conciliatorias. Pero al momento de llegar la crisis y los días que le siguieron, la bruma en buena medida se disipó: para la mayoría de los contemporáneos el presidente había sido el individuo que resolvió llevar a cabo la expropiación. Es verdad que Múgica estuvo muy cerca en las deliberaciones del presidente en las vísperas del 18 de marzo. En realidad, la primera noticia de que dicha acción estaba por implementarse la encontramos a sólo escasos días de su fecha histórica. El 9 de marzo de 1938, el entonces presidente anotaba que a su regreso en automóvil de una visita a Zacatepec:

...nos paramos a las 21 horas en la desviación del camino que va a Palmira, entre los kilómetros 79 y 80 de la carretera Cuernavaca-Acapulco, y llamé fuera del auto al general Francisco Múgica, secretario de Comunicaciones, y le

¹⁴ *Ibidem.* p. 94.

hice conocer mi decisión de decretar la expropiación de los bienes de las compañías petroleras si éstas se negaban a obedecer el fallo de la Suprema Corte de Justicia.

Hablamos de que difícilmente se presentaría oportunidad tan propicia como la actual para reintegrar a la nación su riqueza petrolera. No hacerlo por temor a consecuencias económicas o las posibles exigencias diplomáticas de Inglaterra y de Estados Unidos sería antipatriótico y de graves responsabilidades que con justicia el pueblo nos señalaría. El general Múgica resueltamente estuvo de acuerdo con la idea de proceder contra las compañías en su actitud rebelde.¹⁵

Al día siguiente, el 10 de marzo, Cárdenas precisa la información señalada:

Al regresar anoche del ingenio azucarero Emiliano Zapata, instalado en Zacatepec Morelos, acompañado del licenciado Eduardo Suárez, secretario de Hacienda, del general Francisco H. Múgica, secretario de Comunicaciones, y otros colaboradores del gobierno, nos detuvimos sobre la carretera en las cercanías de Cuernavaca, entre los kilómetros 79 y 80 y, con el general Múgica, caminamos hacia Palmira, platicando durante más de una hora. Nos referimos a la situación que viene ocasionando la actitud de las empresas petroleras que han reducido la venta de combustibles y demás operaciones de sus negocios; así

¹⁵ Lázaro Cárdenas. *op. cit.* p. 388.

como a las reiteradas peticiones de sus gobiernos de que apoyen sus demandas en contra del fallo de la Suprema Corte.

Hicimos consideraciones de las circunstancias que podrían presentarse si gobiernos como los de Inglaterra y Estados Unidos, interesados en respaldar a las empresas petroleras, presionaban al Gobierno de México con medidas violentas, pero tomamos también en cuenta que se presenta ya la amenaza de una nueva guerra mundial con las provocaciones que desarrolla el imperialismo nazifascista, y que esto los detendría de agredir a México, en el caso de decretar la expropiación.

Conocedor el general Múgica de la conducta de las empresas petroleras, por juicios que se han seguido contra las citadas empresas y en los que él ha intervenido, y por los procedimientos y atropellos cometidos por los empleados de las propias empresas, y que presencié cuando me acompañó en los años que estuve al frente de la Zona Militar de la Huasteca Veracruzana; y reconociendo en él sus convicciones, sociales, su sensibilidad y patriotismo, le di el encargo de formular un proyecto de manifiesto a la Nación, explicando el acto que realiza el gobierno y pidiendo apoyo del pueblo en general, por tratarse de una resolución que dignifica a México en su soberanía y contribuye a su desarrollo económico.¹⁶

Por otro lado, no podría argumentarse que todo estaba ya resuelto a principios de 1938. Si acaso el presidente

¹⁶ *Ibidem.* pp. 388-389.

tenía clara su meta principal, esa no era la situación de muchos de sus allegados involucrados en el conflicto. Así por ejemplo, en su testimonio Gustavo Corona señala lo siguiente:

Cuando en junio de 1937 el licenciado Enrique Calderón me preguntó si aceptaría el cargo de Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para conocer el conflicto de huelga que en contra de las empresas petroleras del país habían declarado sus trabajadores, *nadie suponía, ni remotamente, que aquel conflicto obrero-patronal habría de culminar, meses después, en la expropiación de la industria.*¹⁷

Lo anterior no quiere decir necesariamente que se asuma una visión de que la historia la hacen los grandes personajes. Como hemos visto anteriormente, Cárdenas no fue el artífice de las condiciones contextuales que condujeron a la crisis de 1938. Sin embargo, la decisión final de expropiar fue antes que de nadie del presidente, y al hacerlo tuvo que elegir entre distintas alternativas. Vale la pena insistir en este punto: a lo largo de la crisis el presidente contó con distintos cursos de acción. Nada estaba totalmente resuelto de antemano. Hasta vísperas de la expropiación, prácticamente todos los principales actores involucrados en el conflicto pensaron que a lo más a lo que podía llegar el gobierno era a una incautación o intervención temporal de las autoridades en el manejo de las operaciones de las empresas, consideran-

¹⁷ Gustavo Corona. *op. cit.* p. 1.

do que México no contaba con la capacidad técnica ni financiera para encargarse de la industria permanentemente. El primero de marzo, es decir el mismo día que la Suprema Corte confirmaba el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Jesús Silva Herzog se encontraba de visita en Washington con el encargo de enterar al embajador Francisco Castillo Nájera sobre el punto en el que se encontraba el conflicto con las compañías petroleras en México. Según el relato de Silva Herzog, después de escuchar con atención su reporte, el diplomático mexicano le preguntó sobre qué pensaba que podría suceder en los próximos días. El primero le contestó que pensaba que lo más probable era que el gobierno llevaría a cabo “una intervención temporal”. En respuesta, el embajador con voz tranquila, lo interrumpió para asegurarle de que él se encargaría de resolver el problema con el gobierno estadounidense. Entonces, Silva Herzog agregó: “o la expropiación...”. A lo que reaccionó visiblemente agitado Castillo Nájera con la siguiente expresión: “¡Ah, chingao! ¡Si hay expropiación hay cañonazos!”¹⁸

La serie de factores estructurales – coyunturales analizados, tanto internos como externos, habían ido estrechando las opciones e inclinando a Cárdenas a considerar seriamente la expropiación. Es verdad que algunos grupos sindicales, sobre todo los más radicales, ya habían propuesto la nacionalización desde el verano

¹⁸ Jesús Silva Herzog. “México y el vampirismo petrolero”. p. 398.

de 1937. Pero otros actores moderados, e incluso más influyentes, como fue el caso ya referido del Secretario de Hacienda Eduardo Suárez, a lo largo del conflicto, enviaron continuamente señales bastante claras de que el gobierno estaba haciendo todo lo posible para alcanzar una solución de compromiso, incluso en vísperas del 18 de marzo. El embajador Daniels no dudó de estas mismas intenciones, hasta que finalmente cayó el “relámpago” de la expropiación. El jefe de Gustavo Corona en el Departamento del Trabajo, Antonio Villalobos, se encontraba la noche del 17 de marzo buscando desesperadamente la forma de llegar a un compromiso de último minuto, se sorprendió cuando vio entrar inesperadamente al presidente Cárdenas a su oficina para señalarle “que arrojara a la cesta de basura el trabajo que había realizado, ya que había decidido expropiar a las compañías.”¹⁹

Si de intransigencia se trata, las compañías de hecho superaron al gobierno. Prácticamente hasta el último momento, se rehusaron a pagar los más de \$26 millones de pesos de aumento que la Junta de Conciliación y Arbitraje había autorizado (luego de que la demanda original de los sindicatos había sido de \$65 millones). A escasas horas de que se decretara la expropiación, las compañías reconsideraron y aceptaron pagar la cantidad señalada siempre y cuando pudieran retener una serie de prerrogativas (facultades) administrativas que estaban en peligro de perder por exigencia de los sindi-

¹⁹ Citado en Alan Knight, op. cit. p. 94.

catos. Al saber de este cambio de posición, el embajador Daniels confió en que el gobierno cardenista la recibiría de forma positiva, por lo que abrigó “fuertes esperanzas” sobre las posibilidades de encontrar una salida negociada.

Sin embargo, estos gestos (“patadas de ahogado” dirían algunos) no convencieron al presidente. Habían llegado demasiado tarde y además constituían evidencia de que las protestas indignadas de las empresas de que se encontraban imposibilitadas para acceder a las demandas salariales exorbitantes de los sindicatos, no habían sido más que movimientos tácticos de su lado para ganar posición y tiempo. Además nada garantizaba que se pudiera persuadir a la otra parte involucrada en el conflicto, es decir, a los trabajadores, para llegar súbitamente a un acuerdo perdurable. Mientras tanto, los ánimos políticos así como las consecuencias económicas del conflicto iban en aumento. Además de que sectores tanto del gobierno como de la opinión pública ya consideraban que la dignidad nacional se encontraba en juego, la escasez de gasolina y otros combustibles estaba atizando la inflación y causando creciente malestar entre los consumidores grandes y pequeños.

Al acercarnos al punto climático de nuestra historia, vale la pena dedicarle espacio y reflexión al carácter y personalidad de Cárdenas, así como al contexto inmediato de la expropiación. En este sentido lo primero que hay que explicar son las razones por las que Cárdenas le guardaba tanto recelo y desconfianza a las compañías petroleras. Su experiencia personal con ellas no había

sido nada positiva cuando las conoció de cerca en la década anterior. Efectivamente en los años veinte, al desempeñarse como comandante militar de la zona de la Huasteca, tuvo la oportunidad de atestiguar, junto con su amigo y aliado Francisco J. Múgica, algunos de los abusos y atropellos que con regularidad practicaban. Así pudo percatarse de primera mano cómo en el entorno de un clima apabullante y en el que proliferaban los insectos y las enfermedades tropicales, las condiciones de trabajo y de vivienda de los obreros eran francamente insalubres. Los empleados mexicanos recibían un trato discriminatorio en relación a los extranjeros. Las poblaciones locales en poco se habían beneficiado de la bonanza petrolera. Los lazos a través de la corrupción entre los ejecutivos de las empresas y los políticos y militares tanto a nivel local como federal se habían vuelto costumbre. Cárdenas mismo había recibido ofertas de este tipo. Así por ejemplo, una empresa trató de obsequiarle un auto *Packard* nuevo modelo para que dejara su vieja y destartalada carcacha *Hudson*. Pero Cárdenas lo rechazó y se mantuvo incorruptible.

Así pues, la experiencia personal fue importante, pero también el carácter del presidente. Se trataba de un individuo más orientado a la acción que a las palabras o las ideas. Era un hombre de principios, políticamente astuto, pero no contaba con una visión programática muy sofisticada. Sobre todo era profundamente nacionalista. También era obstinado, en algunas ocasiones prejuicioso, incluso autoritario. No le gustaba recibir consejos cuando no los había solicitado de sus asesores, y creía

firmeramente en su propia rectitud. En pocas palabras, Cárdenas no era el tipo de persona que se echaba atrás frente a un desafío importante.

Aún así, contaba con la suficiente flexibilidad para negociar y llegar a compromisos, claro, siempre y cuando se preservara el honor nacional y la dignidad presidencial. De ahí que se mostrara dispuesto a modificar los términos del laudo original de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Pero cuando las empresas se dedicaron a retirar sus depósitos del país por varios meses, y luego rechazaron su oferta y maniobraron para entorpecer cualquier solución razonable incluso violando la soberanía nacional, se condenaron.

En estos momentos críticos, el contexto inmediato –no sólo el nacional, sino también el internacional– fue seria y cuidadosamente considerado por el presidente. En relación al frente doméstico, además de lo explicado por Brown, habría que reiterar que el desabasto de gasolina y el consecuente aumento de los precios, estaban causando mucha inquietud entre sectores importantes de la población, y por lo tanto había que resolver pronto el *impasse* en el que iba cayendo peligrosamente el conflicto.

En cuanto al segundo, es decir, la dimensión internacional cabe señalar que en su análisis “estructural-coyuntural”, Brown descuida bastante los cambios en la situación geopolítica en general y en particular en las relaciones con los gobiernos extranjeros, sobre todo Washington y Londres. Es imprescindible tomar en consideración estos factores ya que influyeron de forma

muy significativa en las decisiones de los actores. Para hacerlo, afortunadamente contamos con los valiosos estudios de distintos historiadores, entre los que se encuentran George Philip, Lorenzo Meyer, Alan Knight, Linda B. Hall, Friedrich Schuler y Adolfo Gilly.²⁰

Sin duda el factor más importante fue el cambio de la política de los Estados Unidos hacia México que ocurrió a inicios de la década de los treinta, en especial bajo la administración de Franklin D. Roosevelt. En la década anterior, no sólo la capacidad, sino también la disposición por parte de Washington para presionar al gobierno mexicano a favor de los intereses de las compañías había sido significativamente mayor. Estados Unidos había emergido de la Primera Guerra Mundial como el principal acreedor y la potencia militar hegemónica (es decir, dominante) a nivel mundial. Mientras tanto, la facción triunfante de los sonorenses en México, se encontraba en una situación realmente precaria tanto en el interior como en el exterior. Ambos, Obregón y Calles se habían percatado de que tenían que responder a las exigencias de los intereses estadounidenses si querían permanecer en el poder. De no haber sido por los acuerdos de Bucareli, y el aprovisionamiento de armas, incluyendo aeroplanos, del norte, es bastante probable que la rebe-

²⁰ Merrill Rippy, "El petróleo y la revolución mexicana." George Philip. *Petróleo y política en América Latina. Movimientos nacionalistas y compañías estatales*, capítulo X; Lorenzo Meyer. *México y los Estados Unidos en la controversia del petróleo*, y Linda B. Hall. *Oil, Banks and Politics, The United States and Postrevolutionary Mexico, 1917-1924*.

lión delahuertista hubiera tenido éxito. Los sonorenses intentaron ampliar su margen de maniobra, contrapeando a los intereses de los banqueros con los de otros grupos económicos, incluyendo a las empresas petroleras. Así por ejemplo, en ocasiones buscaron el apoyo de los primeros para aumentar los impuestos al petróleo, argumentando que la recaudación era indispensable para que México pudiera reanudar y cubrir los pagos suspendidos de la deuda exterior. En otras instancias trataron de negociar, sin éxito, con los petroleros el pago de los mismos impuestos por medio de la adquisición de los depreciados bonos de la deuda. Pero estos esfuerzos tuvieron resultados limitados. Los gobiernos republicanos conservadores, sobre todo de los presidentes Warren Harding (1921-1924) y Coolidge (1925-1929), estaban plenamente comprometidos con la protección de las inversiones de sus connacionales en México, recurriendo incluso, de ser necesario a la intervención armada, amenaza que por cierto estuvo muy presente durante el tiempo que fue embajador en nuestro país James R. Sheffield (1924-1927). Contando con todo el apoyo de las autoridades estadounidenses, los productores de petróleo se rehusaron a cumplir con las disposiciones de la ley del petróleo de 1925. Como hemos visto, el sucesor de Sheffield, Morrow utilizó exitosamente la vía de la persuasión diplomática para finalmente lograr moderar la legislación petrolera callista.

Al llegar Roosevelt a la presidencia en 1932, la tensión, sin haber desaparecido, disminuyó. El cambio de giro hacia la izquierda de las políticas gubernamentales

con Cárdenas pudo haber desatado un nuevo período de intensas presiones y enfrentamientos. Sin embargo, varias causas impidieron que así sucediera. Cabe destacar dos: primero, la mayor afinidad ideológica entre los *New Dealers* (como se le conocía por el nombre de su programa a los funcionarios y seguidores de Roosevelt) y los cardenistas, y; segundo; los cambios en el contexto geopolítico en vísperas del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Los *New Dealers*, estaban enfrascados en un programa de reformas que los había puesto en conflicto con las grandes empresas de su país incluidas las del petróleo. Hay manifestaciones de que, cuando menos algunos de ellos, incluso simpatizaban con el gobierno de Cárdenas en el conflicto con las multinacionales. Con base en la información de que disponían, Cárdenas y sus allegados calcularon que Washington sería tolerante, o cuando menos que no respondería de forma particularmente agresiva, como por ejemplo a través de una intervención militar, a las acciones del gobierno mexicano. En realidad, no se equivocaron. Mientras que el embajador Daniels buscó una respuesta moderada, el Secretario de Estado Cordell Hull intentó aplicar una política más dura, pero a fin de cuentas, el presidente Roosevelt decidió aceptar el derecho de México a expropiar con la condición de que se compensara a los intereses afectados de forma expedita y adecuada. Al verse como inminente el estallido de la guerra, en última instancia los sectores del gobierno de los Estados Unidos que tenían claro que los intereses nacionales de su país no se hallaban en la defensa de las empresas expropiadas, sino con el apoyo

decidido a la conformación de una alianza continental, en la que México y el gobierno cardenista constituían un elemento primordial, frente a las amenazas de Europa y Asia.

Para concluir, con base en los datos y argumentos presentados en este ensayo, podemos aunque sea esbozar lo que algunos llaman un juicio analítico contrafáctico. En términos un poco más sencillos se trata de pensar en el ¿qué hubiera pasado si...? Tradicionalmente, los historiadores se han rehusado a responder a tales preguntas, prefiriendo asumir el pasado como algo inevitable. Pero hay muchos estudios que muestran que reflexionar de esa manera, no sólo nos permite vislumbrar lo que pudo haber acontecido, sino también aclarar las causas de lo que en efecto sucedió. Es decir, de lo que se trata es de abrir la discusión en el salón, pensando en que la reflexión sobre las “alternativas históricas suprimidas” también resulta útil para comprender mejor lo que realmente ocurrió.

Así pues, Brown nunca se pregunta lo siguiente: *Ceteris paribus*, es decir, dado el mismo contexto estructural, ¿Qué hubiera pasado si Cárdenas no hubiera sido presidente entre 1934-1940? ¿Se hubiera, de cualquier forma, expropiado el petróleo? Sería muy difícil, en realidad prácticamente imposible, responder a estas preguntas con certeza. Aún así vale la pena pensar un poco al respecto. Podemos hacer el esfuerzo para imaginarnos qué hubiera ocurrido si en lugar de Cárdenas hubiera gobernado un presidente con otras preferencias ideológicas programáticas menos nacionalistas y obreristas, y/o

más subordinado al Jefe Máximo, y/o más temeroso de la reacción de Londres y Washington, y/o con menos determinación para actuar decidida y enérgicamente. Creo que de haber estado en la presidencia otro líder con algunas de las características indicadas, hubiera actuado de forma distinta a Cárdenas. Es bastante probable que en el mismo entorno “estructural – coyuntural” no se hubiera inclinado por la expropiación como la mejor salida al prolongado conflicto entre las empresas, los sindicatos y el Estado posrevolucionario.

Pero podemos plantearnos o imaginarnos otro escenario ficticio. ¿Qué hubiera pasado si el presidente finalmente se hubiera detenido al llegar al borde y en lugar de la expropiación hubiese aceptado la última oferta de las empresas (en la que aceptaban pagar el monto salarial exigido a cambio de que se les concediera el retiro de las demandas relacionadas con la injerencia sindical en los asuntos administrativos)? Nuevamente, no podemos responder a esta difícil pregunta con toda certeza, pero existen algunos elementos que nos pueden ayudar a deliberar al respecto. Ya se ha señalado que la expropiación no era la única opción con la que contaba Cárdenas al enfrentar el conflicto sobre el petróleo. También se ha indicado que en un principio el presidente y algunos de sus colaboradores tenían contemplado que el control sobre este recurso natural se iría imponiendo de forma progresiva pero gradual. Así como el entorno de marzo de 1938 era propicio para la nacionalización también lo era en buena medida para permitirle alcanzar un acuerdo con las compañías bastante favorable tanto para el

Estado como para los trabajadores de la industria. Es cierto que las compañías, sobre todo las estadounidenses, se habían rehusado a aceptar un arreglo en esos términos, preocupadas más que nada porque los gobiernos y sindicatos de otros países lo aprovecharan como ejemplo para exigir condiciones similares. Sin embargo, cuando se dieron cuenta de que sus cálculos habían fallado, y de que Cárdenas estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, se blandearon. En lugar de un *knock-out* el presidente pudo haber optado por un golpe menos contundente, pero sí muy importante para sus propósitos de largo plazo. Al hacerlo seguramente hubiera contado con el apoyo del embajador Daniels y de la mayoría del gobierno de los Estados Unidos, así como muy probablemente también de amplios sectores de la población de México. Es posible que los disidentes más importantes hubieran sido los dirigentes sindicales petroleros. La pregunta clave es si Cárdenas hubiera logrado vencer sus resistencias y/o convencerlos para aceptar tal compromiso de último minuto con los petroleros.

Capítulo II

El voto femenino en México. La lucha del siglo

*Elsa Muñiz**

En las sociedades contemporáneas las mujeres, cada vez más, ocupan puestos de decisión y de representación. Es una noción compartida el que las sociedades no pueden ser democráticas, o tan solo aspirar a serlo, si las mujeres no son contempladas y consideradas como ciudadanas. A comienzos del siglo XXI puede parecer increíble que las mujeres, hace no tantos años, estaban impedidas para votar, no tenían acceso a la educación y carecían de derechos tales como trabajar fuera de la casa, heredar bienes o ejercer la patria potestad de sus propios hijos. Resulta pues conveniente recordar la lucha que libraron las mexicanas para ganarse el derecho al sufragio universal, a los derechos civiles en general y, de manera fundamental, a los derechos sociales.

La lucha por la igualdad de las mujeres ha sido una constante en la historia de los Estados modernos a lo largo y ancho del mundo, su relevancia puede advertirse, sobre todo, en que, en muchos países, la obtención de los derechos civiles va de la mano con la conquista de

* Profesora-Investigadora del Departamento de Humanidades de la UAM-Azcapotzalco.

los derechos sociales y el respeto por los derechos humanos. Nuestro país no fue la excepción y en este trabajo se analiza el proceso que culminó con un acontecimiento significativo para una parte de la sociedad mexicana de la segunda mitad del siglo XX. La obtención del derecho al sufragio universal para más del 50% de la población en 1953, mostró la importancia que para la modernización capitalista en nuestro país tenía el hecho de incluir de manera formal a las mujeres en el ámbito público y de dar una imagen hacia afuera de un país incluyente, moderno y democrático. Hacia adentro, fue relevante porque atraía más votantes al partido oficial, atendía la demanda añeja de un sector de mujeres ilustradas y, en algunos casos, cercanas al grupo gobernante. No obstante, a partir de los años setenta, no solo el feminismo sino la sociedad mexicana en su conjunto han dado poca importancia a la lucha de las mujeres desarrollada desde entonces para lograr la igualdad jurídica. Como señala Gabriela Cano, es comprensible, sobre todo desde que el feminismo de la nueva ola de los años setenta denunció que dicha igualdad era engañosa ya que se refería a la vida pública y dejaba al margen la vida privada en donde predominaba la desigualdad entre hombres y mujeres, en especial en el ámbito del trabajo doméstico y de la sexualidad.

Recorrer, aunque de manera breve, el camino transitado por muchas mujeres para ser reconocidas como ciudadanas, tiene varias implicaciones, por un lado, advertir la importancia de tal hecho en el establecimiento del Estado Moderno en México; por otro, mostrar

lo relevante que resulta la adquisición de la ciudadanía para las mujeres en la conformación de su identidad de género, tal como sucedió en otros países a principios del siglo XX, específicamente después de concluida la llamada Gran Guerra. Es también fundamental entender dicho acontecimiento en el marco de los procesos mundiales en los que México participó, sobre todo, a partir del movimiento revolucionario que introdujo a nuestro país en el ámbito de las democracias del siglo XX y tener clara la presencia de los actores, en particular aquellas mujeres que desde sus situaciones específicas contribuyeron de manera decisiva a este proceso y, finalmente, a los actores colectivos, en este caso las mujeres que formaron parte del movimiento en las distintas etapas de la lucha.

La historia de las mujeres

Como ya señalamos anteriormente, el movimiento feminista fue definitivo en la lucha por la obtención del derecho al sufragio universal para las mujeres en todos los países del mundo, pero también ha sido invaluable su labor en la difusión y en la construcción de un conocimiento histórico que permita a las nuevas generaciones conocer este tortuoso camino que abrió paso a la existencia de relaciones más equitativas entre hombres y mujeres.

Las feministas de los años setenta se dieron a la tarea de recuperar una historia que hasta entonces había esta-

do oculta, olvidada como dicen algunas historiadoras,¹ para darle un origen, un sentido de pertenencia, es decir, devolverles a las mujeres un fragmento de identidad perdida. Así, estas historiadoras feministas recurrieron a la única apuesta historiográfica que les permitía recuperar la historia de esas “sin historia” que eran las mujeres. La Historia Social vertiente marxista de la historiografía, posibilitó que frente a la historia oficial que se hacía y en la cual las mujeres no aparecían, se escribiera una historia que ha alcanzado legitimidad como corriente historiográfica y que se ha denominado Historia de las Mujeres. El objetivo era demostrar que las mujeres también habían sido protagonistas en una sociedad cambiante. Es desde esta perspectiva que abordaremos el tema del presente trabajo.

Los primeros pasos en la búsqueda de la ciudadanía

Considero importante recordar que las manifestaciones de las mujeres por sus derechos, se dieron desde un tiempo que no es posible precisar; sin embargo, las luchas colectivas de las mujeres enmarcaron su surgimiento en el contexto de la Revolución Francesa. De esta manera sabemos que el espacio histórico del feminismo como movimiento colectivo fue el del orden social impuesto por el capitalismo. Desde entonces, el feminismo ha

¹ Julia Tuñón, *Las Mujeres: Una historia olvidada*. Planeta, México, 1987.

sido la tendencia más importante y siempre presente de las acciones culturales de la época moderna,² de ahí que no se pueda entender la lucha de las mujeres por sus derechos sin vincularla al feminismo y sin reconocer el precio que tuvieron que pagar muchas de ellas por su temeridad. Cuando en plena Revolución Francesa se promulgaba la *Declaración de los Derechos del hombre y el ciudadano* por Danton y Condorcet, Olympe de Gouges respondió a dicho documento con la *Declaración de los Derechos de la mujer y la ciudadana*, el cual fue tachado de mera copia adaptada al tema de las mujeres, no obstante, ahora sabemos que constituye por sí mismo un discurso sobresaliente y radical en favor de las reivindicaciones femeninas y una proclama auténtica de la universalización de los derechos humanos. Olympe de Gouges denunciaba que la Revolución había olvidado a las mujeres en su proyecto de igualdad y libertad. Defendía que “la mujer nace libre y debe permanecer igual al hombre en derechos” y que “la ley debe ser la expresión de la voluntad general; todas las ciudadanas y los ciudadanos deben contribuir, personalmente o por medio de sus representantes, a su formación”.

² Véase, Agnes Heller. “Los movimientos culturales como vehículo del cambio” en *Perfil de la Jornada*, 1989. En este trabajo Heller propone que en la época moderna han existido tres momentos significativos en el movimiento cultural; ella los llama las tres olas del movimiento cultural en donde el feminismo ha sido la tendencia siempre presente: el existencialismo, la generación alienada (antiautoritaria) y el posmodernismo.

Asimismo, Olympe reclamaba un trato igualitario hacia las mujeres en todos los ámbitos de la vida tanto públicos como privados: derecho al voto y a la propiedad privada, acceso a la educación y al ejército, y a ejercer cargos públicos llegando incluso a pedir la igualdad de poder en la familia y en la iglesia. No obstante, Olympe de Gouges no creía que mujeres y hombres fueran iguales, pensaba que había dos naturalezas distintas, una para hombres y una para mujeres, y que la de las mujeres era superior. Esa convicción de las dos naturalezas es palpable en el preámbulo de la declaración que a continuación reproducimos:

Las madres, hijas, hermanas, representantes de la nación, piden que se las constituya en asamblea nacional. Por considerar que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados de la mujer a fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, a fin de que los actos de poder de las mujeres y los de los hombres puedan ser, en todo instante, comparados con el objetivo de toda institución política y sean más respetados por ella, a fin de que las reclamaciones de las ciudadanas, fundadas a partir de ahora en principios simples e indiscutibles, se dirijan siempre al mantenimiento de la constitución, de las buenas costumbres y de la felicidad de todos. En consecuencia, el sexo superior tanto en belleza

como en coraje, en los sufrimientos maternos, reconoce y declara, en presencia y bajo los auspicios del Ser supremo, los Derechos siguientes de la Mujer y de la Ciudadana.³

Tal planteamiento feminista no era compartido por los varones que dirigían la revolución, incluyendo a los más radicales de ellos. Fue tildada de traidora a la Revolución por oponerse a la pena de muerte contra el rey Luis XVI y su familia, convirtiéndose en un objetivo del terror jacobino al manifestarse contra Robespierre y Marat y la represión encabezada por ellos. Fue guillotizada en 1793.

Este fue el punto de partida para la lucha de muchas mujeres que a lo largo y ancho del mundo pugnaron por tener derecho al voto, a los derechos civiles y en consecuencia a los derechos sociales y humanos. A este movimiento se le ha dado el nombre genérico de *sufragismo*, y a las mujeres que participaron activamente se les conoce como *sufragistas*. A lo largo del siglo XX y en particular después de la 1ª Guerra Mundial, las mujeres de los países avanzados como Estados Unidos de Norteamérica, Francia e Inglaterra, obtuvieron, a cuenta gotas y en algunos casos a costa de sangre y encarcelamientos, el derecho al voto y los demás derechos civiles.⁴ Ser con-

³ *Declaración de los derechos de la Mujer y de la Ciudadana*, redactado en 1789 por Olimpia de Gouges para ser decretado por la Asamblea Nacional Francesa, en, <http://nomadant.wordpress.com/textos/textos/derechos-mujer/> (preámbulo)

⁴ Véase, Elsa Muñiz, “*Garzones, flappers y pelonas*: en la década fabulosa ¿de qué modernidad hablamos?” en *Fuentes Humanísticas*, pp. 3-15.

sideradas como ciudadanas, las colocaba en la posición de ser beneficiarias de las políticas de bienestar que los estados ricos comenzaron a instrumentar.

En México, como bien lo han documentado historiadoras como Carmen Ramos, Gabriela Cano, Julia Tuñón y Ana Lau Jauiven, entre otras, el sufragismo apareció hacia finales del siglo XIX, en el contexto de una nueva etapa de sometimiento y subordinación para las mujeres. El capitalismo y la modernidad separaron el mundo y la vida en esferas: la pública y la privada, asignando a las mujeres a la privacidad del hogar y dejando para el hombre el mundo de afuera, el público. La autoridad ejercida en el hogar únicamente por el marido y que colocaba a las mujeres en desventaja, estaba plenamente establecida jurídicamente, para John Stuart Mill⁵ la mujer era “la esclava legal del hombre”.

⁵ John Stuart Mill, *Sobre la libertad*, Trad. Pablo Azcarte, Alianza, Madrid, 1997. Algunos biógrafos del filósofo inglés señalan que su esposa Harriet Taylor Mill fue una influencia determinante en la defensa que el autor hace de las mujeres, en esta obra John Stuart Mill argumenta porqué las relaciones desiguales entre los sexos en nombre de la ley son “malas en sí mismas” y forman uno de los principales obstáculos para el progreso de la humanidad. Para el autor la desigualdad debería substituirse por una “igualdad perfecta” sin privilegio ni poder para un sexo ni incapacidad alguna para otro. Mill sostiene que esta desigualdad está arraigada a un sentimiento y no a la razón. Si la misma estuviera sostenida por el raciocinio, afirma, al refutarla los fundamentos del error quedarían quebrantados. Por lo tanto, mientras el sentimiento subsista, no le faltarán argumentos para defenderse. La situación de inferioridad de la mujer que cuestiona “no descansa sino en teorías”, sin la posibilidad que se hayan

En nuestro país, el Código Civil de 1870 instituía la obligación de “obedecer a su marido, así en lo doméstico como en la educación de los hijos y la administración de los bienes”, y en los casos de divorcio por adulterio, los requisitos legales exigidos a las mujeres para poder acusar al cónyuge eran superiores, tanto en cantidad como en calidad, que los exigidos a este último en las mismas circunstancias.

El acceso a la educación para las mujeres estaba restringido, su papel era el hogar y no había necesidad de que aprendiera siquiera a leer. Hacia 1875 de cada cuatro escuelas de educación básica para varones había una para mujeres; la educación superior tenía una proporción aún mas desequilibrada, pues de 78 escuelas para varones había 15 para mujeres. Cabe señalar que la instrucción en este tipo de escuelas debe analizarse con detenimiento, ya que la educación superior a la que accedían ciertas mujeres era la Escuela Normal y no propiamente la universidad. La condición laboral de las mujeres que trabajaban fuera de la casa, contraviniendo el modelo de mujer impuesto, no era mejor, pese a que el capitalismo mexicano en su momento de arranque se sustentó, de manera importante, en la fuerza de trabajo femenina. Había sobreexplotación mediante jornadas

ensayado otras. La adopción del régimen de la desigualdad para Mill no ha sido fruto de la libre deliberación del pensamiento, sino que proviene desde los primeros días de la sociedad humana cuando la mujer fue entregada como esclava al hombre a quien no podía resistir dada la inferioridad de su fuerza muscular.

extenuantes de más de 18 horas; condiciones laborales inhumanas para ellas y para sus hijos a quienes tenían que llevar y mantener en las fábricas el mismo tiempo que duraba la jornada de trabajo, al grado de que era común que parieran entre las máquinas, los productos y la basura, y, por si esto fuera poco, no se les permitía agremiarse para defender sus derechos laborales.⁶

Por su parte, mujeres de los sectores medios y acomodados eran consideradas como “liberadas de todo trabajo exterior y de toda injerencia sistemática en los asuntos de la vida pública con el fin de concentrarlas en las labores domésticas”,⁷ no obstante algunas de ellas tenían otras aspiraciones y reclamaban el derecho a la educación y a participar del ámbito público. Un ejemplo de ello fue Laureana Wright de Kleinhaus, considerada como una de las precursoras del feminismo en México, fundó y dirigió la revista *Violetas del Anáhuac* donde se planteaba la demanda del sufragio femenino y la igualdad de oportunidades para ambos sexos. En particular, Wright lo expuso claramente en un artículo denominado “El sufragio de la mujer”. Asimismo, su reclamo por

⁶ Para profundizar en el tema de las mujeres trabajadoras durante el porfiriato, véase la interesante investigación de Ana María Saloma Gutiérrez. *Las hijas del trabajo. Fabricantes cigarreras de la Ciudad de México en el siglo XIX*, Tesis para obtener el grado de Doctora en Antropología, México, 2001, Escuela Nacional de Antropología e Historia.

⁷ Elsa Muñiz, *op. cit.* p. 10.

el acceso a la educación la llevó a escribir el libro titulado *Emancipación de la mujer por medio del estudio*.⁸

La lucha de las mujeres hacia finales del siglo XIX se encaminaba a tener acceso a la educación y a la obtención del sufragio, como lo era también en otros países. No obstante la resistencia de la sociedad de la época a considerarlas aptas para participar en la política tomaba forma en las palabras de algunos intelectuales de la talla de Gabino Barreda, quien en un trabajo titulado *Estudio sobre el feminismo*,⁹ advertía sobre el peligro que entrañaban “ciertas teorías en boga” que aparentaban ser progresistas, pero que en realidad eran, en sus palabras, “ineficaces, retrógradas, nocivas y revolucionarias”.¹⁰ Barreda, uno de los artífices del modelo de educación para el amor y el orden en el México porfiriano, señalaba que para alcanzar el progreso era necesario respetar el orden natural y admitía que el sentido que tendría la igualdad para las mujeres era la única igualdad posible, la del bienestar y la felicidad para ambos sexos y la mujer será feliz cuando se encuentre ubicada en un medio social que no le exija una actividad incompatible con su “constitución orgánica”. La familia, lugar “natural” de la mujer, si bien la hacía perder autonomía e inde-

⁸ Lourdes Alvarado (traducción y estudio introductorio), *Educación y superación femenina en el siglo XIX: Dos ensayos de Laureana Wrigth*, Universidad Nacional Autónoma de México, CESU, 2005.

⁹ José Fuentes Mares, *Gabino Barreda. Estudio selección y prólogo*, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1941.

¹⁰ *Ibidem.*, p. 12.

pendencia, la hacia ganar influencia moral y respeto social. De esta manera, Barreda se basaba en las diferencias físicas, intelectuales y morales para concluir que las mujeres son inferiores a los hombres para realizar actividades prácticas, especulativas, científicas, estéticas o filosóficas.

Con la mira puesta en la obtención de los derechos civiles¹¹ para las mujeres, se formaron grupos conocidos como “clubes” o asociaciones, casi todos alrededor de publicaciones periódicas, como es el caso del *Club Hijas del Anáhuac*, fundado en 1907 en torno al periódico *Siempre viva*. En este grupo participaban 300 mujeres con ideología anarquista que se reunían los domingos por la tarde, estaba encabezado por Juana Belén Gutiérrez de Mendoza quien fuera una de las primeras voces que se levantara para exigir al gobierno de Francisco I. Madero el voto de las mujeres y reivindicaciones laborales para las trabajadoras. No obstante, debe reconocerse a Juana Belén por su capacidad de vislumbrar la complejidad del momento histórico que le tocó vivir. Para ella, la prensa libre era el vehículo para “agitar y organizar” a las

¹¹ Ejemplos de derechos civiles y libertades incluyen el derecho a una indemnización si uno es lesionado por otro, el derecho a la privacidad, el derecho a protestar pacíficamente, el derecho a una investigación y juicio justo si se es sospechoso de un crimen, y derechos constitucionales más generales como el derecho al voto, el derecho a la libertad personal, el derecho a la libertad de movimiento y el derecho de protección igualitaria. A medida que las civilizaciones surgieron y se formalizaron a través de constituciones escritas, algunos de los derechos civiles más importantes fueron otorgados a los ciudadanos.

masas, en este sentido, en 1901 fundó en la Ciudad de México la revista semanal *Vesper*, en la que atacaba al régimen de Porfirio Díaz y denunciaba la complicidad del clero con el sistema de represión, desigualdad y corrupción que lo caracterizaba.

La respuesta no se hizo esperar y la imprenta fue decomisada. Su papel como periodista la llevó a colaborar en el *Diario del Hogar* y en *El hijo del Ahuizote* donde, con el mismo sentido crítico, denunciaba las injusticias de las que eran víctimas los trabajadores y las trabajadoras, como es el caso de un artículo firmado por ella en el que reportaba las condiciones infrahumanas en las que trabajaban los mineros de “La esmeralda”, en Minas Nuevas, Chihuahua y que ocasionó su encarcelamiento.

En 1903, firmó como primera vocal el *Manifiesto del Club Liberal Ponciano Arriaga*, en el que se pedía la libertad de presos políticos y la libertad de sufragio, entre otras demandas. Durante el mitin, policías disfrazados de civiles fingieron un alboroto y Juana Belén, junto con algunos de sus compañeros del círculo liberal, fueron encarcelados.

Una vez en libertad, decidió exiliarse por un tiempo y a su regreso, en 1905, reinició la publicación de *Vesper* y escribió para el *Excelsior*. Se vinculó a una nueva organización llamada Socialismo Mexicano y creó células de obreros alrededor de dicha agrupación.

El valor, la presencia y la capacidad organizativa de Juana Belén se convirtieron en un peligro para el régimen porfiriano y en un intento por frenar su actividad fue deportada a Estados Unidos. En su permanente acción,

regresó a México en 1909 para fundar un nuevo club político femenino llamado *Amigas del Pueblo* y siguió su participación en el *Partido Liberal Mexicano*.

Su estancia en la cárcel la llevó a conocer a otras mujeres y a perfilar una posición más específica en relación a las demandas femeninas. Sin embargo, es de notar que las más preocupadas por obtener sus derechos civiles, eran las mujeres de clase media e intelectuales, en particular las maestras, quienes impulsaron las ediciones de periódicos y revistas liberales en las que conjugaban sus ideales revolucionarios y las demandas feministas. No obstante, sus reclamos no contravenían su condición de madres, tenían claro su papel en la familia aunque reconocían la importancia de acceder a la educación en función de dichas responsabilidades. Otras agrupaciones aparecieron en la escena, por ejemplo, en 1904 se fundó *La sociedad protectora de la mujer* integrada por maestras, doctoras, escritoras y abogadas, quienes, a su vez, publicaban la revista *La Mujer Mexicana*. Es el caso también de la denominada *Admiradoras de Juárez*, integrada por maestras y profesionales de clase media y fundada en 1906. Como puede observarse, las maestras, las periodistas y en general, las profesionistas, fueron quienes mayoritariamente alzaron la voz contra un régimen injusto y represor como el porfiriano.

La también periodista Dolores Jiménez Muro nació en Aguascalientes y vivió durante su juventud en la ciudad de San Luis Potosí en donde colaboró en los periódicos *La esmeralda* y *La sombra de Zaragoza*, y en 1902 dirigió la *Revista Potosina*. Se adhirió al *Partido Liberal*

Mexicano y colaboró también en el periódico *El diario del hogar*, dirigido por Filomeno Mata; en 1097 ingresó al *Grupo Socialista Mexicano* y en 1910 fundó el *Club Antirreleccionista Hijas de Cuauhtémoc*.

Ya en la Ciudad de México, durante el gobierno de Francisco León de la Barra, fue encarcelada por su participación activa en la redacción del plan político conocido como *Plan de Tacubaya*, el 31 de octubre de 1911. Para obtener su libertad, Dolores Jiménez llevó a cabo una huelga de hambre. Una vez en libertad se incorporó a las fuerzas de Emiliano Zapata y en 1911 escribió el prólogo del *Plan de Ayala* proclamado el 25 de noviembre de 1911. En 1913, en el periódico *La voz de Juárez*, criticó al gobierno del dictador Victoriano Huerta, esto le valió un encierro de trece meses en la Penitenciaría de la Ciudad de México. Concluida la Revolución, desempeñó varios cargos en la Secretaría de Educación Pública y colaboró en el diario *Anáhuac* y en *El correo de señoras*.

Así, es claro que antes de la Revolución, un naciente movimiento feminista, encabezado principalmente por mujeres educadas, de clase media, buscaba mayores oportunidades educativas para todas, mejores salarios para las trabajadoras y reformas al Código Civil. Las feministas mexicanas pensaban que tales reformas acabarían con la doble moral y con la inferioridad de las mujeres casadas, como podrá verse, la cuestión del sufragio interesaba a muy pocas.¹² No obstante, la lucha

¹² Véase, Anna Macías, *Contra viento y marea. El movimiento feminista en México hasta 1940*, Universidad Nacional Autónoma de México-

armada que asoló al país durante más de una década, sacó a las mujeres de la tranquilidad del espacio que la ideología burguesa les había asignado, pues mujeres de todos los sectores sociales participaron activamente desempeñando labores tradicionales como cocineras, lavanderas, enfermeras; o como correo, como secretarias e incluso empuñando las armas.

La ciudadanía de las mujeres y la Constitución de 1917

Algunos intentos por el reconocimiento de los derechos civiles para las mujeres los encontramos en las acciones realizadas por el Gral. Salvador Alvarado, quien en su carácter de gobernador del estado de Yucatán promulgaría su decreto 167 conocido como “ley feminista”. Dicha ley dio pauta, entre otras cosas, para que las mujeres a los 21 años pudieran salir de la casa paterna para buscar trabajo. Del mismo modo, se propició la denuncia de muchas mujeres en contra de quienes habían abusado de ellas, la orden inmediata de Alvarado fue que se repararan los daños inmediatamente obligando a los agresores a casarse con las víctimas.¹³

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México, 2002, Col. Libros del PUEG.

¹³ El general Alvarado, abrumado por tantos casos judiciales relativos a mujeres abusadas, en enero de 1916 mandó una Circular a sus comandantes militares relativas a la realización de “matrimonios

Desde el inicio de su administración, Alvarado se propuso ayudar a las mujeres solteras a mantenerse solas, a buscar trabajo fuera de la casa. Se preocupó porque tanto mujeres como hombres, indios, ladinos, ricos y pobres, aprendieran a leer. Para las mujeres creó una escuela de artes domésticas, modelo que las preparaba para ganarse la vida fuera del hogar. Como parte de su esfuerzo por alcanzar la igualdad entre los sexos, introdujo la coeducación hasta cuarto grado. Declaró en el Segundo Congreso Pedagógico, realizado en septiembre de 1916, que las reformas educativas tenían como objeto liberar a las mujeres del control de la Iglesia católica, para el gobernador, como para el resto de los carrancistas, la Iglesia era enemiga de la justicia, de la ilustración, y del progreso social.¹⁴ En enero de 1916, el Gral. Alvarado organizó el primer Congreso Feminista en México, segundo en América Latina, a fin de conocer y mejorar la condición social de las mujeres yucatecas, al mismo tiempo que se procuraba bases de apoyo, para ello, planteó cuatro preguntas que se discutieron durante cuatro días en Mérida. Se invitó a las maestras, para que presidieran y discutieran de viva voz, sobre los temas del “fanatismo” religioso y el sufragio. Dichos temas eran de especial interés para el general Alvarado, quien a partir

urgentes”. Pero esta norma no siempre se aplicaba, pues en el caso de las mujeres de la elite el matrimonio era obligatorio para el raptor mientras que en el de las mujeres indígenas la indemnización económica era suficiente.

¹⁴ Anna Macías. *op. cit.*, pp. 90-92.

de la intervención de sus operadores políticos, el Prof. Agustín Franco, secretario de Educación Rural, lograría que las maestras aceptaran el papel de “desfanatizadas”, y el ingeniero francés Modesto C. Rolland, hombre muy cercano al General que se desempeñaba como Presidente de la Comisión Agraria, obtendría el consenso de las maestras a fin de que Alvarado confiriese el sufragio a las mujeres, el voto activo exclusivamente.

En cuanto a las discusiones entabladas respecto al sufragio, los sectores conservadores de la sociedad sostenían que las mujeres no estaban facultadas para votar debido a su papel como madres. Otra postura, más moderada, señalaba que para asumir cargos de elección popular, era necesario que antes se prepararan. Por su parte, las mujeres progresistas argumentaban que entre los hombres también había ignorantes y “cultos” y todos tenían el mismo derecho al sufragio; asimismo, Francisca Ascanio afirmaba que “la experiencia nunca puede ser previa y la práctica, precisamente se adquiere en la lucha”.¹⁵ Treinta y un mujeres sufragistas pidieron la ciudadanía de inmediato y exigieron el acceso a cargos de responsabilidad municipal, todo en el entendido de que el desempeño de éstos capacitaría a la mujer para cargos más elevados, de nivel estatal y federal. Desgraciadamente esta posición fue claramente minoritaria y el Primer Congreso Feminista no adoptó el derecho al sufragio como una clara demanda.

¹⁵ *Congreso Feminista de Yucatán, Anales de esa Memorable Asamblea*, Mérida Yucatán, p. 127.

El Segundo Congreso Feminista se efectuó once meses después del primero. Fue inaugurado el 23 de noviembre de 1916, el general Alvarado tenía preparado como tema central el de la escuela como “desfanatizadora”; sin embargo, la discusión sobre el sufragio femenino resultó ser lo medular del Congreso. El operador del general fue entonces el Cor. Gregorio Torres Quintero, jefe del departamento de Educación Pública, quien intervino abiertamente en la discusión sobre el sufragio. El debate comenzó el cuarto día y se extendió hasta el sexto, entre los días 28 y 30, llegando a la conclusión de que las mujeres podían votar en elecciones para cargos municipales siempre que fuesen mayores de 21 años y supiesen leer y escribir, pero no estarían “preparadas” para asumir cargos de elección popular y en este caso no podrían ser sujetos del voto. Este dictamen fue aprobado por 147 votos a favor y 89 en contra.

A pesar de la gran participación que tuvieron las mujeres en distintos frentes durante la lucha armada que azotó a nuestro país entre 1910 y 1920, la Constitución de 1917 no contempló el derecho de las mujeres para ejercer el sufragio universal. Al asunto se le concedió muy poca importancia y de no haber sido porque Hermila Galindo y el general Silvestre González presentaron la demanda del sufragio femenino en el contexto del constituyente de Querétaro, no hubiera sido discutida, aunque solo fuera en la Comisión de Puntos Constitucionales integrada por los diputados Francisco J. Múgica, Enrique Recio, Enrique Colunga, Alberto Román y Luis G. Monzón. La comisión rechazó la propuesta,

según lo expuso en el dictamen presentado al pleno del Congreso Constituyente el 23 de enero de 1917. Casi sin discutirla, la asamblea aprobó la resolución formulada por la comisión.

Los argumentos principales para negarles el derecho al voto a las mujeres fueron diversos. Uno era la suposición de que la mayoría de las mujeres carecía de las condiciones necesarias para ejercer satisfactoriamente los derechos políticos. Se reconocía la existencia de algunas mujeres excepcionales capacitadas para ejercer la ciudadanía; sin embargo, desde el punto de vista de la comisión constituyente, la excepcionalidad no justificaría el reconocimiento de los derechos políticos para todas las mujeres. Otra razón esgrimida era la que se basaba en el temor de que las mujeres utilizaran los derechos políticos otorgados para apoyar a las fuerzas conservadoras y a los intereses de la Iglesia, elemento que debilitaría al Estado laico. Este aspecto no fue plasmado en el dictamen, pero en muchas ocasiones se utilizó para rechazar el reconocimiento de la igualdad de las mujeres. Finalmente, la “Comisión de puntos constitucionales” justificó su decisión apelando a la diferencia biológica entre mujeres y hombres. La diferencia entre los sexos, dice el dictamen, determina que las mujeres deban permanecer en el ámbito de la vida privada, alejadas de la vida pública donde se desarrollan las actividades políticas:

[...] en el estado en el que se encuentra nuestra sociedad, la actividad de la mujer no ha salido del círculo del hogar doméstico, ni sus intereses se han desvinculado de los

miembros masculinos de la familia; las mujeres no sienten pues la necesidad de participar en asuntos públicos.¹⁶

Los artículos relativos a la ciudadanía (34° a 37°) permanecieron en la Constitución de 1917 casi idénticos a como estaban en la constitución de 1857. La ley electoral de 1918 especificó que el derecho a votar y ser votado era sólo para los hombres.

Frente a estos argumentos, Hermila Galindo defendió la igualdad de derechos ciudadanos para hombres y mujeres señalando

“[...] es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de autoridades porque si ella tiene obligaciones con el grupo social, razonable es que no carezca de derechos. Si la mujer debe cumplir los mandamientos de las autoridades, lógico es que ella tenga una injerencia directa en su elección”.¹⁷

Para ella, la incorporación de las mujeres al ámbito público no implicaba limitar su función maternal y su responsabilidad en las labores del hogar, señalaba, por el contrario, que la maternidad y la actividad doméstica

¹⁶ *Diario de Debates del Congreso Constituyente, 1916-1917*, pp. 829-830.

¹⁷ Hermila Galindo, *Estudio de la Srita. Hermila Galindo con motivo de los temas que han de absolverse en el Segundo Congreso Feminista de Yucatán*, p. 25.

daba a las mujeres una perspectiva específica de la sociedad, lo cual se traduciría en ventajas para la sociedad.¹⁸

Como un desafío a la exclusión de las mujeres de la vida política, en 1918 Hermila Galindo se postuló como candidata a una diputación por un distrito electoral de la Ciudad de México. Realizó una campaña en la que manifestó que su propósito principal era mostrar a la ciudadanía que un número importante de mujeres demandaban el sufragio, y dejar su experiencia como un precedente para las nuevas generaciones. Intentaba crear una conciencia cívica favorable a la igualdad política de las mujeres más que triunfar; sin embargo, sostuvo que ella había logrado la mayoría de votos en las urnas. El Colegio Electoral, como era de esperarse, no reconoció su triunfo. Como señala Gabriela Cano, lo significativo de la experiencia electoral de Galindo fue su actuación ciudadana y la subversión a la tradicional desigualdad de género en el ejercicio ciudadano, asimismo, marca el inicio del camino en la lucha por el sufragio femenino en el siglo XX.

Cabe señalar que la Constitución de 1917 reconoció la diferencia sexual en forma explícita sólo en el terreno de los derechos laborales. También se estableció como principio constitucional la igualdad salarial sin distinción de sexo y otorgó protección a la maternidad de las trabajadoras. En abril de ese mismo año Venustiano Ca-

¹⁸ Gabriela Cano, "Revolución, feminismo y ciudadanía en México (1915-1940)" en Georges Duby y Michelle Perrot, *El siglo XX. La nueva Mujer*, p. 306.

rranza expidió la *Ley de Relaciones Familiares*, en la cual se señalaba que: “los hombres y las mujeres tienen derecho a considerarse iguales en el seno del hogar”.¹⁹ Gracias a esta ley, la mujer adquiría el derecho de la patria potestad de los hijos y otorgó la obligación de ambos cónyuges para decidir de común acuerdo lo relativo a la educación de los hijos. Reconoció los derechos de las mujeres para administrar y disponer de sus bienes, de administrar también los bienes comunes y de participar en el sostenimiento del hogar; a comparecer y defenderse en juicios y a establecer un domicilio distinto al de su marido. Legalizó el divorcio, no obstante estableció la obligatoriedad de las mujeres a dedicarse a las tareas domésticas y al cuidado de los hijos.

La expedición de esta ley marcaría la pauta para el reconocimiento de ciertos derechos civiles para las mujeres, aunque aún estaba muy lejano su reconocimiento pleno como ciudadana.

¿Qué ganaron las mujeres con la Revolución?

La década de los veinte en México inicia al mismo tiempo que el proceso de Reconstrucción Nacional con el ascenso del grupo Sonora al poder y culmina con la derrota de los grupos de avanzada que intentaron establecer un proyecto educativo que incluía la coeducación y un programa de educación sexual para las escuelas ele-

¹⁹ Venustiano Carranza, *Ley sobre Relaciones Familiares*, p. 8.

mentales. La avidez de los reconstructores del régimen y de la sociedad misma por ingresar a la modernidad y formar parte del concierto de las naciones después de la lucha armada, se tradujo en la construcción de dos representaciones de la feminidad que se conjugaban más que contraponerse: *la india bonita y la pelona*, eran dos imágenes que coexistieron durante la euforia posrevolucionaria, en ellas se condensaban no sólo la modernidad y la tradición, sino el sueño vasconceliano de la raza cósmica y la perfecta conjunción entre la nueva mujer y la buena madre. Entre los años 1920 y 1924, el proyecto educativo de los posrevolucionarios propuso una visión integral del mexicano y de la mexicana que la nueva nación requería. En ella, la mujer idealizada que Gabriela Mistral perfilaría en sus *Lecturas para mujeres*, donde refrenda la idea de que “la forma del patriotismo femenino es la maternidad perfecta”.²⁰ Los cuerpos, las vidas y las conciencias de los individuos quedaron sujetos a discusiones entre mestizófilos y eugenistas, entre hispanistas e indigenistas, entre tradicionalistas y modernizadores. Pero las necesidades de las mujeres y de los hombres en un creciente proceso de urbanización y para muchos de ellos de supervivencia, contrastaban con las apremiantes urgencias del nuevo grupo en el poder de pacificar y unificar al país a través del establecimiento de un determinado orden social, en medio de una disputa por el control de las conciencias entre los grupos más poder-

²⁰ Gabriela Mistral, *Lectura para mujeres*, p. 11.

sos: la Iglesia y los revolucionarios en el gobierno. Es así que para 1934 el debate en torno a la coeducación y la educación sexual en las escuelas primarias mostró la influencia que para esos años habían recuperado las fuerzas conservadoras, tratando de evitar a toda costa que la sexualidad se discutiera en público, aunque obviamente sin lograrlo.²¹

Al inicio de los veinte, las discusiones en torno a las modificaciones de algunas leyes contrarias a la igualdad de las mujeres tanto en el plano jurídico como en el sexual, se dieron en el limitado círculo de las feministas mexicanas que para entonces protagonizaban una pugna entre al menos dos vertientes que podemos denominar moderadas y radicales.

Para 1922 se presentó una iniciativa de ley ante la legislatura del Estado de Yucatán, cuna de la vertiente radical del feminismo, para que se otorgara el derecho al voto a las mujeres y en la elecciones de la legislatura del estado efectuadas en 1923, el Partido Socialista de Felipe Carrillo Puerto, logró que se designaran como diputadas a tres mujeres. Estas primeras legisladoras del país fueron Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib y Beatriz Peniche de Ponce. Asimismo, Rosa Torre fue electa regidora en el ayuntamiento de Mérida. Todas ellas integrantes del Partido Socialista del Sureste quienes tuvieron que abandonar sus puestos en 1924 cuando Felipe Carrillo Puerto fue asesinado.

²¹ Elsa Muñiz, *Cuerpo, representación y poder. México en los albores de la Reconstrucción Nacional*, Introducción.

El Primer Congreso Feminista organizado por la sección México de la *Liga Panamericana para la Elevación de las Mujeres* se celebró en la Ciudad de México del 20 al 30 de mayo de 1923. La delegación yucateca encabezada por Elvia Carrillo Puerto se llevó los titulares de los principales diarios capitalinos y protagonizó los más acalorados debates, sobre todo los relacionados con temas como el matrimonio, del cual las delegadas yucatecas afirmaban que era una “esclavitud legal”; apoyaron la propuesta sobre coeducación y educación sexual en las escuelas primarias; propusieron soluciones al problema de la trata de blancas; plantearon que al facilitar el divorcio, las mujeres se verían obligadas a buscar trabajo fuera de la casa.²²

Pero aunque ellas y sus discusiones fueron el centro de la atención durante el congreso, las resoluciones se tomaron sin considerar las propuestas de las yucatecas. En lo que el congreso aportó claridad y coincidencia fue en la necesidad de votar y lanzar candidaturas para que se promulgaran leyes favorables a las mujeres. Como resolutivo del congreso, se aceptó que decididamente estaban de acuerdo en la existencia de “una sola norma sexual para los hombres y para las mujeres”.²³ Asimismo se hizo un llamado para solicitar que el Congreso Federal de México eliminara los aspectos inequitativos de la Ley sobre Relaciones Familiares de 1917:

²² *El Universal*, México, p. 1 (Primera plana)

²³ *Primer Congreso Feminista de la Liga Pan-Americana de Mujeres*, p. 5.

[...] la presidenta Torres pretendía que los artículos 77, 93, 97 y 101 se aplicaran con el mismo criterio hombres y mujeres, y recomendaba que fueran suprimidos otros dos artículos, uno de los cuales prohibía a la mujer inocente (de adulterio) que se volviera a casar antes de que transcurrieran trescientos días y a la culpable, durante dos años. Los artículos 77 y 93 castigaban severamente la infracción por parte de la mujer al código de moral, tanto antes como después del divorcio y el artículo 97 disponía que la esposa inocente pudiera perder la custodia de los hijos si no vivía “honestamente”. Al mismo tiempo, el artículo 101 permitía que el excónyuge que debería pagar los alimentos se liberara de esa obligación pagando desde luego el importe de las pensiones alimenticias de 5 años.²⁴

Casi al mismo tiempo en otra región del país, en el estado de San Luis Potosí, gracias al gobernador constitucionalista Rafael Nieto se aprobó una ley que permitía a las mujeres que supieran leer y escribir participar en los procesos electorales municipales de 1924 y en los estatales de 1925. Dicha reforma permaneció vigente hasta 1926. En el estado de Chiapas, en 1925 se reconoció el derecho de las mujeres a participar en elecciones municipales y estatales.

²⁴ Ana Macías, “Felipe Carrillo Puerto y la liberación de las mujeres en México”, en Asunción Lavrín (comp), *Las mujeres latinoamericanas. Perspectivas históricas*, p. 344.

...Y las mujeres se organizaron

Para los años treinta, el mundo enfrentaba las consecuencias de la más profunda crisis del capitalismo vivida hasta entonces. Por otro lado, el régimen político mexicano emanado de la revolución, también presentaba signos de inestabilidad debido a una serie de factores que fueron determinantes para la definición de las condiciones que enfrentaba la sociedad y en particular las mujeres mexicanas. La guerra cristera, el asesinato de Álvaro Obregón, la formación del partido oficial y la campaña moralizadora de Vasconcelos por la presidencia de la república, son algunos de los eventos que marcaron el inicio de una década caracterizada por la organización de la sociedad en frentes amplios desde donde se planteaban, en particular, las demandas aún no satisfechas por los gobiernos revolucionarios.

Al inicio de la década los campesinos exigían el prometido reparto de las tierras; los obreros buscaban mejores condiciones de trabajo a pesar de que en 1931 se expidiera la Ley Federal del Trabajo; y las mujeres demandaban el derecho al voto para tener acceso completo a la ciudadanía. Entre 1934 y 1940, el Gral. Lázaro Cárdenas otorgó más de 16 millones de hectáreas de tierras cultivables, los obreros llevaron sus reclamos a numerosas huelgas declaradas, en su mayoría, favorables a los trabajadores; los ferrocarriles se nacionalizaron y el petróleo se expropió a las compañías extranjeras. Cárdenas también atendió los reclamos de las mujeres y mostró interés por la obtención de sus derechos. A prin-

cipios de su administración, en 1935, las feministas se organizaron en torno al Frente Único Pro Derechos de la Mujer (FUPDM) que aglutinó a más de cincuenta mil mujeres pertenecientes a cerca de ochocientas organizaciones en el país. Al tiempo que se creaba el FUPDM, el Partido Nacional Revolucionario (PNR) fue abriendo espacios a la participación política de las mujeres. En ese mismo año el PNR invitó a Margarita Robles de Mendoza, una conocida feminista, a organizar comités femeniles en el interior del partido. Por lo menos dos estados más, Guanajuato en 1934 y Puebla en 1936 dieron reconocimiento a los derechos de las mujeres a votar y ser votadas en elecciones municipales y estatales.

Vale señalar como antecedente de la formación de dicho frente, la actividad realizada por las mujeres trabajadoras, quienes entre 1931 y 1934 organizaron tres congresos de obreras y campesinas. Destacó la presencia de María Ríos Cárdenas, en quien podemos reconocer el vínculo que se estableció entre el movimiento de las trabajadoras y el de las feministas, pues Ríos Cárdenas, quien fuera una de las principales organizadoras de los congresos obreros, había publicado entre 1926 y 1929, la revista feminista *Mujer*. Con la intención de formar una organización que aglutinara a las mujeres de diversas corrientes y tendencias, Ríos Cárdenas se unió a las dirigentes del Partido Feminista Revolucionario y del Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias e invitaron a todos los grupos femeninos locales para que enviaran delegadas al primer congreso. En esta ocasión María Ríos Cárdenas propuso la formación de una or-

ganización nacional feminista con sede en la Ciudad de México que estableciera relaciones con el gobierno, los sindicatos y las organizaciones campesinas.

Entre las delegadas al congreso se encontraba un grupo de mujeres marxistas, cuyas dirigentes eran Concepción Miel (escritora de corridos) y María del Refugio García (colaboradora de la publicación comunista *El Machete*) quienes se opusieron a lo planteado por Ríos Cárdenas y señalaron que la estrategia era unirse a las agrupaciones laborales y campesinas ya existentes. De esta manera se formaron dos corrientes dentro del feminismo que pugnaba por la obtención del voto para las mujeres, mismas que ya habían tenido presencia y disputas durante la década anterior.

Para 1936 el PNR aceptó la participación de mujeres en los plebiscitos internos. Esto permitió que el comité femenil del Puerto de Veracruz lanzara como precandidatas a diputada propietaria y suplente a María Tinoco y a Enriqueta Limón de Pulgarón, en las elecciones internas celebradas ese mismo año. Estas candidatas ganaron por mayoría de votos, pero su triunfo no fue reconocido por el Comité Nacional. En 1937, el FUPDM postuló a dos de sus militantes como precandidatas a diputadas en los plebiscitos internos del PNR. Refugio García, maestra rural, militante comunista y secretaria general del FUPDM, contendió en el distrito electoral de Uruapan, Michoacán. Por su parte, Soledad Orozco, viuda y con seis hijos, contendió por distrito de León, Guanajuato. Ambas candidatas obtuvieron mayoría de votos sin que fuera reconocido su triunfo por el PNR.

Sin embargo, emprendieron una lucha ardua y a Soledad Orozco la postularon para las elecciones de julio. En cambio se negó rotundamente a aceptar el triunfo de Cuca García quien indignada decidió llevar la lucha hasta las últimas consecuencias. Rompió la alianza del FUPDM con el PNR y lanzó su candidatura independiente sólo con el frente.

Con entusiasmo y convicción en junio de 1937 en Michoacán Refugio García hizo campaña como candidata. Hacer una campaña fue además de un medio para ampliar la conciencia ciudadana, una oportunidad para impulsar un proyecto político. En una carta dirigida al Presidente Lázaro Cárdenas, su coterráneo, le decía:

“... fue todo un trabajo de cultura y de educación cívica para el pueblo, enseñándoles sus derechos y sus deberes de ciudadanos, combatiendo la prostitución del voto por medio del tostón o de la copa y luchando contra el vicio de la embriaguez, por la salud y la cultura; defendiendo los trabajadores e incorporando a la mujer al movimiento social...”²⁵

El ejecutivo se comprometió públicamente a tomar las medidas necesarias para igualar políticamente a las mujeres. Dicho compromiso lo manifestó el Presidente Cárdenas durante su gira por Veracruz:

²⁵ Archivo General de la Nación, (AGN), Fondo Lázaro Cárdenas del Río, exp. 544.1/15, citado en Gabriela Cano, *op. cit.*, p. 308.

“...la acción del gobierno no se detendrá únicamente a tratar cuestiones que interesen o más convengan a los hombres, sino que colocará a las mujeres en el mismo plano que los hombres y para el efecto presentará la reforma que consideró necesaria para hacer que las mujeres queden definitivamente incorporadas a la función social y política. Porque no sería justo que estuviéramos reclamando la presencia de la mujer en los actos sociales cuando la hemos colocado en un plano de indiferencia política”.²⁶

A los pocos días de esta declaración, cuando se abrió el periodo de sesiones de la cámara de diputados, el Ejecutivo presentó una iniciativa de ley para modificar los artículos 34° y 35° constitucionales y dar reconocimiento a los derechos ciudadanos de las mujeres. La reforma fue aprobada por ambas cámaras y por las legislaturas locales, pero alegando una falla de procedimiento no fue concluida su declaratoria formal y no fue publicada en el *Diario oficial*. Hasta ahora no se ha dado una explicación precisa de la coyuntura política en la cual no se concluyó el trámite normal, al parecer en el último momento predominó en el interior del gobierno una posición que rechazaba el argumento planteado en la exposición de motivos de la reforma:

“no existe el peligro de que la acción de la mujer campesina, obrera o empleada se extravié debido a la influencia de las ideas conservadoras”.²⁷

²⁶ *loc. cit.*

²⁷ *Ibidem.*, p. 310.

Este fue un duro golpe para la causa de las mujeres, el movimiento sufragista vivió en los años siguientes un proceso de desgaste y debilitamiento. A ello contribuyó, entre otros factores, el ascenso de un gobierno conservador encabezado por Manuel Ávila Camacho.

Se llega, por fin, el día

Durante algunos años, el debate por los derechos de las mujeres desapareció de la escena política nacional, fue hasta 1945 cuando Miguel Alemán, entonces candidato a la presidencia de la república, en acto de campaña anunció su intención de promover una reforma constitucional que concediera a las mujeres el derecho de votar y ser votadas, pero solo en elecciones municipales, Alemán señalaba lo siguiente:

“...la mujer tiene un sitio que le está esperando, porque la organización municipal es la que tiene más contacto con los intereses de la familia y la que debe más atención a las necesidades del hogar y de la infancia”.²⁸

La demanda se asimiló al programa político del candidato como una extensión al mundo público del papel de esposa y ama de casa. Así, el 24 de diciembre de 1946, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa enviada por

²⁸ En *Más mujeres al Congreso*, Programa Nacional de la Mujer, México, 1998, p. 19.

el Presidente Miguel Alemán, en virtud de la cual se adicionó el artículo 115 constitucional, que el 12 de febrero de 1947 entró en vigor para conceder el derecho a las mujeres a votar y ser votadas en los procesos electorales con los que las mujeres mexicanas adquirieron parcialmente los derechos ciudadanos, quedando como sigue:

En las elecciones municipales participarán las mujeres en igualdad de condición que los varones, con el derecho de votar y ser votadas.²⁹

La posibilidad del reconocimiento del derecho al voto estatal y federal se abrió en la siguiente campaña electoral. En 1952, Amalia Castillo Ledón, Presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, con sede en Washington se dirigió a Adolfo Ruiz Cortines, entonces candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional, para solicitarle que se concedieran derechos políticos plenos a las mujeres.

El 6 de abril de 1952 se reunió la Asamblea Nacional Femenil, en ella participaban mujeres que representaban a los tres sectores del PRI, de todos los estados de la república, para apoyar la candidatura de Adolfo Ruiz Cortines a la presidencia de la república. Se calcula que asistieron 20 mil mujeres y ante ellas, el candidato promete iniciar las reformas constitucionales para reconocer la igualdad política de las mujeres. En las crónicas de

²⁹ *loc. cit.* Las negritas son nuestras.

la asamblea, escritas por Martha Andrade de del Rosal, se reproducen las palabras de Ruiz Cortines:

(...) si el voto nos favorece en los próximos comicios, nos proponemos iniciar ante las Cámaras las reformas legales necesarias para que la mujer disfrute los mismos derechos políticos del hombre". Y las mujeres gritaban: ¡Repítalo, don Adolfo, repítalo!.³⁰

El candidato ofreció apoyar la solicitud siempre que estuviera avalada por quinientas mil firmas de mujeres. Castillo Ledón obtiene las firmas y para estos momentos, cuando el movimiento feminista era prácticamente inexistente y el sufragio femenino solamente estaba en la mente de unas cuantas, su obtención se convirtió en una concesión otorgada desde las altas esferas del poder, además de ser usada por el régimen en su intento de construirse una imagen internacional de modernidad.

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el martes 9 de diciembre de 1952 se dio lectura a una iniciativa del Ejecutivo, redactada en los siguientes términos:

C.C. secretarios del H Congreso de la Unión. Presentes.

Considerando que la mujer mexicana, generosa y desinteresadamente ha prestado su valiosa aportación a las

³⁰ *En* Archivo General de la Nación, *Fondo Adolfo Ruiz Cortines*, c. 685, exp. 545. 2/1, 5 fs.

causas más nobles, compartiendo peligros y responsabilidades con el hombre, alentándolo en sus empresas e inculcando a sus hijos los principios morales que han sido un firme sostén de la familia mexicana.

Considerando que, a partir de la Revolución y consciente de su alta misión en las vicisitudes de nuestras luchas libertarias, la mujer ha logrado obtener una preparación cultural, política y económica similar a la del hombre, que la capacita para tener una eficiente y activa participación en los destinos de México.

Considerando que siempre he abrigado la convicción de que la mujer mexicana, ejemplo de abnegación, trabajo y de moral, debe recibir estímulo y ayuda para su participación creciente en la vida política del país, y que en la pasada campaña electoral, al auscultar el sentir, no solo de los núcleos femeninos, sino de todos los sectores sociales, se puso de manifiesto que existe un ambiente notoriamente favorable al propósito de equiparar al hombre y a la mujer en el ejercicio de los derechos políticos.

Considerando, asimismo, que la intervención de la mujer en las elecciones municipales ha resultado benéfica, se juzga conveniente reformar el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de concederles iguales derechos políticos que el hombre; y reformar el artículo 115 de la propia Constitución, derogando la adición que figura en la fracción I de dicho artículo y que solo concedió el voto activo y pasivo de la mujer para las elecciones municipales.

En virtud de lo anterior y con fundamento en la fracción I del artículo 71 de la Constitución Federal, someto a

la consideración de vuestra soberanía, la siguiente iniciativa de reformas a los artículos 34 y 115 de la Constitución Políticos de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 1º. Se reforma el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 34. Conciudadanos de la República, los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además de los siguientes requisitos:

I. Haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y

II. Tener un modo honesto de vivir

Artículo 2º. Se reforma el artículo 115 de la Constitución para quedar de la siguiente manera:

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo y popular; teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre conforme a las bases siguientes:

I. Cada municipio será administrado por un ayuntamiento de elección popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el gobierno del Estado.

Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el período inmediato.³¹

Al día siguiente de su toma de posesión, el Presidente Ruiz Cortines envió al Congreso de la Unión una

³¹ *Más mujeres...op. cit.*, pp. 29-30.

iniciativa de reforma a los artículos 34° y 115° constitucionales, misma que fue remitida a la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados.

Finalmente, el 17 de octubre de 1953 la reforma que reconocía plenos derechos a las mujeres fue publicada en el *Diario oficial*.

El 4 de noviembre de 1953 se envía un Memorandum “estrictamente confidencial” sobre los alcances de la reforma constitucional a partir de la cual se otorga a las mujeres el derecho al sufragio universal y sobre las acciones que debería emprender el partido oficial para enfrentar una posible tendencia hacia la derecha durante las elecciones. En respuesta, el 18 de noviembre Jesús Reyes Heróles y José Iturriaga emiten un documento que dirigen a la Presidencia de la República y en el cual expresan sus inquietudes, en él, señalan que a la par de la aprobación de esta iniciativa se hace necesario plantear algunas adecuaciones del artículo 130 constitucional para “evitar el peligro de actividades políticas confesionales”,³² y se enfatiza el peligro de que la Iglesia Católica tenga un gran ascendiente en la política, ya que “...el sufragio de la mujer matizará en gran medida el resultado de los comicios”.³³ Al ofrecer la igualdad de derechos ciudadanos, el Presidente Ruiz Cortines planteó que la influencia de la Iglesia Católica podría neutralizarse con la “mera observancia puntual de los artículos

³² Archivo General de la Nación, *Fondo Ruiz Cortines*. c. 685, exp. 545. 2/1, 5 fs.

³³ *loc. cit.*

130 y 3”;³⁴ de igual manera, propone que el PRI postule “la candidatura de los mejores hombres”.

Así, para el 7 de septiembre de 1954 Aurora Jiménez de Palacios se convierte en la primera diputada federal por el 1er Distrito del estado de Baja California.

Colofón: ¿Concesión o lucha?

Ejercer el derecho al voto es común para las mujeres de nuestros días. Como en casi todos los países del mundo, este derecho no fue concedido a las mujeres a la par que a los hombres. Tuvieron que pasar años de inequidad, de falta de participación y de negación de la importancia que las mujeres tienen en las sociedades. Como puede observarse, la lucha que libraron las mujeres en México por el sufragio fue lenta, dolorosa y casi desconocida. Insistir en su reconocimiento es adoptar una postura ante diversos procesos de inequidad que nuestras sociedades reproducen cotidianamente. Saber que las mujeres demandaban su reconocimiento como ciudadanas nos permite apropiarnos de un poco más de nuestro ser, puesto que la obtención de derechos civiles por parte de las mujeres no fue simplemente adoptar la calidad de ciudadanas, significó reconocerse como sujetos, darles el estatus de seres sociales.

El largo proceso que aquí se relata sufrió altibajos. Se conformó de duras contiendas y de lapsos de indiferen-

³⁴ *loc. cit.*

cia. Es cierto también que tanto el negarles la categoría de ciudadanas en los albores de la nación como reconocerlas como tales en los años en los que el sistema político gozaba de su mejor momento, obedeció a las necesidades de surgimiento y reproducción del régimen, no obstante, las mujeres mexicanas de distintos estratos y condiciones sociales estaban conscientes de su papel histórico y de la importancia de su lucha.

La pregunta inicial queda abierta, aunque realmente no es necesario responderla, definir si fue concesión o producto de la lucha, ahora resulta irrelevante, sirva más bien para suscitar la discusión, para reflexionar sobre el hecho acontecido en 1953: ¿a quién benefició? ¿porqué en ese momento y no antes? ¿o después? ¿qué pasaba por la mente de los presidentes en turno y de los legisladores? Pero, sobre todo, me parece que es un buen motivo para pensar la situación actual de las mujeres, en la que las conquistas jurídicas se han sucedido pero la sociedad y la cultura se resisten, en muchos casos, a reconocer la equidad de la que deben gozar las mujeres en todos los ámbitos de la vida social.

Considero que resulta trascendente, en todo caso, pensar en los impactos que tales modificaciones legales han tenido en la vida diaria de las mujeres y advertir qué peso tienen, dichos logros, en la vida y conformación de los sujetos femeninos, en particular en la obtención de sus derechos sociales.

Capítulo III

La crisis de 1994-1995 en México

*Marco Antonio González Gómez**

La historia de México es prolija en ejemplos de esos fenómenos que genéricamente denominamos crisis, los cuales podemos definir como procesos generadores de desestabilización en un ámbito específico como el económico, el político, o el social, es decir, las crisis usualmente inciden en mayor medida en un sector específico de la totalidad social, lo que nos permite hablar de crisis políticas, económicas o sociales. Siendo la realidad sociohistórica una totalidad en el que las diversas estructuras políticas, económicas y sociales se encuentran estrechamente interrelacionadas, interinfluenciándose y formando parte de un todo, las crisis siempre afectan a todos los diversos niveles de la realidad social, aunque no a todas las estructuras con la misma intensidad, por tanto, las crisis se presentan generalmente como fenómenos disruptivos que afectan con más fuerza a un campo sociohistórico específico.

Existen otro tipo de crisis, que más raramente se presentan, éstas son crisis globales de la sociedad y afectan al

* Profesor-Investigador del Departamento de Sociología de la UAM-Azcapotzalco.

conjunto social de manera extrema en todos los niveles. La llegada de los españoles a México y el subsecuente proceso de conquista y sometimiento de los reinos indígenas al yugo español puede servirnos para ilustrar este tipo de crisis global que aún hoy en nuestro país parece no haberse superado del todo y cuyos resabios siguen marcando el desarrollo histórico nacional. Las crisis globales no tienen necesaria o únicamente orígenes sociales, factores ambientales como la erupción de un volcán o algún otro fenómeno natural contingente pueden llevar a la crisis global y extrema de una sociedad, como sucedió en el caso del Vesubio que enterró la ciudad de Pompeya o en el caso de Tambora, en Indonesia, donde otro volcán sepultó también a una civilización entera.

En términos del desarrollo capitalista, existen ciertas crisis económicas de largo plazo que se han definido como 'crisis Kondratiev' debido al economista ruso que contribuyó significativamente a su estudio. Estas crisis son diferentes a las 'crisis cíclicas' de corto plazo que se presentan en las sociedades capitalistas aproximadamente cada diez años más o menos.¹ Las crisis Kondratiev son crisis que se presentan aproximadamente cada treinta, cuarenta o cincuenta años y una de sus características principales es que afectan al conjunto del sistema mundial provocando por consiguiente, una parálisis de graves dimensiones a nivel global. Como ejemplo de

¹ Respecto a las crisis en el capitalismo ver: John Strachey, *Naturaleza de las crisis*. México, El Caballito, 1973.

esto están la crisis de 1873, la Gran Depresión de 1929 y la crisis de 1970.²

Antecedentes de las crisis en México

La percepción de estos fenómenos por los analistas especializados y por la cultura popular en el siglo XX en nuestro país se orientó básicamente hacia el concepto de crisis como crisis económicas. El principal elemento que las caracterizaba desde esa perspectiva, era la variación en el tipo de cambio de la moneda nacional respecto al dólar, es decir, las crisis se identificaban como devaluaciones.

En contraste, la Revolución Mexicana constituye un caso de crisis política extrema, que conlleva también una fuerte crisis económica acompañada de depreciación (devaluación entre 1912-1916), pero a partir de entonces, en buena medida, la estabilidad política (que evidentemente no fue absoluta) mantenida por el régimen de partido único en el siglo XX, contribuyó, sobre todo a nivel popular, a definir las crisis en términos económicos, ante la evidente falta de conmociones políticas capaces de poner en jaque la estructura política nacional.

De tal manera, hay referencias a tres alteraciones devaluatorias identificadas por la sociedad como 'crisis',

² Ver, Nicole Bousquet. "From Hegemony to Competition: Cycles of the Core?" en Terence K Hopkins & Immanuel Wallerstein, (Eds.) *Processes of the World-System*, California, USA, Sage Publications, 1980, pp. 46-83.

en 1938, en 1948-1949 y en 1954.³ El periodo conocido como ‘desarrollo estabilizador’ (1955-1970) fue una época exenta de crisis económicas, hasta que en 1976 con Luis Echeverría se suscitó otra devaluación, con la que se inicia el nuevo ciclo de “crisis de fin de sexenio” que asoló a la sociedad mexicana a fines del siglo XX, pues igualmente sucedió al final de la presidencia de José López Portillo en 1982, Miguel De la Madrid tuvo la suya en 1987, y en 1994-1995 acontece otra cuya responsabilidad es compartida entre Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.

En este punto deseo resaltar el hecho de que ninguna crisis –con la excepción de la acaecida en 1994-1995– por lo menos desde el cardenismo, se asocia de manera significativa con una crisis concomitante en el sistema político. Precisamente uno de los objetivos de este trabajo es resaltar la convergencia en la crisis de 1994-1995 de alteraciones significativas tanto en el ámbito político como en el ámbito económico y algunas de sus influencias mutuas.

La crisis de 1994, connotaciones políticas

La crisis de 1994, tiende también a ser percibida generalmente como un fenómeno principalmente económico, lo que sería, a nuestro juicio, un enfoque parcial, unilateral y reduccionista, que conllevaría asimismo, una disminu-

³ Ver, Ricardo Torres Gaytán. *Un siglo de devaluaciones del peso mexicano*. México, SigloXXI, 1980.

ción de nuestras posibilidades analíticas para entender el fenómeno en otras dimensiones estructurales tales como el aspecto social y el político, sobre todo de este último, pues parece que esta crisis posee un carácter claramente diferente respecto a las otras, debido precisamente a la conjunción de una fuerte crisis económica con una intensa crisis política. Llama la atención la disociación que generalmente se hace de estas dos crisis, las que a mi parecer, se entrelazan e interinfluencian muy fuertemente, constituyendo un objeto de estudio que adquiere un sesgo más interesante por esta diferencia específica respecto a las otras crisis, resultando esta característica en mi criterio, un elemento central e indispensable para el análisis y comprensión de la misma.

La crisis de 1994-1995 evidentemente generó graves secuelas en el ámbito social, al haber alentado el empobrecimiento de amplios sectores de la sociedad, la pérdida de propiedades por numerosos sectores de la población, la caída del ingreso *per cápita*, fuerte desempleo y otros efectos varios que contribuyeron a que en la estructura social se profundizaran desigualdades sociales ya existentes.

Pero como hemos asentado arriba, la crisis económica se entrelazó con una grave crisis política con dos escenarios en los que se hacen presentes graves elementos de desestabilización política: la irrupción de la guerrilla en Chiapas en enero de 1994 y una fuerte crisis al interior de la élite política dominante, la cual expresa su alto nivel conflictivo entre otros sucesos, en el hecho de que se llegó hasta el grado gravísimo y extremo de la elimina-

ción física de algunos de los miembros más prominentes de esa élite. En principio la muerte de Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994 y el posterior asesinato del Secretario General del PRI, Francisco Ruiz Massieu pocos meses después, señala la existencia de fuertes disidencias al interior del PRI, disidencias que al parecer no encontraron solución, sino que se extendieron en el tiempo y al interior de la élite hasta entonces dominante. A la postre, este conflicto parece haber tenido un cierto papel en la pérdida de la hegemonía política del partido oficial en las elecciones del 2000 ante el PAN.

Otros sucesos relacionados con actores políticos relevantes, refuerzan la hipótesis de carencia de acuerdos en esa élite y la existencia de fuertes disidencias. Manuel Camacho Solís, quien hizo evidente su disgusto por no haber sido designado candidato del PRI a la presidencia, también había jugado un papel disruptivo para la unidad priísta, en su papel de Comisionado del gobierno salinista para las pláticas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, y por otra parte, no debemos dejar de mencionar el escandaloso asesinato del cardenal Posadas Ocampo en 1993 en el aeropuerto de Guadalajara, perpetrado por narcotraficantes quienes “confundieron” al cardenal con otra persona, según la versión oficial del asesinato. El mismo Carlos Salinas señala la existencia de un grupo que él denomina como “la nomenklatura”, grupo vagamente definido por él como los “tradicionalistas” ligados a la “época de las decisiones discrecionales y el clientelismo,

es decir, del estatismo populista”,⁴ del cual menciona abiertamente tan sólo a Luis Echeverría, según Salinas, las reformas emprendidas por él afectaban los intereses de la “nomenklatura”, la cual se movilizó junto con Zedillo y los “neoliberales” en su contra. Por consiguiente tenemos diversos hechos indicativos de los altos niveles de confrontación que habían alcanzado los conflictos al interior del PRI, así como la incapacidad de conciliación al interior del grupo priísta. En este sentido Márquez señalaba la existencia en el sistema político de un: “Incremento de incapacidad para la resolución de conflictos y generación de consensos. (y) Riesgos para la estabilidad derivados de las renovadas resistencias al cambio”.⁵ Es de hacer notar que la crisis política está presente y se agrava **antes** de que sobrevenga la crisis económica, y no solamente eso, sino que adicionalmente, la crisis política catalizará y exacerbará la crisis económica.

La crisis política que se hace evidente a principios de 1994, se entrelaza muy estrechamente con la crisis económica de diciembre del mismo año, debido a que casualmente los actores principales de la crisis política (Salinas y Zedillo), fueron también los actores centrales de la crisis económica de 1994-1995. Por las causas que sean, las dos crisis tienen protagonistas centrales que participan en los dos escenarios, no estamos en el caso de que el problema de un grupo político que afec-

⁴ Carlos Salinas de Gortari. *México. Un paso difícil a la modernidad*, p. 1189.

⁵ Enrique Márquez. *Por qué perdió Camacho*, p. 173.

ta tangencialmente a la disrupción económica y cuyos protagonistas confluyen de manera eventual con los protagonistas del otro problema, sino de dos situaciones extremadamente graves, críticas, en las que curiosamente, los actores principales, Salinas y Zedillo, son los mismos en los dos escenarios, parece de telenovela, pero así se presentó históricamente. Esta coincidencia tiene su fascinación. ¿Cómo, porqué, entre tantos actores políticos y habiendo tan numerosos grupos, los actores principales de las dos crisis son los mismos? ¿Es simplemente un azar de la historia? ¿O la historia nos quiere mandar un mensaje un tanto heurístico por ese medio? En principio, y sin afán de descubrir todo el sentido de la coincidencia mencionada, este hecho simplemente corrobora hasta aquí, en mi opinión, los profundos nexos existentes entre ambas crisis, nexos que no siempre podrán clarificarse y algunos tendrán pasajes definitivamente oscuros.

Como ya hemos mencionado antes, la fusión de crisis política y económica es tal vez el rasgo más peculiar y distintivo de esta crisis respecto a las anteriores y le confiere una complejidad y riqueza que no existe en otros fenómenos parecidos. Independientemente de que las causas estructurales que originaron la crisis económica parecen motivo suficiente para fundamentar el planteamiento de que la crisis se haría presente de manera prácticamente inevitable, queda como veta para la investigación el ahondar en las posibles repercusiones que la crisis política al interior de la élite pudo haber tenido en el carácter más o menos profundo de la crisis económica, en el surgimiento y manejo de la misma y en las

consecuencias políticas que aparentemente gravitaron negativamente al interior de la élite priísta, en el sentido supuesto de que los conflictos entre los priístas se extendieron lo suficiente en el tiempo y en la estructura partidista de manera tal que pudieron influir para impedir la cohesión política necesaria al interior de dicha élite para enfrentar exitosamente las elecciones presidenciales del año 2000, por lo que los desacuerdos políticos de 1994-1995 contribuyeron para que el PRI perdiera la supremacía política en las elecciones mencionadas.

La crisis política priísta efectivamente se ahonda y extiende en el tiempo, cuando a principios de 1995 Raúl Salinas de Gortari fue apresado⁶ y llevado a un reclusorio de máxima seguridad, donde permaneció durante todo el sexenio de Zedillo, siendo liberado hasta a fines de la administración foxista. Este hecho representaba la ruptura de una de las reglas no escritas del sistema político mexicano, que implicaba que a los expresidentes y a sus familiares no se les podía tocar. Por su parte, el conflicto entre Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, que alcanzó niveles de confrontación política nunca antes vistos en la historia reciente, desembocó en el autoexilio de Salinas, no sin antes pasar por el penoso episodio escenificado por él mismo que tomó la forma de un amago de huelga de hambre en una humilde vivienda de Monterrey, como protesta por la persecución y desprestigio que según él, sufría por parte del gobierno del presidente Ernesto Zedillo. Según ciertas versiones, Zedillo mandó

⁶ V. Andrés Oppenheimer. *México en la frontera del caos*, p. 220.

a un amigo mutuo, Arturo Warman, para convencer a Salinas que depusiera su actitud, con la promesa, ante la demanda de Salinas, de que cesarían los ataques del gobierno culpándolo de la crisis.⁷ Se dice incluso que posteriormente hubo una reunión secreta entre Salinas y Zedillo, aunque todo fue negado por el gobierno.

De cualquier manera, Salinas salió del país repudiado por la inmensa mayoría de los mexicanos que le culpaban de la crisis y aun de la muerte de Colosio, además del precio que como resultado de esa severa crisis, el PRI pagaría en las urnas. Más aun, el escándalo que la crisis suscitó a nivel internacional perjudicó el prestigio en los ámbitos internacionales de Carlos Salinas, lo que arruinó sus posibilidades de llegar a dirigir la Organización Mundial del Comercio (OMC), cargo al que Salinas aspiraba en sus días de gloria. Considero que es pertinente seguir el consejo weberiano de inquirirnos ¿qué hubiera sucedido si...? ¿Qué hubiera pasado si Salinas no cae en tal ruina política y hubiera logrado mantenerse con un liderazgo político más o menos limpio? ¿Esto hubiera podido arreglar el conflicto interpriísta, y enfrentar la elección con más cohesión y posibilidades de triunfo?

Debemos entonces, dimensionar la ruina de Salinas no como un desprestigio personal únicamente, sino más grave, como la caída en desgracia de la figura institucional de la presidencia priísta y de esa forma partidista de dominación, la que se cargó de un contenido político negativo, con una concomitante pérdida de legitimación

⁷ *Ibidem.*, pp. 242-243.

ante numerosos sectores de la población, es decir, la crisis de Salinas marcó también la crisis del PRI, al perder ese partido a su líder principal, perdió también a uno de los operadores principales en la manutención de la unidad y de la hegemonía política nacional de ese partido.

El Presidente Zedillo asumió desde el principio de su mandato lo que llamó una “sana distancia” respecto del llamado partido oficial y tuvo una actitud de “Jefe de Estado que velaría por el cumplimiento de las reglas independientemente de su filiación partidista”,⁸ sin favorecer a su partido sobre los demás, lo que se apartó de la política tradicional de los anteriores presidentes en este respecto, en este punto específico, nada secundario por cierto, debemos señalar también otra incidencia negativa del conflicto intrapartidista que trabaja erosionando la unidad priísta. ¿De qué manera psicológica habrá influido la crisis política y económica en la figura presidencial bajo Zedillo, en la conformación de esta conducta de alejamiento del presidente frente al partido oficial, o era algo presente desde antes en el proyecto del poder ejecutivo? ¿Convicción democrática, o cobro de culpas políticas? ¿O habrá sido el proyecto democratizador el que generó los desacuerdos al interior del PRI? Esto tiene sustento en el hecho de que desde su toma de posesión, el presidente Zedillo planteó clara y abundantemente su intención de promover una profunda reforma electoral que desterrara definitivamente las sospechas sobre

⁸ Esperanza Palma. *Las bases políticas de la alternancia en México. Un estudio del PAN y el PRD durante la democratización*, p. 189.

la limpieza de los comicios nacionales. El presidente Zedillo planteaba en su discurso de toma de posesión que: "México exige una reforma que, sustentada en el más amplio consenso político, erradique las sospechas, recriminaciones y suspicacias que empañan los procesos electorales en algunas zonas del país. Todas las fuerzas políticas, todas las dirigencias partidistas, todas las organizaciones sociales pueden y deben contribuir a que dejemos atrás para siempre, las dudas y las controversias sobre la legalidad electoral."⁹

Llama la atención que el proyecto democratizador estuviera bien consistente en el programa de gobierno del equipo zedillista, lo cual contrasta con la actitud vacilante, carente de un proyecto claro de política económica y de conducción general de la economía exhibidos por el nuevo gabinete, lo cual se evidenció entre otros hechos, al no establecer en las reuniones de noviembre de 1994, con el equipo de Salinas, la necesidad ineludible de llevar a cabo la devaluación y permitiendo la prevalencia de los argumentos de Aspe para no devaluar. Esta inconsistencia en la formulación del proyecto de gobierno del presidente Zedillo es notable si consideramos que éste había sido durante la gestión salinista Secretario de Programación y Presupuesto (después lo sería de Educación Pública), lo que supuestamente le confería una mayor manejo de los aspectos económicos

⁹ Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg. *La mecánica del cambio político en México. Elecciones, partidos y reformas*, pp. 375-376.

de gobierno que de los políticos, en el que se le consideraba más “inexperto”. Entre otros malos manejos en la conducción de la política económica destaca igualmente el llamado ‘error de diciembre’, que explicaremos más adelante. Grave también fue el hecho de no haber fijado una posición respecto al problema del peso, lo que confirma la actitud errática del nuevo gobierno en materia económica, actitud que contribuyó a cometer graves errores por parte del gobierno de Zedillo. Todo lo antes mencionado, señala a un programa de gobierno deficiente en el manejo de los factores económicos, pero paradójica y contradictoriamente, tenía al parecer, mejor armado el proyecto político-electoral.

Un factor fundamental fue el impulso a la Reforma Electoral de 1996, por medio de la cual, entre otros varios e importantes aspectos de la reforma mencionada, que también fortalecían la transición hacia la democracia mexicana, el Instituto Federal Electoral (IFE) se convertía en ente autónomo, independiente del gobierno,¹⁰ con el objetivo de que el país contara con un organismo electoral encargado de supervisar y organizar elecciones limpias y confiables, aunque en las elecciones en las que Ernesto Zedillo resultó ganador no hubo dudas sobre la limpieza de su triunfo electoral. Por otra parte, es de hacer notar, que el mismo Ernesto Zedillo reconoció el triunfo del PAN en las elecciones del 2000, calificando el resultado anunciado por él como definitivo, arrogándose una capacidad de validación de las elecciones que

¹⁰ *Ibidem.*, pp. 423-454.

no le correspondía, pues para eso estaba el nuevo IFE, independiente ya de la autoridad gubernamental.

Muchas preguntas, sobre todo de carácter político quedarán aquí sin respuesta, debido a que las intrigas de palacio tienen menos indicadores objetivos que los aspectos económicos, es más difícil conocer ciertos diálogos, desavenencias, o pugnas personales de los actores políticos en su quehacer propiamente político, a diferencia de lo que es el manejo de la economía, cuyos efectos, estructuras e indicadores tienen un carácter más objetivo. Muchos hechos políticos jamás obtienen respuestas con un alto grado de confianza o de plano no se sabe ni se sabrá a ciencia cierta lo acontecido, algunos aspectos quedarán siempre oscuros, desconocidos. Por ejemplo, el asesinato de Alvaro Obregón no se esclareció nunca del todo y el asesinato de Luis Donaldo Colosio parece estar en una situación similar. Por tanto, el elemento subjetivo y psicológico pareciera tener, desde esta perspectiva, un papel más amplio en el esclarecimiento de los fenómenos políticos que los fenómenos económicos, por lo menos en la crisis aquí analizada. Múltiples preguntas quedarán sin respuesta, por lo menos por el momento. ¿Sabía Zedillo quien asesinó a Colosio? en caso de que así fuera, ¿cómo influyó esto en la conducción de la política nacional y en su relación con la élite priísta? ¿ignoraba Zedillo quien fue el asesino? ¿qué motivos llevaron a Zedillo a encarcelar a Raúl Salinas, rompiendo la regla no escrita de la política priísta de no tocar a los expresidentes ni a su familia? ¿fueron elementos derivados de la crisis económica o hubo elementos políticos

adicionales que agravaron la ruptura entre Salinas y Zedillo, volviéndola irreconciliable? ¿es cierto que Zedillo desconocía el monto de los Tesobonos? En fin, como vemos, ciertos datos valiosos para el análisis del aspecto político son prácticamente imposibles de saber, los económicos no tanto, por ello la ciencia política ha estado desde siempre ligada al estudio de la psicología, de los rasgos conductuales y las virtudes o vicios del príncipe y de los hombres en general.

La designación del candidato, las elecciones de 1994 y la ruptura

La crisis política de 1994 y el asesinato de Colosio rompieron con la dinámica de transmisión del poder tal como se había dado hasta entonces bajo el dominio priísta. Por primera vez en muchas décadas, el futuro presidente no sería designado por el presidente saliente, pues Zedillo, en caso de ganar las elecciones de 1994, en vez de por dedazo, sería presidente por accidente. Una vez confirmada la muerte de Colosio, era perentorio nombrar al nuevo candidato priísta y no había mucho de dónde escoger, Aspe o algún otro miembro del gabinete estaban imposibilitados porque el plazo legal de renunciar al cargo público seis meses antes de las elecciones fijado por el artículo 82 fracción sexta de la Constitución, ya había vencido. La otra opción era modificar la Constitución, pero los panistas se rehusaron a aceptar una nueva modificación, pues poco antes el

mismo artículo 82 había sido modificado en su fracción primera para permitir que pudieran ser candidatos los hijos de padre o madre mexicanos, pero sin el requisito anterior de ser nacidos necesariamente en México, Salinas estaba atado de manos, se barajaron otros nombres como Ortiz Arana, Francisco Rojas, Genaro Borrego y hasta el de Pedro Joaquín Coldwell,¹¹ pero finalmente la decisión fue favorable para Ernesto Zedillo Ponce de León. El candidato priísta ganó con un amplio margen y al parecer sin irregularidad alguna, en una jornada electoral sin violencia y con una participación ciudadana que superó las expectativas de los más optimistas con 78% del padrón electoral asistiendo a las urnas y con un incremento de 16 millones más que en las elecciones de 1988 cuando votaron 19 millones, para un total de 35 millones de votantes.¹² El PRI ganó la elección presidencial con el 50.1% de los votos, el PAN obtuvo el 26.6% de la votación, el PRD el 17%, el PT el 2.8%, los otros partidos (PARM, PVEM, PPS y PDM), no alcanzaron siquiera el 1% de la votación cada uno.

La sucesión presidencial de 1994 fue diferente a las anteriores también por la ruptura abierta y se podría decir hasta violenta entre el presidente entrante y el saliente. Entre las reglas no escritas de la política mexicana estaba el acuerdo tácito de la ruptura entre el presidente

¹¹ Vr, Jorge Castañeda. *La herencia. Arqueología de la sucesión presidencial en México*, p. 308.

¹² Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, *op. cit.* pp. 354-356.

en funciones y el presidente anterior, lo cual se trataba de hacer de una manera sutil, en el entendido de que los expresidentes deberían abstenerse de participar en política, pero cobijados por la protección personal, respeto político y solvencia económica que el sistema brinda a sus dirigentes. No siempre sucedía así, como en el caso de Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas o de Luis Echeverría y José López Portillo, quien ante la impertinencia de Echeverría por seguir interviniendo en la política nacional, se tuvo que deshacer de su amigo de la infancia mandándolo de embajador a Australia.

En la ruptura entre Salinas y Zedillo, tan abrupta y alejada de las formas políticas acostumbradas hasta entonces, influyeron varios factores. Uno de ellos fue indudablemente la devaluación y crisis de 1994-1995, en la cual se acusaban el uno al otro de ser los responsables de la misma. Otro factor más difícil de explicar a fondo es la pugna al interior de la élite política que incluso llegó a la eliminación física del candidato oficial del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, y de José Francisco Ruiz Massieu máximo dirigente del PRI, muertes que no han sido aclaradas ni han tenido una explicación satisfactoria.

Una línea de interpretación ha planteado que tales conflictos se explican porque Carlos Salinas tenía la intención de seguir ejerciendo una influencia política sobre el nuevo gobierno, o que también Salinas tenía el proyecto de regresar al poder al estilo de Obregón, dejando un periodo de gobierno entre su primera administración, y otra, supuestamente después de que Zedillo

(o quien hubiera resultado presidente), dejara el poder, lo que sería el llamado “salinato”. Según ciertas versiones, Salinas “se había resistido firmemente en 1992 a negar sus intenciones de ser reelecto”¹³ y diversos sectores comentaban sobre su idea de permanecer como el “poder detrás del trono”, lo que sí es indudable en la personalidad de Salinas era su enorme ambición de poder, por lo que no hubiera resultado extraño que tuviera seguidores que alentaran tales pretensiones dado el buen desempeño que tuvo en sus primeros años de gobierno, cuando incluso remontó la duda sobre la legalidad de su triunfo electoral en 1988, y logró legitimarse ante no pocos sectores de la sociedad por sus acciones de gobierno eficiente que imponía orden tanto en el plano político como en el económico.

Salinas era un líder nato, pero excedido en ciertas cosas, lo que lo llevó a perder la capacidad de dimensionar en su justa proporción ciertos riesgos que él necesariamente tenía que prever que mal manejados o influenciados por movimientos aleatorios desequilibrantes, podrían precipitar a la economía nacional al desastre, como finalmente sucedió. La sobrevaluación del peso y el mantenimiento de los altísimos déficit de la balanza de pagos por varios años, son ejemplos de variables fundamentales para el mantenimiento del equilibrio socioeconómico nacional que fueron mal manejadas, y que, junto con otros factores, contribuyeron a la destrucción del mito de Salinas y su ‘milagro económico’.

¹³ Andrés Oppenheimer, *op. cit.*, p. 249.

El peso sobrevaluado

La crisis estaba anunciada desde por lo menos dos años antes, cuando diversos analistas internacionales empezaron a advertir que el peso mexicano estaba sobrevaluado, y que consiguientemente era necesario ajustarlo a su valor real, es decir, era necesaria una devaluación. Entre los analistas que sugerían tal medida, estaba Rudiger Dornbusch, quien había sido maestro nada menos que del Secretario de Hacienda del gobierno salinista, Pedro Aspe Armella, en el afamado Massachusetts Institute for Technology (MIT), considerado entre las mejores universidades del mundo. Dornbusch era un profesor que no tenía pelos en la lengua y en varias ocasiones hizo severas críticas y recomendaciones al gobierno mexicano para mejorar la conducción de la economía mexicana, señalando que el peso se debía devaluar en 20%.¹⁴ Ante tales advertencias, el gobierno de Salinas se resistió a devaluar, calculando seguramente la baja en su popularidad que tendría una medida tal, y cuidando su imagen política a costa de cometer errores clave para el funcionamiento económico, como finalmente sucedió. Las palabras expresadas por López Portillo de que “presidente que devalúa se devalúa” deben haber retumbado varias veces en las nada pequeñas orejas de Carlos Salinas. Él mismo narra que pocos días antes de la toma de posesión de Ernesto Zedillo, hubo dos reuniones en su casa, el 19 y 20 de noviembre de 1994, en las que se dis-

¹⁴ Carlos Salinas de Gortari, *op. cit.*, p. 1146.

cutió por miembros de los dos equipos de gobierno (el entrante y el saliente), el tan espinoso tema de la devaluación, refiere Salinas que ya por estas fechas se observaban salidas importantes de dólares hacia el exterior. Según Salinas, Pedro Aspe hizo unas defensas “sensatas y convincentes” a favor de no devaluar, desoyendo para mal, las recomendaciones de su maestro Dornbusch, además, en tales reuniones prevaleció el criterio político del equipo salinista (cuidando la imagen del jefe), el cual argumentaba que devaluar en ese momento, tan cercano al inicio de la nueva administración, no daba un margen de tiempo adecuado al gobierno saliente “para implementar el paquete de política económica indispensable en estos casos”.¹⁵

Por consiguiente, es claro que Carlos Salinas contó con la información pertinente y necesaria en torno al problema de la sobrevaluación del peso mexicano, mas la decisión y el interés político prevaleció sobre la sabiduría teórica y técnica que indicaban que lo conveniente era devaluar la moneda, esta decisión de orden político contribuyó a detonar la crisis económica derivada de errores como éste. Contribuyó, porque la sobrevaluación del peso no era el único problema que gravitaba peligrosamente sobre la economía mexicana.

¹⁵ *Ibidem*, p. 1112.

El sector externo y las reformas estructurales

Otra variable que había evolucionado peligrosamente durante el gobierno salinista era el sector externo de la economía mexicana. Tanto el déficit de la balanza comercial como el de balanza de pagos habían observado un aumento desproporcionado, el más preocupante era el de balanza de pagos, pues el de balanza comercial se subsume en éste. Igualmente como sucedió en el caso del peso sobrevaluado, diversos analistas internacionales empezaron hacia 1992 a mirar con ciertos resquemores la balanza de pagos mexicana y prendieron focos rojos sobre lo que a ellos les parecía un aumento peligroso de esos déficit. Su preocupación básica era: ¿Podrá el gobierno mexicano financiar déficit de tales magnitudes? A los expertos financieros de Londres les parecía difícil, y en Estados Unidos también generó preocupaciones el alto nivel de los déficit de la balanza de pagos mexicana.¹⁶

Por entonces, México tenía todavía a su favor varios factores, por un lado, la intensa liberalización comercial que había realizado desde 1986 con su incorporación al GATT (hoy OMC), y el intenso proceso de privatización de empresas paraestatales iniciado bajo la administración de De la Madrid y continuado por el presidente Salinas, quien había realizado las ventas de las paraestatales más grandes y costosas, hacían de México un ejemplo del cambio estructural hacia el neoliberalismo, lo que ava-

¹⁶ *El Financiero*, 14 de septiembre de 1992, 1ª. Plana y pp. 3-4.

lababa en parte su conducción económica y sugería que se iba por el camino correcto.

Además, al devolver Carlos Salinas los bancos nacionalizados por López Portillo a manos privadas y con la venta de Telmex, se habían logrado cuantiosos fondos, los que se habían reunido en el Fondo de Contingencia Económica, cuyo monto ascendía al cierre de 1993 a 61,431 millones de pesos, de los cuales la venta de dos entidades, el sistema bancario y Telmex habían aportado 56,514 millones de pesos, el 92% del total.¹⁷ Esto significaba dos cosas: 1) Que la banca internacional tenía que apoyar a México, que se había destacado como un líder internacional en la promoción de las reformas estructurales, y adicionalmente, se consideraba que el gobierno mexicano contaba con uno de los mejores Gabinetes del mundo, según algunos analistas internacionales, y 2) Si los mexicanos llegaban a generar un problema grave en su economía, pues para eso tenían el dinero del Fondo de Contingencia Económica, que equivalía al tipo de cambio de ese momento a aproximadamente 18,067 millones de dólares (considerando un tipo de cambio de 3.4 pesos por dólar), con los cuales México podría (y tendría que) responder ante cualquier problema financiero con la comunidad nacional e internacional.

Pero México tenía todavía otro as a su favor, la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual había sido acogido con

¹⁷ SHCP, *Desincorporación de Entidades Paraestatales. Información básica de los procesos*, p. 63.

beneplácito por amplios sectores en Estados Unidos y Canadá, y es más, al vecino pobre (México) se le había dado trato especial, pues la negociación del TLCAN se hizo por la “fast track” (vía rápida) del Congreso estadounidense. Esta sí era política de buena vecindad, sin discriminaciones, al contrario, con todas las cortesías, amplios sectores de la sociedad mexicana podríamos decir, la opinión mayoritaria, compraron el boleto del libre comercio prometido por Salinas para entrar al primer mundo y codearse de tú a tú con los vecinos del norte con el TLCAN. También muchos estadounidenses y canadienses le compraron el boleto, lástima que la administración salinista haya resultado a fin de cuentas un enorme fiasco. Como ha comentado Torres: “Salinas y su equipo asumieron que la inversión extranjera continuaría llegando al país debido a las negociaciones del TLCAN...pero una serie de eventos políticos conmocionantes demostraron que esos supuestos estaban equivocados”,¹⁸ Salinas y su grupo habían sobredimensionado las expectativas que se podían tener sobre los beneficios que la apertura comercial y financiera podía proporcionar al país.

Pero por lo pronto, las promesas del TLCAN marchaban sobre ruedas. Pero, ¿Qué pretendía Salinas con esta nueva fase de liberalización del TLCAN, si a fines de 1988 México ya había casi terminado su proceso de liberalización comercial? En efecto, bajo la administración

¹⁸ Eduardo Torres Espinosa. *Bureaucracy and Politics in Mexico*, p. 225.

de De la Madrid, el 97% de las fracciones arancelarias (que eran en ese momento como diez mil) habían sido ya liberadas del permiso previo de importación, se les habían reducido los aranceles y habían quitado los precios oficiales, sólo un pequeño puñado de productos, los productos agrícolas, petroleros, armas, drogas, fármacos, químicos, automóviles y computadoras personales habían quedado al margen de la apertura.¹⁹ Para Salinas, el TLCAN sería el instrumento para la liberalización financiera. Después de la terrible experiencia de sequía de dólares vivida en la década de los ochenta por México y todo Latinoamérica ante la negativa de Estados Unidos para conceder préstamos, debido al alto nivel del monto de la deuda externa latinoamericana, se debía buscar no volver a caer en lo mismo a futuro.

Conocedor de esta dura experiencia, Salinas pensó en un mecanismo para que los capitales de los bancos y de otros inversionistas fluyeran en México libremente, sin intervención gubernamental, el TLCAN fue el instrumento para la liberalización financiera, aunque los canadienses y los estadounidenses aprovecharon la ocasión para que México abriera su frontera a los productos agrícolas de esas naciones, y así nada más de pasadita, se negoció la ruina para millones de agricultores mexicanos, incapaces de competir con los niveles de productividad de las transnacionales de Estados Unidos y Canadá.

De tal manera, aunque al gobierno de Salinas se le fueron acumulando enormes déficit en balanza de pa-

¹⁹ *Revista de Comercio Exterior*, mayo de 1989, p. 429.

gos, todavía hacia 1992 y 1993, el manejo de éstos no se había complicado, y el entorno internacional veía con buenos ojos la conducción económica guiada por las reformas estructurales neoliberales. En 1992 el déficit en balanza de pagos llegó a 24,804 millones de dólares, en 1993 fue de 23,392 millones de dólares y en 1994 subió hasta 29,419 millones de dólares. Mientras la inversión extranjera fluyó por la confianza que se tenía en México, no hubo problema, el gobierno financiaba con los flujos de inversión extranjera los déficit de balanza de pagos, pero en 1994 la inversión dejó de llegar, no tanto por la rebelión zapatista, eso no ahuyentó tanto la inversión foránea, los inversionistas se espantaron realmente cuando los priístas se empezaron a matar entre sí, es decir, primero con la muerte de Colosio, en el extranjero nadie creyó la historia del asesino solitario Aburto Martínez, se puso un poco peor cuando Carpizo amenazó con renunciar a la Secretaría de Gobernación a mediados de año, aunque finalmente no lo hizo, mas el asesinato de Francisco Ruiz Massieu fue lo gota que derramó el vaso, agudizando al extremo la crisis política que acabó con los sueños de Salinas y ciertamente también de muchos mexicanos que depositaron su confianza en las políticas y promesas de ese gobierno.

La muerte de Colosio provocó una intensa fuga de capitales por un lado, y por otro, la inversión extranjera, sobre todo la de cartera (IEC, la que se invierte en la bolsa de valores) que había aumentado notablemente desde 1991 hasta 1993, disminuyó en 1994 y 1995 (Ver Cuadro I), esto afectó a la economía mexicana en dos formas:

1) Las reservas internacionales disminuyeron de 29,000 millones de dólares en febrero a poco más de 17,000 millones en noviembre, y en diciembre eran de sólo 6,600 millones, lo que hizo insostenible la situación para el nuevo gobierno, quien primero devaluó el peso y luego lo dejó flotar. 2) La inversión extranjera que en 1993 había llegado hasta 33,308 millones de dólares descendió a 19,154 millones en 1994. (Ver Cuadro I). El gobierno mexicano había financiado el déficit de balanza de pagos con la inversión extranjera, pero en 1994 no pudo seguir haciéndolo, pues la inversión extranjera total fue 10,000 millones de dólares menor al déficit de balanza de pagos, complicando más el deterioro financiero y la capacidad del gobierno para cumplir con sus compromisos. El factor que afectó más fue la inversión extranjera de cartera (IEC), la cual en 1994 fue menor en más de 20,000 millones de dólares respecto al año anterior y en 1995 sacó 9,714 millones más (Ver Cuadro I), lo que provocó un déficit en la inversión extranjera global y debilitó la capacidad financiera del gobierno mexicano. La liberalización financiera lograda por Salinas mostró entonces sus inconvenientes, pues la IEC, el capital extranjero especulativo invertido en bolsa de valores básicamente, puede dejar el país en minutos, a diferencia de la inversión extranjera directa (IED), la que al invertirse en empresas, tiene un arraigo mayor. De hecho, esta última inversión (IED), mantuvo su nivel de inversión desde 1994, en buena medida debido a la puesta en marcha del TLCAN, lo que ayudó a que la crisis financiera no fuera de mayores proporciones.

Cuadro I
México: composición de la inversión extranjera,
1989-1995 (Millones de dólares)

<i>Año</i>	<i>Inversión Extranjera de Cartera (IEC)</i>	<i>%</i>	<i>Inversión Extranjera Directa (IED)</i>	<i>%</i>	<i>Total</i>
1989	493.3	13.9%	3,036.9	86.0%	3,530.2
1990	1,994.5	43.0%	2,633.2	56.9%	4,627.7
1991	9,870.0	67.4%	4,762.0	32.5%	14,632.0
1992	18,011.0	80.3%	4,393.0	19.6%	22,404.0
1993	28,431.0	85.2%	4,900.0	14.7%	33,331.0
1994	8,182.2	42.7%	10,972.5	57.3%	19,154.7
1995	-10,139.1		6,964.3		-3,174.8

Fuente: elaborado por el autor con datos de los Informes Anuales del Banco de México. Años varios.

Un argumento que Carlos Salinas²⁰ presentó como relevante fue que a los factores de desestabilización internos, se sumaron otros en el ámbito internacional, pues desde febrero de 1994 la Reserva Federal de los Estados Unidos había subido las tasas de interés en ese país. En el mes de noviembre se verificó otra alza en ese país, por lo que en menos de un año las tasas de interés se duplicaron, con lo que Estados Unidos se convirtió en un país atractivo para colocar dinero, lo que a su vez estimuló la salida de capitales de nuestro país en esa di-

²⁰ Carlos Salinas, *op. cit.* p. 1101.

rección.²¹ Tal vez los rendimientos que se obtenían en Estados Unidos comparados con los que se podían obtener en México no eran tan atractivos, pero en este caso el factor confianza de la economía norteamericana junto a tasas más elevadas, alentó a ciertos inversionistas a colocar sus capitales en ese mercado.

Considero que los hechos antes mencionados proporcionan evidencia sustantiva del papel central que la crisis política desempeñó para crear las condiciones y contribuir a la aparente inevitabilidad y exacerbación de la crisis económica de 1994-1995. Aceptando el argumento de que la crisis se hubiera presentado de cualquier manera por los graves problemas estructurales existentes, también es cierto que la crisis política interna destruyó en ese momento la confianza de los inversionistas extranjeros para invertir en México y aceleró el estallido de la crisis al debilitar las finanzas del gobierno mexicano con la disminución del flujo de capitales extranjeros con que aquel financiaba hasta entonces sus déficit en balanza de pagos.

El nuevo gobierno y el error de diciembre

Aunque para algunos analistas la economía mexicana parecía carente de problemas, para otros, el balance de la administración salinista distaba de ser satisfactorio.

²¹ Carlos Tello. *Estado y Desarrollo Económico: México 1920-2006*, p. 649.

En el primer caso la revista *Businessweek* en octubre de 1994 comentaba que: “Los indicadores fundamentales de la economía mexicana están mejorando: aumenta la productividad del país, las finanzas públicas se mantienen cerca del balance y la inflación es la más baja registrada desde hace 21 años...el virtual presidente electo de México, Ernesto Zedillo, recibirá el próximo primero de diciembre la economía más estable que haya tenido cualquier otro presidente de ese país en 20 años”.²² Para el otro punto de vista, el salinismo dejaba como legado una economía tambaleante, con bajo crecimiento económico, con una muy fuerte expansión del crédito, con altas tasas de interés e inadecuada asignación de los préstamos que se orientaron al consumo y la vivienda, con escasa atención a la industria manufacturera y la creación de empleos fue también baja. A estos problemas se añadían los ya señalados como mantener un déficit en balanza de pagos alto y por largo tiempo, creer que el crecimiento de la productividad mexicana compensaría la revaluación del peso en términos reales y en la privatización de empresas paraestatales toleró prácticas monopólicas como en el caso de los bancos y teléfonos.²³

El llamado “error de diciembre” consistió en el hecho de que el gobierno de Zedillo en vez de simplemente devaluar la moneda y anunciar posteriormente sobre

²² *Ibidem.* p. 650.

²³ Rogelio Ramírez de la O, “La crisis del peso mexicano y la recesión de 1994-1995: ¿Previsible entonces, evitable en el futuro?” en Riordan Roett (comp.) *La crisis del peso mexicano. Perspectivas internacionales*, p. 37-42.

ello, puso sobre aviso a los integrantes del Pacto de Solidaridad Económica. Se convocó a los miembros del Pacto, dirigentes obreros y campesinos, empresarios y funcionarios del propio gobierno a una reunión en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a los que, por separado se les informó de la decisión de devaluar sin haberlo hecho, esto provocó una cuantiosa fuga de capitales al día siguiente, lo que terminó de arruinar las reservas internacionales, según Salinas, “entre el 20 y el 21 de diciembre de 1994, unos cuantos mexicanos vaciaron 4,633 millones de dólares de las reservas internacionales. Esta cifra representó la salida de capitales más elevada del México moderno en un solo día: el Banco Central perdió, prácticamente la mitad de las reservas internacionales con las que contaba el país”.²⁴

El todavía encargado de la Secretaría de Hacienda en ese momento Jaime Serra Puche, comentó años después que el error de diciembre consistió en: “Asegurar que no habría devaluación y luego tener que declararla. Y el haber confiado a los empresarios, los hombres del dinero, la medida que estaba por tomarse, aceptar su sugerencia de que no se hablase de devaluación sino de ampliar la banda de flotación, y durante la misma reunión, no sospechar que cuando ellos abandonaban el salón, era para realizar llamadas, para dar tips, para ordenar traslados de fondos: una sangría”.²⁵ El país había sido saqueado, como lo habían ya hecho anteriormente, Salinas

²⁴ Carlos Salinas, *op. cit.*, pp. 1124-1125.

²⁵ Carlos Tello, *op. cit.* p. 652.

achacaba la crisis a Zedillo y éste culpaba a Salinas, los mexicanos mencionaban como elementos centrales de la crisis las salidas de capital extranjero y los extranjeros señalaban que el socavamiento de la estabilidad de la economía mexicana fue obra de los propios mexicanos, tal como lo señaló el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un documento oficial:

La información disponible muestra que las presiones sobre las reservas internacionales de México durante 1994, y en particular justo antes de la devaluación, no provinieron de salidas de inversionistas extranjeros o de posiciones especuladoras tomadas por esos inversionistas, sino de mexicanos...Durante todo el mes de diciembre de 1994, los inversionistas extranjeros introdujeron divisas al país por alrededor de 370 millones de dólares...Además, durante las dos semanas previas a la devaluación mexicana de diciembre de 1994, prácticamente no hubo ninguna toma de posiciones especulativas en el mercado de futuros del peso.²⁶

En realidad, Salinas había dejado una economía tambaleante y con graves riesgos, y por su parte el gobierno de Zedillo no manejó la situación en forma adecuada, concedió información privilegiada y permitió la especulación y ataque contra el peso. Fue así como la crisis

²⁶ Fondo Monetario Internacional, *Internacional Capital Markets. Development, Prospect and Policy Issues*, Washington, D.C, agosto de 1995. Citado en Carlos Salinas, *op. cit.* p. 1142.

se precipitó y profundizó, por ello Ramírez de la O ha expresado: “El manejo de los aspectos institucionales de ese cambio de régimen fue peor que el acontecimiento mismo... (pero también) la estrategia a mediano plazo del gobierno de Salinas fue exageradamente riesgosa y estaba llamada a fracasar tarde o temprano”.²⁷

Consecuencias de la crisis

El gobierno de Zedillo se vio obligado a devaluar y después dejó flotando la moneda la que de un valor de \$3.45 por dólar en diciembre 19 de 1994, cayó a \$4.67 en Navidad y estaba a \$5.57 el 4 de enero de 1995, a fines de ese año el peso había caído a \$7.64 por dólar y al cierre del sexenio en el año 2000, la cotización del tipo de cambio era de \$9.57 pesos por dólar (Ver Cuadro II), con lo que la devaluación del peso en el sexenio de Ernesto Zedillo fue de 177%, lo que reforzó la percepción popular de que las crisis en México tienen como una de sus principales expresiones la devaluación de la moneda.

La crisis de 1994-1995 empezó con la devaluación, pero esto no fue sino el principio de una crisis de enormes proporciones que pronto se extendió al conjunto de la economía y de la sociedad. Los efectos de la crisis fueron devastadores, sobre todo en 1995, aunque otras diversas consecuencias de la crisis tardaron años en re-

²⁷ Rogelio Ramírez de la O, *op. cit.*, p. 36.

montarse. La economía mexicana vivió en 1995 su peor caída desde 1932 en términos de crecimiento económico, con un decrecimiento del PIB de 6.2%, el desempleo subió de 3.7 en 1994, a 6.3 en 1995, la inflación se elevó de 7.1% en 1994 a 51.9% en 1995, y en los años subsecuentes siguió siendo muy elevada (Ver Cuadro II), la formación bruta de capital se redujo en 30.9% y se calcula que el salario real descendió 16% en ese año.²⁸ De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), los hogares pobres e indigentes pasaron de 36% del total en 1994, a 43% de la población del país en 1996, el PIB per cápita de 1994 sólo se pudo alcanzar de nuevo hasta 1999, las tasas de interés pasaron entre diciembre de 1994 y marzo de 1995 de 15% a 110%.²⁹ El gasto público se vio sometido a una fuerte austeridad, recortando gastos sobre todo del sector social, el IVA se aumentó de 10% a 15% y los bienes y servicios públicos proporcionados por el Estado observaron una fuerte alza.

Las condiciones derivadas de la crisis hicieron que muchas empresas quebraran y el desempleo creció aceleradamente, asimismo, la fuerte expansión del crédito observado durante el gobierno de Salinas contribuyó a agravar la crisis, pues las tasas de interés desde 1995 aumentaron desproporcionadamente, con lo que numerosas familias se vieron imposibilitadas para pagar, con el consiguiente aumento de la cartera vencida de los ban-

²⁸ Rogelio Ramírez de la O, *op. cit.*, p. 46.

²⁹ Carlos Tello, *op. cit.* p. 654.

**Crecimiento económico, inflación, exportaciones
totales y tipo de cambio en México, 1995-2000**

<i>Año</i>	<i>PIB Variación Porcentual</i>	<i>Inflación Variación Porcentual</i>	<i>Exportaciones Totales (mdd)</i>	<i>Tipo de Cambio Pesos por dólar</i>
1995	-6.2%	51.9%	79,541	7.64
1996	5.1%	27.7%	95,999	7.85
1997	6.8%	15.7%	110,431	8.08
1998	4.8%	18.6%	117,459	9.86
1999	3.7%	12.3%	136,391	9.51
2000	6.9%	8.9%	166,424	9.57

Fuente: Informes Anuales del Banco de México, 1995-2000. También: Banco de México, *The Mexican Economy 1997. Economic and Financial Developments in 1996, Policies for 1997.*

cos y la pérdida de las propiedades de numerosos ciudadanos que no pudieron solventar sus deudas, lo que originó el tremendo problema enfrentado por el gobierno del presidente Zedillo por medio del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa, hoy Instituto de Protección al Ahorro Bancario, IPAB). La incapacidad de pago de numerosas empresas y personas en las nuevas circunstancias producidas por la crisis, llevó al sistema bancario al borde de la quiebra. Ante este peligro, el gobierno fue adquiriendo por medio del Fobaproa la deuda de los bancos y terminó por transformar la deuda de los bancos en deuda pública, es decir, la deuda de las instituciones bancarias se transfirió a todos los mexicanos, mediante la ley aprobada el 12 de diciembre de 1998. Amplios sectores sociales de clase media y baja

perdieron su patrimonio, ya fueran empresas, casas, departamentos, ranchos, vehículos y otros, pues al no poder pagar bajo las condiciones de las altísimas tasas de interés impuestas por los bancos, los embargos de bienes se multiplicaron, con lo que la crisis económica derivó asimismo en una crisis social de graves proporciones, evidenciando la gigantesca injusticia social derivada de las decisiones políticas favoreciendo a los ya privilegiados, mientras las clases medias y bajas perdían sus propiedades, el Fobaproa “rescataba” a otros sectores que sí podían pagar por lo menos, parte de sus deudas. El Fobaproa resultó un instrumentó que cobijó las deudas y propiedades de sectores pudientes y los créditos irregulares y malos concedidos por los bancos que nada tenían que ver con la crisis de 1994, pero que los bancos aprovecharon para limpiar también sus negocios desafortunados. Muchos beneficiados por el Fobaproa sí tenían con qué pagar y en la lista de este programa figuran empresas como Aeroméxico, Mexicana, Grupo Lomelí, Estrella Blanca, club de fútbol Monterrey, Taesa, Sincro, Sidec, Hoteles Camino Real,³⁰ así como apellidos bien conocidos (Isaac) Saba, Chedraui, (Carlos) Cabal Peniche, Loret de Mola, Justo Fernández, Zaga, Nacif Borge Kamel (presunto pederasta amigo de Mario Marín, gobernador de Puebla) y muchos más. Adicionalmente al rescate de los bancos del Fobaproa,

³⁰ Juan Aupin Birch, “Del Fobaproa al Ipab, de marzo a diciembre de 1998” en Ricardo Solís Rosales (coord.) *Del Fobaproa al Ipab. Testimonios, análisis y propuestas*, p. 59.

se incluyó en éste también el rescate carretero, en el cual figuraban empresas relevantes como ICA y Tribasa, que contaban con grandes recursos de capital.³¹ El rescate bancario, como se le conoce a ese proceso, debido al enorme monto de recursos que implicaba, tuvo gravísimas repercusiones negativas sobre toda la población mexicana, la cual sufriría los efectos de la reducción del gasto público, el acrecentado deterioro de las finanzas estatales y mayores cargas fiscales.

Las finanzas nacionales se deterioraron exorbitantemente durante la administración del presidente Zedillo. La deuda interna pasó de 67.4 mil millones de pesos en 1994 a 475.6 mil millones de pesos en el año 2000, es decir, aumentó más de siete veces. La deuda externa era de 158 mil millones de dólares en el año 2000, aunque únicamente durante el sexenio de Zedillo se pagaron por concepto de intereses y amortización de capital, 173 mil millones de dólares (es decir, más del total de la deuda externa), y la deuda seguía aumentando. A esto se agregó la deuda del Fobaproa, la cual, violando la Constitución además de todas las consideraciones de equidad, justicia y símiles existentes, añadió a la deuda pública en el año 2000 la suma de 885 mil millones de pesos, con lo que la deuda pública global (deuda interna, externa y Fobaproa), llegaba a 2 billones, 66 mil millones de pesos, la deuda neta gubernamental total se incrementó en 42.8% en el año 2000, por la decisión de convertir en

³¹ Ver más detalles en Ricardo Solís Rosales (coord.). *op. cit.*, pp. 163-172.

deuda pública las deudas privadas, acuerdo perverso e inconstitucional emitido por Zedillo y que fue avalado en el Congreso por las fracciones del PRI y el PAN. El destacado analista Aguilar Zinser³² entre otros estudiosos, realizó un análisis claro de la inconstitucionalidad de ese acuerdo, el cual de cualquier manera fue validado por los encargados de la elaboración de las leyes del país el 12 de diciembre de 1998, como ya hemos mencionado.

La crisis económica y financiera tuvo un impacto negativo adicional con el problema de los Tesobonos, que eran obligaciones que el gobierno de Salinas había emitido en 1994, para captar divisas ante la salida de capitales, pero su vencimiento era de corto plazo y pactado a pagar en dólares (lo cual era evidentemente ilegal), estos Tesobonos crecieron sustancialmente en 1994. Este fue otro de los grandes motivos de controversia por parte del presidente Zedillo quien aducía que ignoraba el cuantioso monto de esa deuda que de 1,400 millones de dólares en enero de 1994, se había elevado a 29,206 millones en diciembre de ese año, tan sólo entre marzo y junio de 1995 había que pagar 26,127 millones de dólares de estas obligaciones,³³ las que al ser en dólares, por la devaluación del peso, incrementaban de manera

³² Aguilar Zinser, Adolfo, "La negociación del Fobaproa", en Székely, Gabriel (Coordinador) *Fobaproa e Ipab, el acuerdo que no debió ser*, pp. 95-96.

³³ Banco de México, *Informe Anual del Banco de México 1995*, p. 176.

automática su monto a más del doble del costo original y para la cual el gobierno mexicano carecía de fondos para pagar.

México tuvo que acudir a diversas instancias internacionales para recibir préstamos que le ayudaran a solventar sus deudas. La comunidad internacional se mostró temerosa de poner un “mal ejemplo” rescatando sin más a México, ante la eventualidad de que otros países pudieran también entrar en crisis debido al efecto ‘tequila’. El Congreso norteamericano opuso obstinada resistencia para apoyar el paquete de préstamos a México y finalmente se negó a avalar el monto propuesto por el poder Ejecutivo de ese país y por otras instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), ante lo cual el presidente William Clinton en uso de poderes extraordinarios, sin el aval del Congreso aprobó el paquete financiero que alcanzó la altísima cifra de 47,800 millones de dólares.³⁴ México dejó en prenda para garantizar el pago de estos préstamos, todos los ingresos de las exportaciones petroleras mexicanas.

La economía mexicana reanudó el crecimiento económico desde 1996, y la recuperación de la economía mexicana se apoyó en una notable expansión de las exportaciones las cuales crecieron de 60 mil millones de dólares en 1994 a 166 mil millones en el año 2000, es

³⁴ Riordan Roett, “La devaluación mexicana y la respuesta estadounidense: políticas del Potomac al estilo de 1995” en Riordan Roett (comp.). *La crisis del peso mexicano. Perspectivas Internacionales*, p. 70.

decir, aumentaron en 173% entre 1995 y el año 2000, es indudable que el recién firmado TLCAN generó en estos años impulsos muy positivos para el crecimiento exportador de México. Otro aspecto importante en la recuperación nacional fue el desarrollo del sector maquilador que hacia el año 2000 representaba alrededor del 50% de las exportaciones totales, el avance de este ‘enclave’ moderno representaba en realidad tanto la desarticulación de las cadenas productivas nacionales, como la reiteración de la falta de una política industrial mexicana. Los efectos negativos de la crisis de 1994-1995 tardaron años en superarse, pero esta crisis como las anteriores, al afectar sobre todo a las clases populares y al debilitar más las finanzas estatales, fue otro golpe para la construcción de una sociedad más igualitaria que genere las condiciones para competir adecuadamente en el proceso de globalización, y en la historia, si no se avanza, se retrocede.

Conclusiones

De la crisis de 1994-1995 en México se derivan varias lecciones. En primer lugar, se constató que a pesar de los cambios efectuados por los gobiernos de México en materia de política económica, las administraciones que adoptaron lo que se ha dado en llamar como el “modelo neoliberal” (Miguel de la Madrid y Carlos Salinas), demostraron que este modelo era tan ineficiente para conducir al país por una senda de desarrollo sostenido y

confiable como los gobiernos que provenían de la tradición del nacionalismo revolucionario (Luis Echeverría y López Portillo), lo que sugiere que otros cambios estructurales que no formaban parte de la agenda de ningún gobierno, como avanzar en el proceso industrializador en sus etapas difíciles, elevar la competitividad en el campo, combatir la enorme desigualdad socioeconómica, disminuir los índices de pobreza y otras tareas que eran urgentes desde hace varias décadas y que siguen sin cumplirse, han conducido al país a principios del siglo XXI, hacia un proceso de retroceso socioeconómico mientras otras naciones como China, la India o Corea, avanzan de manera evidente en el sistema mundial. En pocas palabras, México carece de un proyecto claro y eficaz de desarrollo nacional.

Otra peculiaridad de la crisis analizada fue que los problemas económicos se entrelazaron de una manera muy aguda con la crisis política por la que pasaba el sistema de dominación priísta. La crisis al interior de la élite política no era nueva, ya se venía incubando por lo menos desde las administraciones de Luis Echeverría y José López Portillo, cuando los llamados “tecnócratas” empezaron a desplazar a los políticos priístas tradicionales. En la sucesión presidencial de 1988, se suscitó un problema grave con la salida del PRI de la “corriente democrática” de Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y otros, pero se pudo capear el temporal y la tecnocracia neoliberal mantuvo el control del gobierno nacional y del PRI por seis años más. La crisis de 1994-1995 anunció el fin de la era priísta de dominación, y señaló

hacia un reacomodo de la élite política que abandonó definitivamente los pocos postulados de justicia social que quedaban de la época del nacionalismo revolucionario, para estructurar una política abiertamente favorecedora de los intereses de los grandes empresarios nacionales y extranjeros. La venta de las empresas paraestatales y el Fobaproa influyeron de manera sustancial en el surgimiento de nuevos y poderosos grupos empresariales que buscaban desde la década de los setentas tener mayor control sobre el aparato gubernamental, finalmente con Fox llegó al poder un gobierno de “empresarios para empresarios”. Con el gobierno foxista se hicieron evidentes otros aspectos del nuevo pacto político: fuerte presencia del narcotráfico con la consiguiente corrupción gubernamental y violencia generalizada, desnacionalización de sectores clave de la economía mexicana, predominio de los sectores conservadores en la política nacional, regreso del clero a sus anhelos de participación política y educacional, prevalencia de gravísimas desigualdades sociales, agudización de conflictos sociales, migración de mexicanos a E.U. buscando el empleo que su patria les niega, y mayor inseguridad para todos los mexicanos.

Capítulo IV

La rebelión neozapatista en Chiapas*

*Armando Cisneros Sosa***

Entonces celebraron el consejo entre ellos.

A continuación comenzaron a seguir las
huellas de los sacerdotes y sacrificadores,
pero éstas no eran claras.

POPOL VUH

Las noticias que circularon por el mundo el 1° de enero de 1994 sacudieron a la población mexicana que recién celebraba el nuevo año. Ese mismo día, de madrugada, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, formado principalmente por cientos de indígenas tzotziles, tzeltales, tojolabales y choles, había tomado por las armas varias cabeceras municipales del estado de Chiapas, entre ellas dos ciudades importantes: San Cristóbal de las Casas y Ocosingo. Hubo violencia, principalmente en Ocosingo, en donde el ejército cercó y exterminó a un grupo de neozapatistas. Ese mismo día un grupo del EZLN llegó al rancho del exgobernador Absalón Castellanos en el municipio de Las Margaritas, y lo secuestró. Tanques,

* Agradezco a José Luis Castillo el apoyo brindado en la discusión y recopilación de datos para este artículo.

** Profesor-Investigador del Departamento de Sociología de la UAM-Azcapotzalco.

aviones y soldados del Estado penetraron en la selva tras de los grupos alzados y 11 días después, el Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, declaró alto al fuego y la búsqueda del diálogo a través de un Comisionado, Manuel Camacho Solís. A las pocas semanas, después de que el EZLN liberó a Castellanos, se realizó el primer diálogo entre los dirigentes del movimiento y el gobierno. El lugar de ese primer diálogo fue la catedral de San Cristóbal de las Casas. Al año siguiente se realizó el segundo, en el pueblo de San Andrés Larráinzar. En el 2001 los principales líderes del movimiento realizaron una larga marcha por varios estados que culminó en forma apoteótica en el Zócalo de la Ciudad de México. En 2006, año de elecciones federales, el Subcomandante "Marcos", el líder más visible del movimiento, realizó un recorrido político por el país al que llamó "la otra campaña". Muchos mexicanos apoyaron y siguen apoyando la lucha de esa organización. Otros los consideraron y los siguen considerando maleantes. Para otros más son irrelevantes mientras los sistemas económico y político sigan funcionando. Una pregunta general acerca de este movimiento, que ya es considerado parte de la historia contemporánea de México, puede ser la siguiente: ¿Por qué se levantaron en armas los indígenas de Chiapas? Para contestar nos vemos obligados a estudiar los antecedentes del movimiento, hasta su aparición en 1994. Es decir, tenemos que hacer a una revisión de la historia del sureste chiapaneco, particularmente de las últimas tres décadas del siglo XX.

La historia de las tierras

El conflicto neozapatista tiene que ver directamente con las tierras que ocupan las comunidades indígenas en la región sureste del estado, principalmente en la selva lacandona, dentro del municipio de Ocosingo y, en parte, también de Altamirano y Las Margaritas, junto a la frontera con Guatemala. Esa zona, boscosa, de montañas y profundas cañadas, siempre estuvo deshabitada por sus condiciones inhóspitas, por su clima sofocante y extremadamente lluvioso. En la época colonial se conocía como La lacandonia o el “Despoblado del lacandón” y era considerado el “límite del control español”. En la entrada de La lacandonia existían desde tiempo atrás diferentes poblados indígenas, como Ocosingo, Cancuc, Oxchuc, Huixtán, Teopisca y Comitán. Más allá de esos lugares, hacia el sureste, todo era territorio virgen, habitado sólo por algunos pequeños grupos de lacandones. El resto eran cientos de kilómetros de cañadas y cerros boscosos, cuya amplia superficie es superior a la de los estados de Querétaro y Tlaxcala juntos, (ver Fig. 1). Con la modernización de finales del siglo XIX la selva comenzó a ser explotada. Fue una época de bonanza para las compañías madereras, que recibieron concesiones del gobierno para explotar la caoba, el caucho, el chicle y otras especies. Esas compañías, principalmente norteamericanas y europeas, enganchaban a indígenas en Ocosingo o llevaban maleantes o deportados de otras zonas para trabajar en la tala y arrastre de la madera en

condiciones infrahumanas. Una descripción de la época dice:

La vida de estos trabajadores, desde el día que llegan hasta que mueren, es de una monotonía y una dureza indescriptibles. A las tres o cuatro de la mañana, el capataz suena el cuerno, los peones se levantan y toman café negro y frijoles. Al rayar el sol deben estar al pie del árbol que van a cortar, o al lado de la troza que habrán de labrar. Allí trabajan hasta mediodía, hora en que toman un ligero refrigerio. Por la tarde regresan al campamento, toman más café negro y frijoles y duermen para levantarse al día siguiente y recomenzar la eterna tarea.¹

Esas formas de trabajo, evocación de las novelas de Bruno Traven, como *La rebelión de los colgados*, eran muy similares a las que vivían los indígenas en las haciendas o fincas cafetaleras del Soconusco y de otras regiones de Chiapas. Los indios vivían como peones acasillados, endeudados permanentemente con los finqueros. Tal como había sucedido con cada una de las etnias nacionales y de los campesinos en general, habían perdido sus tierras a mano de las haciendas y, aceleradamente, a mano de las compañías deslindadoras que el porfiriato promovió.

¹ "Discurso del licenciado Emilio Rabasa, gobernador del estado de Chiapas, ante la XVIII legislatura del mismo." 1893, en Ma. E. Pérez y D. Guillén. *Chiapas. Una historia compartida*, pp. 177-178.

Cuando llegó la Revolución las cosas comenzaron a cambiar en muchas partes del país, especialmente por la esperanza creada por Venustiano Carranza el 6 de enero de 1915, cuando, como jefe del ejército constitucionalista, expidió en Veracruz la primera ley agraria. A partir de entonces los campesinos podían recobrar las tierras perdidas o ser dotados con tierras de la nación para formar ejidos. La Constitución de 1917 refrendó ese concepto y en el artículo 27 estableció que:

Se dictarán las medidas necesarias para el fraccionamiento de los latifundios... para la creación de nuevos centros de población agrícola con las tierras y aguas que les sean indispensables... Los pueblos, rancherías y comunidades que carezcan de tierras y aguas, o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población, tendrán derecho a que se les dote de ellas.²

Ese artículo recogía los principios del programa de Emiliano Zapata vertido en el Plan de Ayala y su efecto político fue la lealtad de los campesinos y la consolidación del nuevo régimen. A lo largo del tiempo el artículo 27 fue cambiado de diferentes maneras, agregándose, por ejemplo, el concepto de “ampliación de ejidos”, pero manteniendo siempre los principios de “restitución” y “dotación” de tierras a los campesinos.

² M. Chávez. *El derecho agrario en México*, pp. 317-318. Texto original del artículo 27 de la Constitución de 1917.

Las primeras “restituciones” y “dotaciones” fueron hechas en los alrededores de la Ciudad de México y, poco a poco, fueron entregadas tierras a muchos miles de indígenas y campesinos de la república. Excepto en Chiapas, en donde la reforma agraria fue muy limitada por la resistencia de los finqueros locales, que habían logrado hacerse del poder estatal e imponerse sobre las comunidades indígenas. García de León relata la forma en que mantuvieron el dominio los finqueros, realizando durante la Revolución el movimiento armado de los “mapaches”, con el cual lograron desactivar el agrarismo dentro los gobiernos estatales y las movilizaciones indígenas y zapatistas de 1918-1919.³ En las elecciones de 1920, las primeras más o menos pacíficas después de la Revolución, el “mapachismo” impuso a Fernández Ruíz, quien emitió una Ley Agraria local adecuada a la “familia chiapaneca”, si bien, pronto aparecerían indicios de disidencia política, especialmente alrededor de Tapachula, en donde en 1921 surgió el Partido Socialista del Soconusco, ligado al Partido Socialista del Sureste de Carrillo Puerto.⁴ Pero los espacios políticos en el estado fueron negados para la izquierda. En 1923 ochenta campesinos de ese partido fueron encarcelados “y cuatro asesinados en el momento de ser capturados”.⁵ Las pugnas entre agrarismo y mapachismo ensuciaron también las elecciones estatales de 1924, con

³ A. García de León. *Resistencia y utopía*, pp. 299-300.

⁴ *Ibidem.* p. 374.

⁵ *Ibidem.* p. 380.

zafarranchos en Tuxtla Gutiérrez, con nuevas elecciones en 1925 que llevaron a Carlos A. Vidal, un agrarista moderado, al poder estatal. Vidal abandonaría el gobierno estatal en 1927, para sumarse a la campaña de Serrano contra Obregón y terminaría fusilado junto con Serrano y otros de sus acompañantes en la célebre matanza de Huitzilac. El general Manuel Álvarez asumió provisionalmente la gubernatura del estado en 1927, para cederla al año siguiente a Amador Coutiño, de corte ligeramente anticlerical, a la usanza callista. En 1928, después de unas “elecciones fraudulentas”, Raymundo Enríquez se convirtió en gobernador del estado, hasta 1932. En esa época el Partido Socialista del Soconusco se ligó al naciente Partido Comunista Mexicano y formó un bloque obrero-campesino, recibiendo en Tapachula, en 1930, a Augusto Sandino, que llegaba a México en busca de apoyo. En 1933 fue electo gobernador Victoriano R. Grajales, un exmapachista que se dedicó a defender las grandes propiedades rurales. Así que, hacia los años treinta, los indígenas de Chiapas continuaban trabajando en las fincas cafetaleras como los peones del porfiriato. Así lo describió Ricardo Pozas en *Juan Pérez Jolote*, libro que cuenta la historia de un indio tzotzil de San Juan Chamula que fue soldado de la Revolución y que años después trabajaba en una finca para pagar con creces el préstamo recibido para casarse.

La dominación económica y política en el nivel estatal se complementaba en cada pueblo con una tradición religiosa y política de sumisión a los finqueros y a la clase intermedia, los ladinos o mestizos. Además, las

tres clases sociales se reproducían geográficamente en la división política. Había, según la ley, municipios de primera, segunda y tercera, estos últimos, obviamente los más pobres, eran los únicos que podían ser dirigidos por indígenas. Las fiestas religiosas y los cambios de los cargos correspondientes, vinculados al poder político local, eran celebradas con rituales mágicos, con mucho posh (aguardiente de caña de maíz) y declarando respeto al sistema político vigente. En *Juan Pérez Jolote* se describe la forma en que eran tomados los cargos político-religiosos en las tierras altas de Chamula:

Yo...quería tener un cargo; porque los que sirven al pueblo son respetados. Yo oía como saludaban a los que habían sido autoridades: “Adiós, pasado alcalde”, adiós, pasado alférez”... que son nombres de respeto... Yo veía cómo... (entraban) al cuarto de juramento...para jurarlos al pie de la cruz del barrio. Después que juraban salían contentos... porque los habían nombrado autoridades.... Una vez pasaron los alcaldes y mayores... y cargaron conmigo... Me llevaron al juramento para darme el cargo de *primer mayor*... Me dijeron... debes ir hasta donde están los linderos que dividen a San Juan... Me dieron el trago y me llevaron a la casa del *primer alcalde*. Sirvieron dos botellas de aguardiente y las tomamos. Me dieron mi vara y me fui para mi casa... Para el 30 de diciembre estrené caites (sandalias), chamarro, camisa, calzones y pañuelo para la cabeza... Las varas y los bastones deben estar limpios para la fiesta. Los bastones de las autoridades de cada barrio eran lavados en la casa del primer alcalde del mismo barrio para

entregarlos a los que recibían el cargo... Con agua tibia quitaban la mugre y el sudor del mango de plata... Los encargados de lavar los bastones de las autoridades son los escribanos, quienes vaciaron el aguardiente en el *tol* donde estaban las puntas de los bastones, le pusieron flores y ramas de manzanilla... Los escribanos cogían, uno por uno, los bastones... ponían sal en el mango de plata... Después que hacían la misma operación con todos... los bastones, bebían el aguardiente que habían servido para frotar los bastones.... Un escribano cogió un bastón... y lo puso en la mano del *primer alcalde*, diciendo: ... tome usted, para que lo lleve por los caminos, para que sea respetado San Juan, para que nos cuide a toda su gente, a su pueblo... Los escribanos entregaron los bastones a todas las autoridades... El 31 de diciembre se reciben los cargos, antes que el sol saliera ya estaban en la plaza las autoridades que los entregarían... el presidente que iba a salir... le hizo al nuevo presidente la señal de la cruz en la frente, luego en la nariz, en la barba, y por último en el pecho, diciendo cada vez: "Dios totic (Dios padre sol), Dios nichonil (Dios hijo), Dios Espíritu Santo... estarás con tu cuerpo ... todo un año, viendo y mirando a la gente, como la cuidaron y vigilaron nuestros antepasados, a los pies de San Juan... ¡Obedece al ladino, que es el que manda! Porque es el hijo de Dios, el hijo del cielo, el de la cara blanca, el de camisa y pantalón... luego empezaron a entrar los alcaldes y regidores.⁶

⁶ R. Pozas. *Juan Pérez Jolote*. pp. 78-86.

Esas formas de sujeción social, de corte colonial, serían conocidas por el general Cárdenas en 1934, cuando recorrió el estado durante su campaña política. El sería el primer gran modernizador de Chiapas y el gran impulsor de cambios en la vida indígena, tal como lo describiría Rosario Castellanos, la más ilustre comiteca, en su *Balún Canán*. Con todo el poder político, después de desplazar a Calles, Cárdenas removió al gobernador “finquero”, Grajales, en 1936. Luego apoyó para la gubernatura a Efraín Gutiérrez, con lo que se dio inicio a una política agraria en la región del Soconusco y se crearon organismos de defensa indígena. En ese periodo, Erasto Urbina formó un sindicato de trabajadores indígenas, con cerca de 30 mil jornaleros tzeltales y tzotziles, que si bien se convertiría a la larga en un organismo de enganchadores para las fincas y en cuna de nuevos “caciques indios”.⁷ Sería un nuevo interlocutor mediante el que el mismo Urbina encabezaría tomas de tierras en Oxchuc y Ocosingo, hacia 1938. Los finqueros, encolezados, lo acusaron de querer iniciar una nueva “guerra de castas”. El general Cárdenas no se detendría. En la conmemoración del primer año de la expropiación petrolera, el 19 de marzo de 1939, repartiría cerca de 8 mil hectáreas del Soconusco. El efecto estatal de la política agraria, junto con los acuerdos entre el Partido Comunista y el régimen cardenista, fue que los líderes comunistas cederían prácticamente todos los espacios frente al agrarismo federal y, en muchos casos, ellos mismos

⁷ A. García de León, *op. cit.* p. 409.

se convertirían en “agraristas”. Toda lucha por la tierra sería abanderada, como en todo el país, por la Liga de Comunidades Agrarias estatal, afiliada a la Central Nacional Campesina (CNC), la cual a su vez quedó unida desde su nacimiento, en 1938, al partido oficial.

Poco antes, el general Cárdenas había creado en 1936, el Departamento de Asuntos Indígenas, que a partir de 1948 se convertiría en el Instituto Nacional Indigenista, con el fin de alfabetizar, preservar las culturas y, especialmente, restituir tierras. En Huixtán, el nuevo organismo indigenista promovería que las antiguas fincas fueran repartidas a los indios. Todo el municipio (181 km²) llegó a ser ejidal o comunal.⁸ Un indígena, Agapito Núñez, platicó a Fernando Benítez el caso:

(Eramos) “peones acasillados en una finca. A los 7 años mi papá me llevaba a las tareas que le daba el patrón. Muy pocos de los cuarenta peones entendían unas palabras del español....No podíamos huir, ni trabajar en el Soconusco, ni cambiar de vida...Así llegó el tiempo de Lázaro Cárdenas. Se presentó un ingeniero, midió las tierras y a los 40 peones les dio un lote para su casa y una hectárea de terreno comunal... (Ahora) teníamos una cabaña mejor; podíamos comprar ropa y comida. (Luego) los jóvenes (fuimos al) Instituto (INI) (que) nos prestó el dinero, medimos los terrenos para las casas, los campos deportivos, la escuela, el cabildo. Se fijó un día para la toma de posesión de las

⁸ Centro Nacional de Estudios Municipales. *Los municipios de Chiapas. Enciclopedia de los municipios de México*. pp. 216-220.

tierras. Se citó al Mayordomo de Bojoshac y llegaron (los de asuntos indígenas y dijeron): De hoy en adelante no tendrán que trabajar en Bojoshac. Apenas recojan sus cosechas saldrán de Tajpá y ocuparán sus nuevas tierras. Ya son libres. Aquí se terminó la esclavitud”.⁹

Pero el cambio social, basado en la restitución de tierras y en el impulso de una movilidad ascendente de los indígenas, quedaría frenado al terminar el gobierno de Cárdenas, tal como sucedió en todo el país. Los finqueros, por su parte, aprendieron a adaptarse al nuevo régimen y a hacer carrera política dentro de las filas del PRI, incluyendo la CNC. Entre 1940 y 1944 gobernó el estado el Dr. Rafael Pascacio Gamboa, quien fuera diputado federal y secretario de gobierno del anterior gobernador, Efraín Gutiérrez, llegando a coordinar la campaña presidencial de Miguel Alemán en 1946, para lo cual sería presidente nacional del naciente PRI y posteriormente Secretario de Salubridad y Asistencia. En 1944 fue electo Juan María Esponda, sujeto a la sombra de Gamboa. Pero en las elecciones municipales de 1946 Esponda quiso imponer a un presidente municipal en Tapachula y los locales “antiagraristas”, organizaron un partido cívico de resistencia. Los dos candidatos recibieron actas de triunfo pero el Congreso local nombró electo al candidato del gobernador. Los locales se amotinaron frente a la Presidencia Municipal el día de la toma de gobierno, el 31 de diciembre de 1946. La policía esta-

⁹ F. Benítez. *Los indios de México*. T.I. pp. 242-254.

tal disparó contra la multitud, matando a 12 personas e hiriendo a otras 43 que a su vez estaban armadas.¹⁰ En consecuencia, fue destituido Esponda por el Congreso local algunos días después y, en su lugar, fue colocado César A. Lara, un militar de Pichucalco. Le sucedería el general Francisco José Grajales Godoy, pariente del anterior Grajales y también antiguo “mapachista”, que había llegado al cargo de Jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hubo primero una elección interna dentro del PRI local, algo inédito a nivel nacional, y Grajales salió vencedor frente al “obrerista” Julio Serrano, que era apoyado por Luis Echeverría, a la sazón dentro del PRI nacional. Entonces se dijo que muchos indígenas, como en Yajalón, habían sido extorsionados y obligados a votar por Grajales. Poco después, en las elecciones estatales de 1948, sin contrincantes, sería ganador Grajales.¹¹ Gobernaría hasta 1952, haciendo algunas carreteras y con relativo éxito político, pero sin atender según los historiadores locales “la existencia de caciques con grandes extensiones de tierra conviviendo con población campesina con muy poco acceso a ella”.¹² Más o menos bajo la misma tónica gobernarían Efraín Aranda (1952-1958), Samuel León Brindis (1958-1964) y José Castillo Tielemans (1964-1970).

¹⁰ D. Camacho, y A. Lomelía. *Francisco José Grajales Godoy: a caballo hacia la modernidad*. pp. 42.

¹¹ *Ibidem*, p. 66.

¹² *Ibidem*, p. 123.

Con el poder estatal en manos de la vieja clase gobernante y desacelerada la reforma agraria, la única posibilidad que quedaría a los indígenas ante las crecientes demandas de tierra sería “el despoblado del lacandón”. El gobierno permitiría desde los años cincuenta la formación de ejidos en la selva lacandona, con la ventaja para los indios de tener propiedades hasta 10 veces más grandes de las que tenían en sus pueblos áridos o semiáridos de los altos, pero, sobre todo, manteniendo intactas, a favor de los finqueros, las viejas haciendas. Von Raesfield un propietario de la región, exponía ese proyecto a Fernando Benítez a principios de los sesenta: “Quizá tengamos oportunidad de arrancarlos de estas montañas erosionadas y llevarlos a las tierras vírgenes de Ocosingo y de Las Margaritas, ya en plena selva lacandona. Es la gran esperanza de los indios que viven apretados, muriéndose de hambre en los Altos de Chiapas”.¹³

Los gobiernos estatal y federal permitieron y promovieron que miles de familias indígenas formaran ejidos en “el nacional”, como se comenzó a llamar a la Lacandonia. La mayor parte de las cerca de mil 600 acciones realizadas entre 1940 y 1984 (dotaciones o ampliaciones de ejidos) se realizaron en la selva. Nacieron Nuevo San Juan Chamula, Nuevo Huixtán, Nuevo San Andrés y muchos otros ejidos, en ocasiones bautizados en honor de los benefactores de los indígenas (Adolfo Ruiz Cor-

¹³ F. Benítez, *op. cit.* P. 239.

tínez, Luis Echeverría Álvarez, Augusto Gómez Villanueva, Amador Hernández). En sus nuevas tierras los indígenas levantaron sus casas de madera con techos de palma e hicieron su milpa, con el viejo método de roza, tumba y quema, el único método que conocían para transformar la selva en tierras de cultivo. A final del año cosechaban el maíz, la base de su alimentación, con el cual hacían entre otros, el tradicional “pozol”, una bebida fermentada, con alto grado nutricional y de larga duración sin descomponerse, hecha a base de nixtamal (maíz hervido en agua con cal) adicionada con sal, azúcar, miel o chiles secos)¹⁴ Paralelamente, comenzaron a criar gallinas, cerdos o incluso vacas, para su consumo o para complementar su economía. Otra fuente de ingresos era el cultivo del café, heredado de la tradición de las fincas, si bien se trataba de un cultivo crecientemente desplazado por el ganado en todo Chiapas, que era más rentable pero utilizaba mucho menos mano de obra. Poco a poco se fueron formando pequeñas localidades en la selva. Surgieron en Ocosingo poblados más o menos importantes como Benemérito de las Américas, Las Tazas, San Quintín, Pico de Oro y Santo Domingo, mientras en Las Margaritas crecieron de la nada Vicente Guerrero, Guadalupe Tepeyac, El Edén, Nuevo México, El Porvenir y La Realidad. Todos esos poblados serían indígenas y quedarían distribuidos de acuerdo a las etnias de origen. Esas comunidades llevaban su cultura,

¹⁴ A. Cañas, et. al. “Elaboración del pozol en Los Altos de Chiapas” en *Revista Ciencia*. P. 220.

principalmente su lengua, a la selva, manteniendo el sincretismo católico-pagano.

En los nuevos ejidos se abría la promesa de una vida mejor. Sólo había que realizar pacientemente los trámites para crear o ampliar un ejido. Los indígenas dirigían escritos al Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, (después Secretaría de la Reforma Agraria), para tener la posesión legal. Después tenían que mandar representantes a Tuxtla Gutiérrez y pagar ingenieros agrícolas para elaborar oficios y levantar censos. Luego la Comisión Agraria emitía un dictamen que tenía que ser sometido a la consideración del Gobernador del Estado. Aprobado el dictamen el Departamento de Asuntos Agrarios lo revisaba y enviaba a un Cuerpo Consultivo Agrario, que turnaba toda la documentación al Presidente de la República, quien firmaba la resolución que se publicaría en el Diario Oficial. Más tarde se levantaba un acta de posesión y deslinde, se preparaba un proyecto de mapa y se votaba el mapa con el consenso de todos, (ver figuras 2, 3, 4, y 5). Finalmente el gobierno entregaba a los ejidatarios los certificados de derechos agrarios. El efecto político que ese mecanismo agrario producía, a pesar de su pasmosa lentitud, era una amplia lealtad de los indígenas hacia el régimen. Todos los poblados eran en mayor o menor grado solicitantes priistas, a pesar de que los trabajos de colonización que realizaban en la selva eran verdaderamente heroicos, sin mayor apoyo de las autoridades. Llegaba eventualmente a los pueblos un maestro indigenista o un médico, pero prácticamen-

te estaban en la más absoluta miseria. Una indígena de Guadalupe Tepeyac cuenta su historia:

Ni jabón encontrábamos, nada. Una hojita de amolío, unas vainitas larguitas así, y lo machucábamos en nuestra batea para lavar nuestra ropa... No teníamos un quinto pues estaba muy barato cuando íbamos a ganar por corte de café en un ranchito... También los demás. Igual trabajábamos en este santo lugar. Entre cuatro son que bajamos a poblar. Ya de veras lloramos de por sí nuestra suerte... No teníamos trastes, puras ollitas de lodo, machucamos nuestro vaso, machucando remoliendo, haciendo nuestras ollitas de barro. No había herramientas, apenas un pedacito de machetito... (A los hombres) les pegó la fiebre y se murieron. Quedamos viudas todas. Estaban potentes todavía. Les dio una enfermedad y no había con qué arreglarla. Quedamos puras mujeres y niños chiquitos, no podían ayudar a sus papás. Y entró gente, llegó compañía, algunos familiares que no tenían donde vivir. De por sí estábamos pobres, nada más estamos abrazados así, sin nada. Pero la tierra ya la teníamos.¹⁵

La propiedad la tierra era un triunfo de los indígenas pero a un costo muy alto. Era fácil encontrar la muerte para los campesinos que partían de cero, bajando de las tierras frías de la montaña al calor, los mosquitos y a todo tipo de animales de la selva. Sin herramientas, caminos, agua potable, electricidad. Empezaban des-

¹⁵ G. Rovira. *Mujeres de maíz*. pp. 58-59.

montando una parte de la selva y ahí levantaban, diseminadas, pequeñas casas de muros de bajareque o tablones y techos inclinados de palma. Luego un salón de asambleas o iglesia. Con el tiempo una pequeña tienda, un aula, un dispensario médico y, claro, un panteón. No obstante y a pesar de la gran distancia que los separaba de cualquier institución, el sentimiento de confianza en el sistema continuaba presente.

Decretos contra los ejidos.

Entre 1970 y 1976 gobernó Chiapas Manuel Velasco Suárez, un distinguido médico que había sido director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y que había recibido numerosos reconocimientos. En Chiapas fundaría la Universidad Autónoma del Estado, 50 escuelas tecnológicas agropecuarias, dos hospitales, decenas de pequeñas clínicas y el Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste en San Cristóbal de las Casas, su ciudad natal. Hasta entonces la dinámica de demandas de tierras-concesiones-lealtad política se había mantenido más o menos con buenos resultados. La gran selva se había convertido en una válvula de escape para la presión demográfica de las comunidades rurales indígenas y un mecanismo de reforzamiento de la adhesión al sistema político, aún cuando una buena parte de la selva también estaba siendo ocupada por particulares y acaparada. En esos años, en el municipio de Ocosingo

57 fincas ya tenían unas 300 mil hectáreas.¹⁶ Sin embargo, el factor esperanza entre los indígenas se mantenía. Todavía en 1974, por ejemplo, un grupo de 18 campesinos cafeticultores de El Palmar, en el municipio de Las Margaritas, solicitaron al gobernador Velasco Suárez la dotación para formar un nuevo centro de población ejidal.¹⁷ Lo mismo harían los ejidatarios de la colonia Lacandón, en Ocosingo, que a principios de marzo 1974 solicitaron al delegado del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización del estado información sobre el avance de sus gestiones ya que, desde 1968, se había realizado el censo para la ampliación del ejido. Pocos días después, el 19 de marzo, enviaron la siguiente carta al presidente Echeverría, escrita a mano:

Señor Presidente de la República.

Te suplicamos ha pedir ingeniero para el entrego provisio-
nal de la Colonia Lacandón M.P. de Ocosingo, Chis. Y
queremos solicitar el carretera y agua potable. Atentamen-
te firma el Comisariado Ejidal Marcos Flores Mendoza y
Consejo de Vigilancia Pascual Pérez. Secretario Manuel
Ruiz.¹⁸

¹⁶ Ver, A. García de León. *op. cit.* p. 433.

¹⁷ Carta de Cornelio Jiménez y otros al gobernador Manuel Velasco Suárez. 13 de septiembre de 1974. AGN. Galería 3. Grupo Documental LEA. Vol. 2596 Exp. 727.3/4 I.

¹⁸ Carta de Marcos Flores y otros al presidente Luis Echeverría. 19 de marzo de 1974. Y carta de Leonardo Vazquez y otros al Ing. Antonio Vera, delegado del DAAC. 6 de marzo de 1974. Firman con

Era claro que a principios de los setenta los indígenas de Chiapas seguían tratando de abrir los viejos canales oficiales de dotación o restitución. En el mismo sentido se manifestaban los indígenas del ejido San Sebastián Bachajón, Palenque, afiliado a la CNC. Solicitaban al presidente Echeverría la restitución de sus “mejores tierras en las márgenes del río Tuliljá”, para los 3 mil “capacitados” que vivían en el ejido. Señalaban como prueba de ser los auténticos propietarios de esas tierras un escrito de 1821 en el que se hacía referencia a la construcción de un camino “que cruza el ejido por más de 40 kilómetros”.¹⁹ A su vez, los del poblado Jucnil, dentro de la zona de San Juan Cancuc, Ocosingo, solicitaban dotación al secretario de la Reforma Agraria, Augusto Gómez Villanueva.²⁰ En el mismo municipio, la asociación de productores de café de Getsemaní, solicitaban al presidente Echeverría “carretera, agua potable, escuela buena, campo deportivo, luz eléctrica... zapapico, pala,

huellas digitales. AGN, Gal.3. Grupo Documental LEA. Vol. 2596. Exp. 727.3/4.F.

¹⁹ Ver, Carta de Manuel Saragos Moreno y otros al presidente Echeverría. 30 de mayo de 1975. AGN. Gal 3. Grupo Documental LEA. Vol. 2598. Exp. 1727.3 / 4.

²⁰ Ver, Memorando del Secretario Privado de la Presidencia, Juan José Bremen, al Lic. Augusto Gómez Villanueva. 10 de julio de 1975. AGN. Galería 3. Grupo Documental LEA. Vol. 2598. Exp. 727. ¼ G.

máquinas para moler café y cementos para construir patios para secar café”.²¹

El Presidente Echeverría impulsaría una nueva política agraria, tratando de desburocratizar los procesos de dotación. Emitió una nueva Ley de Reforma Agraria en 1971, en la que estableció que los campesinos dotados o restituidos de tierras dispondrían de los ejidos a partir de la publicación de la Resolución Presidencial que se dictara a su favor, y no hasta la Ejecución, como se señalaba en la ley que privaba desde 1946. Además, estableció la formalización de diversos apoyos estatales a la producción ejidal, como la asistencia técnica, el crédito a tasas de interés bajas. En 1974, en su cuarto informe de gobierno, anunció incluso que se seguía permitiendo la “colonización ejidal” para dotar a los “campesinos de zonas sobrepobladas”. Pero la situación legal de la selva lacandona ya había cambiado radicalmente. El 6 de marzo de 1972 apareció publicado en el Diario Oficial un decreto presidencial que titulaba 614 mil 321 hectáreas de la selva a 66 familias de la tribu lacandona. Automáticamente el Estado daba marcha atrás a la política agraria en la selva. Con ese decreto se aplicaba una política de dotación a una comunidad lacandona por encima de las tierras ya entregadas a cientos de comunidades indígenas. Peor aún, más que una nueva dotación restringida, el decreto del 72 estableció un mecanismo

²¹ Carta de Agustín López Sánchez y Martín López Sánchez al presidente Echeverría. 13 de febrero de 1976. AGN. Gal 3. Grupo Documental LEA. Vol. 2598. Exp. 1727. 3/ 4. L

para que la Comisión Forestal de la Selva (Cofolasa) explotara la madera. Se trataba de desalojar los ejidos para crear una nueva empresa maderera estatal. La decisión, había sido tomada centralizadamente, sin considerar en absoluto a las comunidades afectadas, las cuales incluso no se enterarían de ese decreto sino hasta dos años después, en un congreso de la Confederación Nacional Campesina en Ocosingo. Ahí les dijeron que tenían que abandonar las tierras. Luego llegaron los ingenieros de la Secretaría de la Reforma Agraria a los ejidos a confirmar la noticia.²²

Los indígenas no lacandones quedaron en una situación crítica. Varios cientos fueron reubicados, muchos otros no quisieron, como los del ejido Amador Hernández que permanecieron, pero el hecho es que ya no tenían el reconocimiento oficial de sus tierras y ya no podían demandar ampliaciones para las nuevas generaciones. Además, el gobierno de Echeverría comenzó a anunciar el fin del reparto agrario.

Los problemas más serios comenzaron cuando grupos de campesinos desesperados invadieron tierras con o sin la bandera de la CNC. En cualquier caso se enfrentaron a la reacción de los grandes propietarios y al mismo ejército. Así sucedió con las 28 familias que ocuparon parte del latifundio La Soledad, en el municipio de Altamirano, propiedad de *Walter Frontal*. Solicitaron apoyo a la Vieja Guardia Agrarista (CNC), la comisión Mixta Agraria del estado dictaminó a su favor la soli-

²² C. Tello. *La rebelión de Las Cañadas*. pp. 60-61.

cidad pero a principios de 1974 fueron desalojados por el ejército y sus casas y cementseras fueron quemadas.²³ Otros más, como los que ocuparon por la misma época tierras nacionales reclamadas por la compañía Abakena, solicitándolas como ejido, simplemente fueron llevados a la cárcel.²⁴ Peor aún había sucedido con los que ocuparon tierras en el municipio Venustiano Carranza. Habían sido encarcelados 24 de ellos, 8 estaban desaparecidos y 13 habían sido acribillados.²⁵ El problema de la tierra se complicaba a tal grado que incluso grupos de campesinos peleaban entre sí por los ejidos. En Arroyo el Granizo, municipio de Ocosingo, ejido que había tenido la resolución presidencial en 1963, por un total de 1,160 Hectáreas para 45 ejidatarios y que había tenido una ampliación definitiva en junio de 1972, por un total de 1,543 Hectáreas para 54 ejidatarios, fue invadido por otros grupos campesinos en 1975.²⁶

En 1974 fue organizado por la diócesis de San Cristóbal de las Casas y el gobierno de Velasco Suárez el

²³ Ver, Carta de Pablo Jiménez Santís y otros al presidente Luis Echeverría. 17 de febrero de 1975. AGN. Gal. 3. Grupo Documental LEA. Vol. 2598. Exp. 727.3/4 P.

²⁴ Ver, Carta de Petrona Azcuaga a la Sra. María Esther Zuno de Echeverría. Junio 17 de 1975. AGN. Galería 3. Grupo Documental LEA. Vol. 2598. Exp. 727.3/4 A.

²⁵ Ver, Carta de Carmen Gómez y otras mujeres indígenas al presidente Echeverría. 4 de junio de 1976. AGN. Galería 3. Grupo Documental LEA. Vol. 2598. Exp. 727.3/4 G.

²⁶ Ver, Oficio del Lic. Ávila Salado, SRA, al Procurador Agrario en el Estado de Chiapas. Octubre 3 de 1975. AGN. Galería 3. Grupo Documental LEA. Vol. 2598. Exp. 727.3/4J

Primer Congreso Indígena, para conmemorar los 500 años del nacimiento de Fray Bartolomé de las Casas. Entonces el obispo Samuel Ruiz, militante de la teología de la liberación había reconocido las tareas del gobierno del Estado en materia indígena y la formación de profesores que habían “dignificado” al indio.²⁷ Los indígenas plantearon al gobierno sus reclamos, entre ellos, el asunto de las tierras. Poco después, en 1975, viendo el espacio político que se abría con la organización nueva étnica, el gobierno formó la Confederación Nacional de Pueblos Indígenas, afiliándola de inmediato al PRI. Pero muy pocos en la selva seguirían a esa organización gubernamental. La cuestión indígena en la diócesis de San Cristóbal (las otras tenían sede en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, aunque con una composición indígena mínima) estaba ya en manos de la Iglesia. El obispo Samuel Ruiz había comenzado a impulsar la organización campesina independiente. Los catequistas o tuhuneles recibían cursos de formación alternativa en la diócesis de San Cristóbal, llegaban a las comunidades a ejercer los servicios religiosos y a organizarlas para realizar proyectos de desarrollo, incluyendo los relacionados con la tierra. Su tarea fue tan eficiente que hacia mediados de los ochenta atendían casi todos los ejidos de la selva, excepto algunos que cambiaron al protestantismo.

Una decisión política adicional recrudeció los conflictos con los indígenas de la selva en el gobierno de López Portillo. El 12 de enero de 1978 se publicó el decreto

²⁷ Periódico *Excelsior*. Lunes 14 de octubre de 1974. pp. 14-15A.

de creación de la Reserva de la Biósfera Montes Azules (selva lacandona) con 331 mil 200 hectáreas, cerca de la mitad del decreto anterior, pero igualmente superpuesto a los terrenos ejidales ya ocupados. Ejidos como Amador Hernández y San Gregorio quedaron nuevamente afectados, esta vez por una decisión de carácter ecológico, (ver figuras 6, 7 y 8). Tratando de detener la ocupación de la selva el Estado impulsaba una política de “áreas protegidas” que incluía privilegiadamente la zona de Ocosingo. Para los indígenas ya asentados en la selva ese nuevo decreto significó el despojo de sus tierras. El gobierno aplicó entonces un plan de reubicación, hacia las orillas de la comunidad lacandona. Unas mil quinientas familias aceptaron, y se emitió un nuevo decreto (8 de marzo de 1979) por el que se les daban derechos en las nuevas ubicaciones (los tzeltales en Palestina, los choles en Corozal y los lacandones en Lancajá Chanza-yab). Pero no todos aceptaron, a pesar de que el ejército presionó a las comunidades. La mayoría no quería dejar las tierras y pueblos que habían levantado durante los últimos 20 años. En los nuevos asentamientos tendrían que volver a empezar.

El cambio de la política agraria y ecológica en Chiapas significó la ruptura total con el régimen. Unos 30 ejidos de la selva formaron en 1975 *Quitipic Ta Lecubetzel* (“Unidos por nuestra Fuerza” en tzeltal) con el objetivo preciso de regularizar sus tierras al margen del partido oficial. Así, cuando apareció el decreto de Montes Azules se levantaron con fuerza. En agosto de 1979 denunciaron a la prensa el amedrentamiento que el estado

realizaba sobre 10 mil indígenas tzeltales de ya 51 ejidos organizados en *Quitipic*, tratando de obligarlos a reubicarse. Para ellos el plan de reubicación representaba el traslado a centros de población con tierras de menor calidad que los regresarían automáticamente a la época de Juan Pérez Jolote. Se convertirían nuevamente en peones, al tiempo que las autoridades arrasaban el bosque y vendían la madera.²⁸

Junto con la actividad de Samuel Ruiz apareció también el apoyo de estudiantes y profesionistas críticos. Siguiendo una estrategia de *línea de masas* (maoísta) dieron impulso a *Quitipic*, se integraron a la Organización de Campesinos Emiliano Zapata (OCEZ) y formaron una Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) y diversas Uniones de campesinos, que dentro de los márgenes de la ley impulsaban proyectos campesinos de desarrollo social y económico, pero especialmente la regularización de la tierra.

Al iniciar los años ochenta la rebeldía en Chiapas era ya totalmente franca. Fue la década de formación de grandes organizaciones regionales, al margen de la tradición corporativa. Además de la OCEZ y la CIOAC (Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos), en el campo había nacido en 1979 la Coordinadora Plan de Ayala (CNPA), con intensa actividad en Chiapas, especialmente a través de la Unión Campesina Independiente de la Selva de Chiapas. Paralelamente, en

²⁸ Información Sistemática. (1979-1983). *Revista de índices e información procesada*. No. 44. Agosto de 1979. pp. 33-34.

el Istmo había surgido con mucha fuerza la Coordinadora Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo (COCEI). La selva chiapaneca estaba ligada de una u otra manera a todas esas organizaciones y era una de las zonas más combativas del país. Además, el crecimiento de la población indígena agudizaba la situación. En 1950 había en el estado poco más de 80 mil tzeltales y tzotziles y 30 años después ya eran 400 mil, sólo de esas dos etnias.²⁹ Magda Fritscher describe el ambiente que entonces privaba en el campo chiapaneco de la siguiente forma:

Las luchas en Chiapas (se han) intensificado en este sexenio (1976-1982). Se caracterizan por su carácter masivo y espontáneo... Sus reivindicaciones son múltiples: reconquista de tierras usurpadas, ejecuciones (agrarias) pendientes, solicitudes desatendidas, indemnización y reubicación de campesinos expropiados por obras federales, sindicalización de peones acasillados, autonomía productiva, cese a la represión, libertad de los presos políticos; no obstante, la lucha es prioritariamente por la tierra y por el derecho a sobrevivir. Las movilizaciones espontáneas poco a poco empiezan en algunos sitios a adquirir trascendencia regional, destacando las zonas de Simojovel, Buchil y Huitiupan, en donde la plataforma de lucha incluye reivindicaciones por la tierra y sindicalización; los municipios fronterizos —Las Margaritas, Trinidad, Comitán—, movilizadas en

²⁹ J. de la Fuente. "Desarrollo de comunidades indígenas en México" en UNESCO. *Investigación sociológica y vida rural en América Central, México y la región del Caribe*, p. 174 y R. Stavenhagen et al. *Instituto Nacional Indigenista. 40 años*.

torno a demandas agrarias y de carácter productivo. En ambas regiones ha participado la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos en la dirección de los movimientos.³⁰

El entonces gobernador del Estado, Juan Sabines (1979-1982) se dio cuenta de la gravedad del asunto y demandó a la Secretaría de la Reforma Agraria, al finalizar su período, con carácter de urgencia, el deslinde de las 614 mil hectáreas del decreto de Echeverría.³¹ Los planos de tal deslinde se entregarían a la comunidad lacandona el 14 de septiembre de 1984, en un acto con el presidente Miguel de la Madrid, en Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, el nuevo secretario de la Reforma Agraria, Luis Martínez Villicaña, reconoció en el mismo acto que existían en la selva muchos indígenas sin tierras, pero que ya no había tierras afectables. Un año antes se habían entregado certificados de derechos agrarios, credenciales de autoridades ejidales y comunales y mandamientos gubernamentales. Sin embargo, la “lucha por la tierra (continuaba y había) producido un ambiente de intranquilidad que (impactaba) negativamente a las mismas comunidades indígenas... (con) enfrentamientos entre

³⁰ M. Fritscher. *Estado y sector rural en México: 1976-1982*. pp. 148-149.

³¹ Ver, Información Sistemática (1979-1983). *Revista de índices e información procesada*. No. 73. Febrero de 1982. p. 37.

ejidatarios, trabajadores del campo, pequeños propietarios y demandantes de tierra”.³²

En mayo de 1983 el presidente Miguel de la Madrid llegó al estado para presentar el Plan Chiapas, el primero que se realizó a nivel nacional. Ante el nuevo gobernador, el general Abasalón Castellanos Domínguez, el presidente reconoció los graves problemas de pobreza, de injusticia, que hacían incurrir “en la tentación de la violencia”, y agregó: “En México no es válida la violencia porque existen las instituciones y la voluntad política para resolver las diferencias mediante el diálogo y la negociación”.³³ Por su parte, el general Castellanos se limitó a hablar de regularizar la tenencia de la tierra, con estricta sujeción a los mandatos del artículo 27 constitucional, preservando los recursos naturales y ampliando la base productiva del estado. Es decir, protegiendo las “pequeñas” propiedades de los tradicionales finqueros. En la práctica se afirmaba y negaba el derecho a la tierra para los indígenas de la selva. Los indígenas chiapanecos y sus nuevas organizaciones, que para entonces ya habían dejado atrás a la CNC, iniciarían una estrategia de presión y de búsqueda de soluciones concretas. El primero de octubre de 1983 realizarían una marcha que saldría de Tuxtla Gutiérrez y llegaría a la ciudad de

³² Palabras del Secretario de la Reforma Agraria, Luis Martínez Villicaña en el acto agrario efectuado en Tuxtla Gutiérrez. 14 de septiembre de 1984. AGN. Galería 3. Grupo Documental MMH. Caja 7. Expediente 8. p. 47.

³³ Unidad de la Crónica Presidencial. *Las razones y las obras*, 1984. p. 152.

México 16 días después. La marcha era organizada por la CIOAC, dirigida por el legendario líder agrario Ramón Danzós Palomino, demandando, entre otras cosas, “reparto de tierras”.³⁴ Al año siguiente, el 26 de marzo la CNPA convocó desde Tuxtla Gutiérrez a campesinos de cinco regiones del país a una nueva marcha a la Ciudad de México. Llegarían el 8 de abril y el día 10, en el aniversario de la muerte de Zapata, realizarían un enorme plantón en el Zócalo, con aproximadamente 20 mil campesinos, para “acelerar el reparto de tierras”. En octubre de ese mismo año hubo un enfrentamiento violento por la titularidad de los derechos agrarios entre dos organizaciones indígenas de Venustiano Carranza. La disputa, en la que murieron 10 personas, se produjo entre indígenas de la Confederación Nacional Campesina y de la OCEZ, ligada a la CIOAC.³⁵ Durante otra marcha de Chiapas a la Ciudad de México, en 1986, los líderes indígenas denunciaban que el gobierno se había dedicado “a repartir parcelas” a los que habían matado “a campesinos solicitantes de tierras de organizaciones independientes”.³⁶ Muchos otros conflictos aparecieron en todo el estado y muchos indígenas fueron hechos presos o muertos. Los tzotziles de la CNPA, señalaba Beaucage, “deben defender con las armas en la mano sus tierras comunales, frente a asesinos a sueldo de grandes pro-

³⁴ *Ibidem.* P. 272.

³⁵ Unidad de la Crónica Presidencial. *Las razones y las obras*, 1985. p. 336.

³⁶ R. Rojas. Chiapas. La paz violenta. p. 29.

pietarios".³⁷ La estrategia del gobernador Castellanos fue de una represión severa a las nuevas organizaciones. El saldo de su gobierno (1983-1988) fue, de acuerdo con la periodista Rosa Rojas: 102 asesinatos, 327 desaparecidos, 590 detenciones, 427 personas secuestradas y torturadas, 261 heridos, 407 familias expulsadas, 54 desalojos de poblados, 27 amenazas de desalojo, 12 mujeres violadas, 548 amenazas de expulsión de familias, 18 casos de destrucción de viviendas, escuelas e iglesias, 29 ataques a mítines, 2 ataques a marchas de protesta y 4 allanamientos a oficinas de organizaciones sociales y políticas.³⁸ El centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas, creado a instancias de la diócesis, tenía registrado todo ello y reclamaba justicia. Danzós Palomino, Alejandro Encinas, Gerardo Unzueta y Eraclio Zepeda, diputados por el Partido Mexicano Socialista, demandarían inútilmente, en 1988, juicio político a Castellanos.

Tres caminos

a) La vía política

En los años ochenta las estructuras políticas de Chiapas mantenían la vieja tradición mapachista sobre las

³⁷ P. Beaucage. "La condición indígena en México" en *Revista Mexicana de Sociología*. p. 208.

³⁸ R. Rojas. *op. cit.* p. 29.

posibilidades de intervención de los indígenas. Las grandes fuerzas económicas locales mantenían el poder del estado y posiciones estratégicas dentro del PRI que aseguraban el control de sus intereses. No obstante las tensiones dentro y fuera del estado se agudizaban. Entre 1976 y 1982 hubo tres gobernadores. Jorge de la Vega Domínguez, electo en 1976, renunció al año siguiente para ocupar la Secretaría de Comercio en el gobierno de López Portillo. En el gobierno estatal fue puesto Salomón González Blanco, quien sería removido en 1979, acusado de provocar un “vacío de poder”, para dar paso a Juan Sabines Gutiérrez, un exsecretario general del PRI, que gobernó de 1979 a 1982. A su vez, Jorge de La Vega ocuparía entre 1987 y 1988 la presidencia nacional del PRI.

La combinación de fuerza económica y política de la clase gobernante chiapaneca, frente a los proyectos federales y las nuevas fuerzas indígenas estaba generando inestabilidad nuevamente pero, además, limitaba los avances de la naciente Reforma Política, lo que se reflejaba en los procesos políticos internos. Las pugnas, a menudo violentas, por las candidaturas del PRI a las alcaldías se mantuvieron. En Huixtla, por ejemplo, en las elecciones de 1979, hubo revueltas por la imposición del candidato del PRI a la presidencia municipal. Algunos grupos indígenas optaron por apoyar a los partidos de izquierda, en especial al Partido Comunista Mexicano, que recuperó su registro en 1979, después de haberlo perdido en 1946. El Partido Acción Nacional ganaría entonces dos alcaldías y el Partido Popular Socialista

otras dos, de las 110 del estado. Para la oposición de izquierda, sin embargo, los espacios políticos internos aún estaban cerrados de facto. Alfredo Morales candidato del PCM a la presidencia de Villaflores en 1979, sería asesinado en 1980.³⁹ Cuando el PCM se unió a diversas fuerzas para formar el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), en las elecciones de 1982 muchas comunidades indígenas de Chiapas le dieron su apoyo. En la campaña a la presidencia nacional de Arnoldo Martínez Verdugo, durante ese año, miles de campesinos organizaron mítines en varias ciudades del estado. En Simojovel un indígena tzotzil dijo a la multitud en su lengua, refiriéndose a los finqueros: "Les da a ustedes coraje que estemos hablando acá en la plaza pública, pero yo no sé español pero algo sé, y estamos nosotros diciendo la verdad porque nosotros somos los que trabajamos la tierra".⁴⁰ Entonces el PSUM se consolidaba como la tercera fuerza nacional, si bien aún muy minoritaria, alcanzando en las elecciones nacionales de 1982 alrededor del 4%.⁴¹

Durante el duro gobierno de Absalón Castellanos las fuerzas políticas vivieron a salto de mata. En 1988, cuando el PSUM, el PMT (Partido Mexicano de los Trabajadores) y otras fuerzas de izquierda se fusionaron para

³⁹ A. López. *La lucha por los ayuntamientos. Una utopía viable*. p. 107.

⁴⁰ R. Hernández y R. Rock. *Zócalo rojo*. p. 55.

⁴¹ Información Sistemática. (1979-1983). *Revista de índices e información procesada*. No. 79. 15 de agosto de 1982. pp. 42-43. y No. 85. Enero de 1983.

formar el Partido Mexicano Socialista, cuatro diputados de ese partido, Ramón Danzós Palomino (CIOAC), Alejandro Encinas, Gerardo Unzueta y Eraclio Zepeda denunciaron la persecución política de las fuerzas de oposición en el estado y, el asesinato de Andulio Galvez Velásquez, dirigente de la CIOAC y candidato a diputado local.⁴² En la práctica, las luchas políticas en el campo chiapaneco eran entre la CNC-PRI y la CIOAC-PSUM. Pero la represión llegaría incluso a la misma CNC. Germán Jiménez dirigente de esa central en Chiapas, sería encarcelado en 1986 en el penal de Cerro Hueco por encabezar un movimiento por el aumento a los precios de garantía.⁴³ Durante el siguiente gobierno estatal, el de Patrocinio González Garrido (1988-1991), el párroco de Simojovel, Joel Padrón sería llevado a la cárcel por pugnas con la lidereza local de la CIOAC, que había decidido afiliarse al PRI. La protesta del obispo Samuel Ruiz y de habitantes del pueblo llegaría a Tuxtla Gutiérrez, con una marcha de tres mil indígenas, y hasta la secretaria de Gobernación, a cargo de Fernando Gutiérrez Barrios, en donde se gestionaría la liberación del párroco. Finalmente, habiendo obtenido un amparo el 5 de noviembre de 1991, el párroco Padrón sería liberado.⁴⁴

Era claro que la vía política no ofrecía oportunidades claras para los indígenas chiapanecos. Aún con la Reforma Política, la violencia por las tierras y el control

⁴² R. Rojas, *op. cit.* Pp. 28-29.

⁴³ *Ibidem.* p. 39.

⁴⁴ *Ibidem.* pp. 61-63.

político se agudizaban en los ochenta. Sin embargo, la penetración de los partidos de oposición, especialmente la del PMS, era notoria. En las elecciones federales de 1988 poco más de 3, 200 pobladores del distrito de Ocosingo, que incluía varios municipios alrededor, votaron por el PMS, lo que representó casi el 40 % de todos los votos que oficialmente recibió ese partido en todos los distritos de Chiapas. Sin embargo, esos votos aún fueron pocos comparados con los más de 100 mil que votarían por el PRI en el mismo distrito, reuniendo las lealtades vigentes de campesinos dotados o aún esperanzados.⁴⁵

b) Políticas sociales

Las políticas sociales del Estado, como Estado de bienestar, fue el segundo camino que se presentó a los indígenas en esa época. Chiapas siempre apareció como uno de los estados con mayores índices de analfabetismo y problemas de salud, desnutrición, desempleo. En 1970 el gobierno de Echeverría se percató de que la estructura burocrática del gobierno federal, como Estado de bienestar, no llegaba a las poblaciones más necesitadas y aisladas, las indígenas. A partir de 1971 se multiplicaron los centros del INI y en 1973 se creó el Programa Integral de Desarrollo Rural, dirigido desde la Presidencia, para hacer llegar los recursos a las pequeñas localidades.

⁴⁵ Unidad de la Crónica Presidencial. *Las razones y las obras*, 1983. p. 754.

Fue sustituido en 1977 por la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR), cuyo mayor éxito fueron las clínicas IMSS-Coplamar. Entre 1983 y 1988 ese programa se convertiría, con menores recursos por la crisis del 82, en los Programas de Desarrollo Regional y los Programas Regionales de Empleo, operando desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional a cargo de Manuel Camacho Solís, a su vez dentro de la Secretaría de Programación y Presupuesto, a cargo de Carlos Salinas de Gortari. En 1986, cuando Camacho se convirtió en Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, se creó la Comisión Nacional para la Protección y Desarrollo de la Selva Lacandona. Era coordinada por Carlos Salinas, como Secretario de Programación y Presupuesto. La idea era la fórmula de la concertación entre instituciones y grupos sociales que había sido exitosa en la Ciudad de México después de los sismos del 85. En la ceremonia inaugural de esa Comisión participaría un representante de la Unión de Uniones, Francisco Gómez, un indígena del ejido La Sultana que ya era parte del EZLN. Planteó lo que tenía que plantear: regularización de la tenencia de la tierra, valoración de la cultura indígena y respeto de las autoridades electas por las comunidades. Poco después, en marzo de 1987, Camacho Solís organizó, como primera acción de la Comisión, la firma del Convenio de Concertación para la Protección de la Selva Lacandona en el ejido Pico de Oro. Se destinarían entonces recursos para el desarrollo de las comunidades. Fueron construidos hospitales de campo en Bochil, Motozintla

y Venustiano Carranza, 15 clínicas dentro del “Programa Especial de la Selva” y sistemas de agua potable en Marqués de Comillas, en la zona plana del extremo sureste de Ocosingo.⁴⁶

Finalmente llegaría el más ambicioso programa social del Estado, el Programa Nacional de Solidaridad 1988 y 1994, anunciado por el entonces presidente Carlos Salinas desde su toma de posesión. Así se multiplicaron el número de escuelas, centros de salud, hospitales, servicios públicos, viviendas y proyectos productivos, muchos de ellos promovidos y dirigidos por las mismas comunidades, a través de los comités de solidaridad y los Fondos Regionales Indígenas que otorgaba el INI. En Chiapas el Programa de Solidaridad fue intenso y, particularmente, en la zona de la selva, detectada ya como una zona problemática. En el municipio de Ocosingo, el mayor de todos y principal receptáculo de las comunidades indígenas en busca de tierras, se realizaron numerosas acciones del programa. Benemérito de las Américas, en la frontera con Guatemala, pasaría de ranchería a pueblo más o menos equipado. Ahí se construiría un hospital del IMSS, una gasolinera, servicio de agua, electrificación, techados de tianguis, tienda popular, mejoramiento de escuelas y pequeñas obras productivas rurales. Ejidos como Frontera Corozal (Luis Echeverría Álvarez), El cacao, Palestina, Nuevo Morelia, San Antonio, Samaria, Río Blanco y San Vicente tendrían ser-

⁴⁶ Secretaría de Programación y Presupuesto. *México: desarrollo regional y descentralización de la vida nacional*. pp. 119-120.

vicio de agua potable. Habría electrificación en Amador Hernández, Zapotal, Avellanal, Dolores de las Palmas, Santa Marta, Nueva Esperanza, Tenango, Ojo de Agua, la Libertad, El Lacandón, El Tumbo, Peña Limonar y otras comunidades. Mejorarían las escuelas, con aulas nuevas muchas veces, de San Francisco, La Arena, Betania, El Censo, San José, Loma Bonita, El Calvario, El Rosario, San Quintín y otras localidades. Al mismo tiempo se darían pequeños créditos para la producción rural y apoyos para la producción de café (patios de secado de café y despulpadoras), maíz y chile, o para comprar pies de cría bovino, ovino o mular, en La Sultana, América Libre, San Lázaro, La Culebra, La Unión, Macedonia, Santa Elena, San Francisco, La Victoria, Zamora, La Corona. Pico de Oro, Loma Bonita, Peña Blanca, Flor de cacao, Nuevo Orizaba y otros ejidos y comunidades. Pero en donde particularmente pondría atención el presidente Salinas sería en San Juan Cancuc en la zona norponiente de Ocosingo. Primero, el 17 de agosto de 1989 en el primer año de su gobierno, se formó el nuevo municipio de San Juan Cancuc, abarcando 163 Km² con unos 20 mil habitantes, mayoritariamente indígenas, (ver figura 8). Ahí sería electo presidente municipal, en 1992, Lorenzo Pérez, un maestro rural originario del lugar. Luego se electrificaron las tres cuartas partes del municipio, se construyó un mercado (36 puestos), un tianguis artesanal (12 locales), una plaza municipal con su edificio municipal y su reloj público, 26 aulas en 11 localidades, becas a 1,139 niños, obras de agua potable en la cabecera municipal y siete locali-

dades, un camino rural de 13 Km., tres clínicas IMSS-Solidaridad, un teatro al aire libre, servicio de telefonía rural y de correo, y se rehabilitó la iglesia católica que data de 1712. Además, se dio apoyo a 684 productores de maíz en 33 localidades y también a cafeticultores de 7 comunidades. En el teatro al aire libre del pueblo, también construido por el Programa, el presidente Salinas, ante representantes de los 56 grupos étnicos del país y alrededor de 5 mil indígenas tzeltales, se refirió en 1993 a lo construido con el trabajo de la comunidad y concluyó: "Hemos construido una esperanza".⁴⁷ Y, en efecto, muchas comunidades sintieron el efecto del Programa, especialmente cuando algunas comunidades tuvieron la confirmación de dotaciones de tierras. Pero la magnitud del problema de la tierra en la selva ya era de proporciones enormes y los nuevos servicios no parecían garantizar la tenencia. Excepto en San Juan Cancuc, en donde en las elecciones federales de 1991 el PRI obtuvo casi el 90% de los votos posibles. En cambio, en Altamirano y lo que quedaba de Ocosingo el PRI, que ganaba con cerca del 75% de los votos válidos, arrastraba más de un 50% de abstención.⁴⁸ Era claro que la inyección de recursos estatales en la selva no producía una marcha atrás en la decisión rebelde de muchas comunidades sin tierra.

⁴⁷ Secretaría de Desarrollo Social. *Gaceta de Solidaridad*. No. 83. 15 de septiembre de 1993. pp. 6-7.

⁴⁸ J. P. Viqueira, y W. Sonnleitner, (coordinadores) *Democracia en tierras indígenas*. Resultados de las Elecciones federales legislativas de 1991. Cuadro 30. pp. 304-309.

En 1992 el Gobierno Federal tomó otra medida que afectó una vez más a los indígenas de la selva. Ese año decidió modificar el artículo 27 de la Constitución y la Ley Agraria para abrir la posibilidad de la comercialización de los ejidos y dar por terminado el reparto agrario. Salinas de Gortari trataba así de adecuar la estructura agraria a la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. El Programa Nacional de Solidaridad parecía garantizar la lealtad de los más pobres, especialmente de los indígenas de Chiapas. Pero para las comunidades indígenas de la selva eso significó una nueva traición. Había que realizar el levantamiento final.

c) La guerrilla

El último camino que se abrió en Chiapas, a contracorriente de los anteriores, fue el de la guerrilla, que comenzó a desarrollarse en la selva con unos 12 militantes de las Fuerzas de Liberación Nacional. Se trataba de un grupo guerrillero que había sido casi totalmente destruido en 1974, y que se había instalado en Chiapas hacia 1983, con la idea de formar el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ese grupo recibió el apoyo de la diócesis de San Cristóbal y mediante una organización no gubernamental creada por la misma diócesis, Desmi, trabajó en los proyectos educativos, de salud, tiendas y, sobre todo y clandestinamente, en la guerrilla. Los primeros guerrilleros se proveían de alimentos y de todas

sus necesidades de la ciudad. Pero poco a poco, con el apoyo de las redes catequistas y de las organizaciones campesinas, comenzaron a tener los primeros contactos con las comunidades. Uno de los primeros ejidos en participar fue Amador Hernández, afectado por el decreto de la Reserva de Montes Azules. Las comunidades indígenas los aceptaron y de manera creciente se encargaron de su “sostén”. La defensa de la tierra prometida era ahora factible por una vía diferente a la ensayada hasta entonces. El Estado, el enemigo a vencer por los guerrilleros, era el mismo que había traicionado a los ejidos indígenas con los decretos sobre la selva. Un indígena tzeltal, explicó esas razones para integrarse al EZLN:

Ahí (en Amador Hernández) tres miembros de Comité Clandestino Revolucionario Indígena del EZLN (nos) contaron que de las historias de las fincas habían cogido el coraje para luchar y decirse por la vía armada... Llegamos aquí hace treinta años, nuestros padres abandonaron una finca allá por San Miguel donde estaban como esclavos. Aquí les dieron ejido pero el estado no entregó todos los papeles. El gobierno es el responsable que nos organicemos: nos quería sacar de aquí, desde 1970 cuando decretó la zona ecológica. No quisimos salir porque no queremos que nos pase como a nuestros padres.⁴⁹

La lucha por la legalización plena de los ejidos y por nuevos ejidos, continuaría por la vía armada. Los gue-

⁴⁹ G. Rovira, *op. cit.* p. 499.

rrilleros del EZLN, impulsados por una vocación maoísta radical, coincidían con las demandas ejidales de los indígenas. Para cumplir la fusión de ambos programas era necesario un ejército de “liberación nacional”, de acuerdo con la terminología de los movimientos anticolonialistas de la primera mitad del siglo XX. Así lo habían intentado muchos grupos armados en América Latina y particularmente en México. Los ejemplos triunfantes de Cuba (1959) y Nicaragua (1979) estaban a la vista. El pueblo armado podía transformar las estructuras capitalistas. “Marcos”, quien se convertiría en el líder del EZLN, se había entrenado según Tello, en Nicaragua, en donde el pueblo y la vanguardia guerrillera habían conformado una unidad revolucionaria que culminaría con el triunfo del Ejército Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1979. En la selva de Chiapas también existía para los guerrilleros el reto de romper la barrera que tradicionalmente se había levantado entre ellos y las comunidades campesinas. Camilo Torres, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, el mismo Che habían caído cercados por los ejércitos de los respectivos países, sin el apoyo masivo de las comunidades. Una de las lecciones básicas que había dejado la guerrilla era que cuando ésta se levantaba contra un gobierno legítimo y de conformación democrática, todo intento de sublevación era inútil. ¿Sería factible una revolución socialista en México con un régimen de amplia legitimidad y de estructuras democráticas, reforzadas incluso con la Reforma Política? Chiapas estaba demostrando que sí, al menos dentro de la zona de la selva. Ahí la legitimidad del gobierno

había caído drásticamente después de los dos primeros decretos. El tercer decreto hostil, (1992) parecía la señal definitiva. El Estado había traicionado a los campesinos al cancelarles el derecho a la tierra, la misma que les había dado años antes. El sentido de la Revolución Mexicana y la legitimidad del régimen habían muerto para los indígenas de “las cañadas”. Las razones para unir los intereses de la guerrilla y de los indígenas chiapanecos eran claras y podía romperse el maleficio de la guerrilla “foquista”.

Los miembros del EZLN siguieron además otras lecciones que habían dejado las historias de levantamientos en América Latina. Eran lecciones prácticas para todo movimiento insurreccional. Entre ellas: adaptarse físicamente a la selva, (lo que llevaba hasta uno o dos años) conocer el terreno detalladamente, hablar la lengua local, incorporar a los campesinos a los puestos de mando y, sobre todo, mantener la clandestinidad absoluta. Desmi permitía un camuflaje adecuado para la llegada de no indígenas a la selva y, además, el contacto con la diócesis hacía factible una relación directa con las comunidades. Éstas celebraron sus consejos, de acuerdo a la vieja tradición indígena, y pronto los milicianos del EZLN fueron miles. Con el apoyo comprometido de las comunidades la clandestinidad se mantuvo casi totalmente. Los organizadores viajaban de noche y todos los dirigentes se cubrían con pasamontañas o con un paliacate. El ejército había descubierto un campo de entrenamiento en 1991 y poco después, en 1993, había tenido un enfrentamiento en el campo de entrenamiento zapatista de Las Cala-

bazas. Sin embargo, el gobierno no actuó abiertamente contra ellos. Todo hacía pensar que eran unos cuantos radicales. Pero no. Para entonces había en la selva, entrenándose diariamente, decenas de miles de indígenas que ya formaban, propiamente dicho, un ejército. El Frente de Liberación Nacional tenía una dirección nacional y varias comandancias de los frentes de lucha, de los cuales el único realmente exitoso era el de Chiapas. Le seguían comités clandestinos en cada zona. El de Chiapas se denominó Comité Clandestino Revolucionario Indígena. Así que las decisiones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional serían tomadas por la Comandancia General del EZLN, en la que destacó rápidamente “Marcos”, a pesar de ser subcomandante, y el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, formado por los representantes de las comunidades. A principios de los 90 la guerrilla y los indígenas de la selva eran ya un solo cuerpo. Seguían en la estructura los capitanes, tenientes, subtenientes, insurgentes, reclutas y milicianos. Las armas más sofisticadas estaban en manos de los dirigentes y muchos de los soldados comunes sólo tenían rifles de entrenamiento de madera, pero en cualquier caso ya eran soldados que habían jurado lealtad al EZLN. Al final estaban las bases de apoyo, componente básico para la subsistencia de la guerrilla. Todos los grupos guerrilleros de América Latina se habían sostenido sobre las “bases de apoyo” y habían triunfado o fracasado en gran medida por el papel jugado por esas “bases”. Se trataba simplemente de la comunidad, de las familias que deciden o no apoyar con todos sus recursos a la guerrilla.

En el caso de la selva lacandona el apoyo fue casi total. El alimento, los lugares de entrenamiento y reunión, y, sobre todo, la disciplina y la participación activa de la gente fue decisiva para el éxito del movimiento.

Conclusiones

Hacia 1993 se conjuntaron en la selva de Chiapas los hechos históricos que hemos mencionado. A) Una fuerte demanda de tierras por parte de los indígenas. B) La cancelación formal de atender esa demanda por parte del Estado con cambios jurídicos de 1972, 1978 y 1992. C) Una tradición de violencia contra las comunidades que se había recrudecido en el gobierno de Absalón Castellanos, 1982-1988. D) Programas sociales que atendían las necesidades de servicios, parcialmente, pero que no atendían el problema central de la dotación de tierras. E) Una Reforma Política que no había logrado que se abanderaran exitosamente las demandas de los indígenas en el gobierno estatal, y F) Un grupo armado que invitaba a la Revolución a los indígenas respetando sus formas de organización y cultura.

Todo indicaba que, en 1993, en muchas comunidades indígenas de la selva, privaba un sentimiento de odio hacia el régimen, de búsqueda desesperada de una salida a las necesidades de tierras y de seguridad de que un levantamiento armado exitoso era deseable y factible. La violencia, experimentada secularmente, surgía como la única vía. El 1º de enero de 1994, después del

ciclo agrícola y cuando tradicionalmente se renovaban las autoridades, en plena época de elecciones federales, comenzó el levantamiento. Las comunidades indígenas de la selva, armadas con rifles reales o de madera, se encaminaron hacia San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Las Margaritas, Oxchuc, Huixtán y Chanal.

Había surgido así en México el primer levantamiento popular armado desde la Revolución. No habría grandes batallas, pero sí un manejo mediático muy hábil por parte de los líderes del movimiento, que de inmediato generó una imagen favorable dentro de gran parte de la opinión pública. Los indígenas, los últimos atendidos por el régimen, protestaban con violencia y con razón. El Estado había sido sensible, al menos parcialmente durante las últimas décadas, a las necesidades de servicios de los indígenas e incluso a la necesidad de proteger las reservas selváticas. Sin embargo, también se había hecho presente la necesidad sagrada de la tierra. Los primeros caminos ensayados por los indígenas sin tierra, las grandes organizaciones o los partidos de oposición habían servido frente al autoritarismo de los poderes locales. Pero nunca la protesta había sido tan contundente como la de los indígenas armados y con pasamontañas, imponiendo una nueva ley, su ley. Con el soporte de la opinión pública nacional e internacional, los neozapatistas se convertirían así en un movimiento sólido, dominando territorios, conviviendo con poderes locales formales y grupos políticos tradicionales, levantando, en todo caso, una antigua voz poco escuchada, que por ello mismo se volvió original.

Figura 1
Chiapas con el Despoblado del Lacandón. Siglos
XVII y XVIII*



* Tomado de Jan de Vos. Catálogo de Documentos. Fondo "Provincias de Chiapas". Archivo General de Centroamérica, Guatemala. CIES. San Cristóbal de las Casas, 1985. En: Pérez, Ma. E. y Guillén, D. Chiapas. Una historia compartida. Instituto Mora, México. 1994. Pág. 47.

AGN. Material Microfilmado. Rollo Chiapas. Claves 6459, 6476, 6584 y 6586.

Figura 2
Dotación de ejidos



AGN. Material Microfilmado. Rollo Chiapas. Claves 6459, 6476, 6584 y 6586.

LA REBELIÓN NEOZAPATISTA EN CHIAPAS

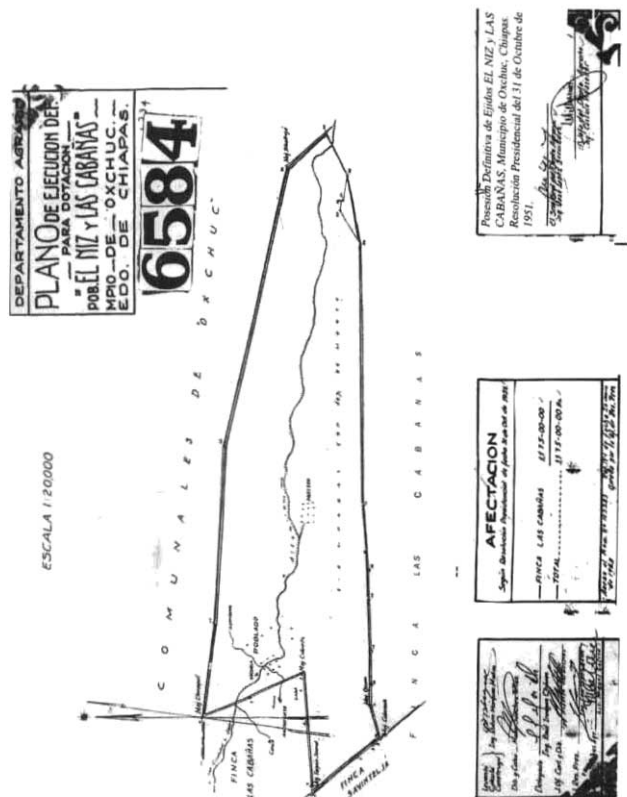
Figura 3
Dotación de ejidos

DEPARTAMENTO AGRARIO
PLANO DE EJECUCIÓN
MPIO. DE OCOSINGO
ESTADO DE CHIAPAS.



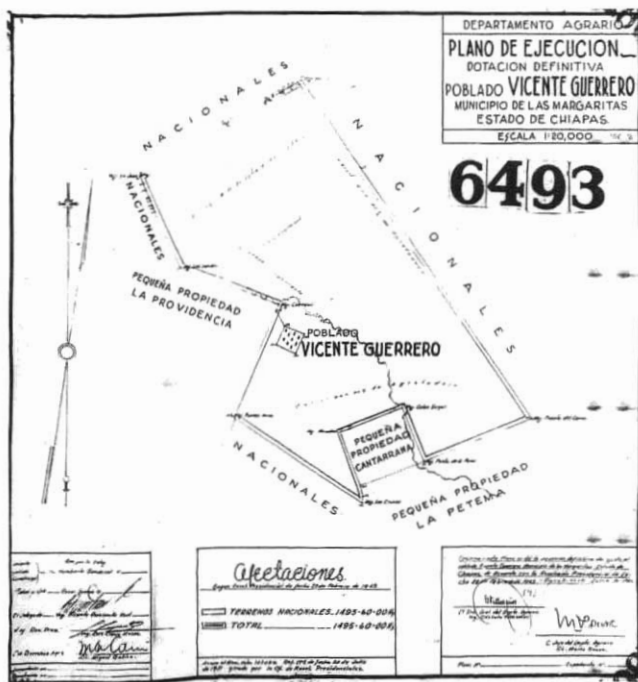
AGN. Material Microfilmado. Rollo Chiapas. Claves 6459, 6476, 6584 y 6586.

Figura 4
Dotación de ejidos



AGN. Material Microfilmado. Rollo Chiapas. Claves 6459, 6476, 6584 y 6586.

Figura 5



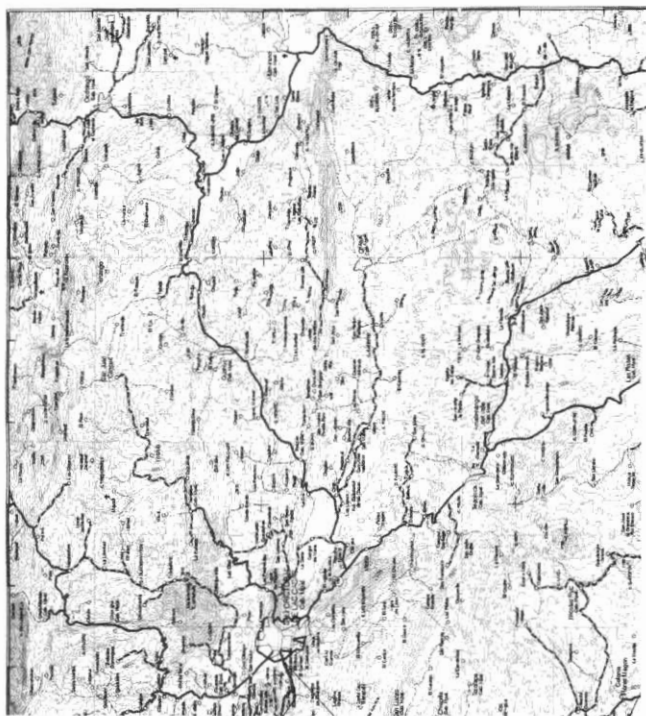
AGN. Material Microfilmado. Rollo Chiapas. Claves 6459, 6476, 6584 y 6586.

Figura 7



AGN. Material Microfilmado. Rollo Chiapas. Claves 6459, 6476, 6584 y 6586.

Figura 8



AGN. Material Microfilmado. Rollo Chiapas. Claves 6459, 6476, 6584 y 6586.

Glosario

Aleatorio. Relativo a todo acontecimiento incierto por depender de la suerte o el azar.

Anarquismo. El anarquismo es el nombre dado a la doctrina y movimiento que promueve la anarquía, es decir la autonomía e igualdad de cada persona y su asociación directa. Es entonces contrario a la existencia de cualquier relación humana de dominación que considera indeseable, innecesaria y nociva, a menudo derivado del rechazo al mando forzado, y a la autoridad involuntaria y permanente. La palabra “anarquía” deriva del prefijo griego *αν* (*an*), [no], y la raíz del verbo *αρχω* (*arkho*), [jefe]. Esta soberanía de cada individuo consiste en tener poder directo sobre cada aspecto de su vida a través de acuerdos económicos, legales, sexuales y asociativos voluntarios, donde sus instituciones, derechos y obligaciones sean acuerdos entre las partes. (<http://es.wikipedia.org>)

Balanza de pagos. Estado comparativo, correspondiente a un periodo de tiempo concreto (por regla general un año) de los pagos y cobros exteriores de una economía nacional por todos conceptos, como intereses de empréstitos o de valores particulares, fletes, derechos

de patentes, turismo, etc. que permite conocer la situación de la economía exterior. La balanza de pagos se basa en los datos que ofrece el balance de resultados (balanza comercial y balanza de servicios) el balance de capitales (movimiento de capitales, intereses) y de las transferencias (contrapartidas al movimiento de mercancías y capitales).

Coeducación. Es una educación en la que se tiene en cuenta el sexo y se enseña a vivir entre personas de ambos sexos, respetando las diferencias entre ellos. Ha tenido un rápido avance en los últimos decenios por motivos económicos y también debido a la lucha por facilitar la igualdad de oportunidades; sin embargo, aún con sus ventajas, el olvido de las diferencias de sexo ha supuesto aspectos negativos en muchas instituciones. Precisamente el término “coeducación” se está empleando en vez del de “educación mixta”, por considerarse que este último modelo ha fracasado en su búsqueda de la igualdad.

Concesión. Es el otorgamiento a través de un contrato del derecho de explotación por un lapso de tiempo determinado de bienes y servicios. La concesión tiene por objeto la administración de los bienes públicos; mediante el uso, aprovechamiento, explotación de recursos naturales, uso de las instalaciones, la construcción de obras, de nuevas terminales de cualquier índole sea marítima, terrestre o aérea de los bienes del dominio público del Gobierno.

Contrafactual. Se denomina contrafactual o contrafáctico a todo evento o a toda situación que no ha

acontecido en el universo de lo que es actualmente observable por la investigación humana pero que *pudiera* haber ocurrido (la situación o evento *fácticos* o *realmente existentes* son llamados por este motivo, algo ambiguamente, “actuales”). Se dice que el evento o la situación forman parte de un universo posible, mientras que el evento o situación actuales forman parte del universo fáctico.

Contrato Colectivo de trabajo. Es un tipo peculiar de contrato celebrado entre un sindicato o grupo de sindicatos y uno o varios empleadores, o un sindicato o grupo de sindicatos y una organización o varios representantes de los patrones. También, en caso que no exista un sindicato, puede ser celebrado por representantes de los trabajadores interesados, debidamente elegidos y autorizados por estos últimos, de acuerdo con la legislación nacional.

Coyuntura. Lo que no es permanente, sino contingente y cambiante, pero que puede ser decisivo en el periodo más o menos largo en que se presenta. En historiografía la coyuntura es el nivel del tiempo intermedio entre la larga duración (de extensión de varios siglos) y los acontecimientos puntuales, tal y como lo define Fernand Braudel . Los procesos económicos (series de precios o salarios), las crisis y revoluciones serían buenos ejemplos de coyunturas o situaciones coyunturales. La duración real de estas situaciones no tiene por que ser breve: la coyuntura de crisis secular, por ejemplo (siglo XIV o XVII); o la Revolución Industrial.

Déficit. Lo que falta a los ingresos para que se equilibren con los gastos. En las empresas comerciales, pérdida.

Derechos civiles. Son las protecciones y privilegios de los poderes personales dados a todos los ciudadanos por la ley. Los derechos civiles se distinguen de los “derechos humanos” o de los “derechos naturales”, también llamados “nuestros derechos dados por Dios”. Los derechos civiles son derechos que son concedidos por naciones dentro de sus límites territoriales, mientras que los derechos naturales o los derechos humanos son derechos que muchos expertos afirman que los individuos tienen simplemente por nacer. (<http://es.wikipedia.org>)

Derechos sociales. Los derechos sociales señalan las obligaciones del Estado frente a la sociedad, sobre todo con los grupos de personas que necesitan protección adicional: los campesinos, los trabajadores, los pueblos indígenas, la familia y los niños.

Eugenesia. La Eugenesia es la Ciencia que tiene por objeto el estudio teórico y práctico de los medios capaces de proteger y perfeccionar a los individuos más robustos y mejor dotados de las razas humanas. El vocablo proviene de la contracción de dos términos griegos: eu (bien, bondad, perfección) y génesis (nacimiento), Eugene, “bien nacido”. La eugenesia es una filosofía social que defiende la mejora de los rasgos hereditarios humanos mediante varias formas de intervención. Las metas perseguidas han variado entre la creación de personas más sanas e inteligentes, el ahorro de los recursos de la

sociedad y el alivio del sufrimiento humano. (<http://es.wikipedia.org>)

Expropiación/nacionalización. Se refiere al proceso legal y político por medio del cual un gobierno puede hacerse de la propiedad de nacionales o extranjeros, con o sin pago, por juzgarlo de interés público y/o nacional.

Fallo. Es el acto jurídico proveniente de un tribunal, mediante el cual resuelve las peticiones de las partes, o autoriza u ordena el cumplimiento de determinadas medidas.

Feminismo. El feminismo es un conjunto de teorías sociales y prácticas políticas que cuestionan y critican las relaciones sociales en las que las mujeres se encuentran sometidas y subordinadas. En general, los feminismos realizan una crítica a la desigualdad social entre mujeres y hombres, y proclaman la promoción de los derechos de las mujeres.

Filial. Empresa subsidiaria de una corporación por lo general multinacional.

Fuente fiscal. Monto de los bienes que generan riqueza y de donde se obtiene lo necesario para pagar impuestos.

Fusiones/Consolidaciones. Se refieren a un aspecto de la estrategia corporativa o empresarial que se ocupa de la combinación y adquisición de otras compañías así como otros activos. La decisión de realizar una fusión o consolidación son de tipo económico, específicamente consisten en una decisión de inversión, entendiéndose como tal, la asignación de recursos con la esperanza de

obtener ingresos futuros que permitan recuperar los fondos invertidos y lograr un cierto beneficio.

Heurístico. Inventivo, se dice de las hipótesis que, como ensayo de explicación, conducen al descubrimiento de nuevos hechos.

Hispanistas. En el contexto de los años de la reconstrucción nacional cuando se debatía sobre la identidad del mexicano y la mexicana, surgió una corriente de defensores de la hispanidad como componente de la identidad nacional, es más, se hablaba de hispanofilia cuando este reconocimiento se llevaba al extremo de hablar de la superioridad de la cultura española como componente de lo mexicano.

Laudó. Consiste en la resolución que dicta un árbitro y que sirve para dirimir un conflicto entre dos o más partes.

Maoísmo. Es una doctrina política y militar de lineamientos marxistas que toma ese nombre porque se fundamenta principalmente en el pensamiento de Mao Tse Tung. La doctrina maoísta busca la revolución socialista mediante un particular énfasis en la organización de masas, a diferencia de los modelos leninistas que buscan prioritariamente la organización del partido de clase.

Mestizofilia. En el contexto de los años de la reconstrucción nacional cuando se debatía sobre la identidad del mexicano y la mexicana, surgió una corriente que señalaba al mestizo y a la mestiza como el tipo físico del mexicano. Los mestizofílicos se apoyaban en la propuesta vasconceliana de la “raza cósmica” como ese *summum* de lo mejor de todas las razas.

Monopolio. En una situación de monopolio sólo hay una empresa operando en la industria o sector y no existen sustitutos cercanos.

Neozapatismo: Es la forma en la que se denomina al movimiento armado que se dio a conocer el primero de enero de 1994 en el estado de Chiapas, debido, fundamentalmente a que, por un lado, ellos se autodenominan zapatistas, conformando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (en clara alusión al movimiento agrario ocurrido durante la Revolución Mexicana encabezado por Emiliano Zapata) y, por el otro, a que se usa el prefijo neo para diferenciarlo del movimiento original.

New Deal (Nuevo Trato). Políticas económicas y sociales impulsadas por los gobiernos encabezados por el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt en los Estados Unidos de 1933 a 1939, y que en buena medida buscaban responder a los efectos de la Gran Depresión de 1929.

Oligopolio. En un mercado oligopólico existe un pequeño número de empresas, de manera que los productores están conscientes de su interdependencia. Así, cada empresa debe tomar en cuenta las acciones y reacciones de sus rivales.

Plebiscito. Un plebiscito es dirigido a todos los ciudadanos, sin tener en cuenta sus derechos. Un plebiscito, en su sentido más estricto, es la petición de la aprobación de un decreto gubernamental o la aprobación de las políticas generales del gobierno, típicamente en estados sin democracia, parlamentarismo o un órgano representativo. (<http://es.wikipedia.org>)

Política de austeridad. Estrategia política que tiende a reducir el total de las rentas destinadas al consumo. Sus medios más frecuentes suelen consistir en la aplicación de nuevos impuestos, el bloqueo de salarios, las restricciones al crédito y el control de las inversiones.

Políticas de bienestar. Consideramos como políticas de bienestar aquellas por las que las autoridades logran mejorar el bienestar de los ciudadanos. Esta afirmación tan simple se reviste sin embargo de una gran complejidad cuando la filosofía social nos interroga sobre qué es el bienestar.

Una apreciación superficial del conocimiento identifica bienestar con la satisfacción de los deseos, la ausencia de inquietudes, la holgura de dinero para poder disfrutar. Todos ellos en el eje de la seguridad y tranquilidad que prestan los bienes materiales. Las políticas de bienestar se expresan a través de mecanismos que mejoran la alimentación, la salud, la educación y la vivienda, solo por mencionar los más importantes.

Sincretismo. Término que se utiliza para designar la acción de fusionar o unir los elementos de dos doctrinas filosóficas o creencias religiosas diferentes. Por lo general, el término sincretismo es más utilizado para lo segundo; por ejemplo: en América Latina es muy común hablar de sincretismo religioso entre creencias del catolicismo y las religiones prehispánicas.

Sufragismo. A partir de la segunda mitad del siglo XIX surgió el **movimiento sufragista** que reivindicaba el derecho al voto de las mujeres como paso previo para alcanzar la plena igualdad de derechos respecto a los

hombres. El movimiento sufragista no estuvo constituido por **grandes masas** y arraigó con más fuerza en las mujeres urbanas de **clase media** que poseían un cierto grado de educación. (<http://es.wikipedia.org>)

Sufragio universal. El sufragio universal es un componente esencial de la democracia, que consiste en el reconocimiento del derecho a voto a toda la población con capacidad de discernir libremente de un Estado, sin ninguna discriminación motivada en razones de raza, etnia, sexo, creencia, condición social o nivel educativo.

Tecnócrata. Se dice del que manda o gobierna por la preeminencia de sus conocimientos técnicos.

Teología de la liberación. Corriente religiosa dentro de la Iglesia católica surgida en América Latina durante la década de los sesenta. Dicha corriente teológica se caracteriza por buscar no sólo la salvación espiritual de los creyentes después de la muerte, también busca la liberación política, económica, social e ideológica en la tierra, pues consideran que sólo de esta manera se alcanza la dignidad humana en la tierra.

Bibliografía

Capítulo I

La decisión del Tata: Voluntad, proceso y contexto en la expropiación del petróleo

- Brown, Jonathan C. "The structure of the foreign-owned petroleum industry in Mexico, 1880-1938" en Jonathan C. Brown and Alan Knight (eds.) *The Mexican Petroleum Industry in the Twentieth Century*. Austin, The University of Texas Press, 1992, pp. 1-35.
- Brown, Jonathan C. *Oil and Revolution in Mexico*. Berkeley, Los Angeles, Londres, The University of California Press, 1993.
- Brown, Jonathan C. "Empresa y política: cómo y porqué se nacionalizó la industria petrolera" en Carlos Marichal y Mario Cerutti (comps.) *Historia de las grandes empresas en México, 1850-1930*. México, Fondo de Cultura Económica, Universidad Autónoma de Nuevo León, 1997, pp.317-342.
- Corona, Gustavo. *Lázaro Cárdenas y la expropiación de la industria petrolera en México*, México, edición del autor, 1975.

- Cárdenas, Lázaro. *Apuntes autobiográficos*. Vol. I. México, UNAM, 1972.
- Hall, Linda B. *Oil, Banks and Politics, The United States and Postrevolutionary Mexico, 1917-1924*. Austin, The University of Texas Press, 1994.
- Heiss, Mary Ann. *Empire and Nationhood. The United States, Great Britain and Iranian Oil, 1950-1954*. New York, Columbia University Press, 1997.
- Knight, Alan. "The Politics of the Expropriation". en Jonathan C. Brown and Alan Knight (eds.) *The Mexican Petroleum Industry in the Twentieth Century*. Austin, The University of Texas Press, 1992, pp. 90-128.
- Meyer, Lorenzo. *México y los Estados Unidos en la controversia del petróleo*. México, El Colegio de México, 1979.
- Philip, George. *Petróleo y política en América Latina. Movimientos nacionalistas y compañías estatales*. México, Fondo de Cultura Económica, 1989.
- Rippy, Merrill. "El petróleo y la revolución mexicana". en *Problemas Agrícolas e Industriales de México*. Núm. 3. Vol. VI. México, 1954. Pp. 9-180.
- Silva Herzog, Jesús. "México y el vampirismo petrolero" en *Obras de Jesús Silva Herzog 8. Historia de la expropiación petrolera. Petróleo mexicano. Historia de un problema. Discursos y ensayos por el petróleo*, compilación e introducción por Alberto Enríquez Perea. México, El Colegio Nacional, 2008.

Capítulo II

El voto femenino en México. La lucha del siglo

- Alvarado, Lourdes (traducción y estudio introductorio), *Educación y superación femenina en el siglo XIX: Dos ensayos de Laureana Wright*, Universidad Nacional Autónoma de México, CESU, 2005.
- Cano, Gabriela, "La ciudadanía de las mujeres: disyuntiva entre la igualdad y la diferencia. México 1917-1953", en, *Palabras del silencio. Las mujeres latino-americanas en la historia*, UNISEF, Ecuador, 1995, pp. 149-181.
- Cano, Gabriela, "Revolución, feminismo y ciudadanía en México (1915-1940), en George Duby y Michelle Perrot, *El siglo XX. La mujer nueva*. Historia de las Mujeres, T. 10. Trad. Marco Aurelio Galmarini, Taurus, Madrid, 1993, pp. 301-312. T.10
- Fuentes Mares, José. *Gabino Barreda. Estudio selección y prólogo*, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1941.
- Galindo, Hermila *Estudio de la Srita. Hermila Galindo con motivo de los temas que han de absolverse en el Segundo Congreso Feminista de Yucatán*, Mérida, Yucatán, Imprenta del Gobierno Constitucionalista, 1916.
- Macías, Anna, *Contra viento y marea. El movimiento feminista en México hasta 1940*, Universidad Nacional Autónoma de México-Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2002. Col. Libros del PUEG.

- Macías, Anna, "Felipe Carrillo Puerto y la liberación de las mujeres en México", en Asunción Lavrín (comp), *Las mujeres latinoamericanas. Perspectivas históricas*, Trad. Mercedes Pizarro de Parlange, Fondo de Cultura Económica, México, 1985. Col. Tierra Firme, pp. 325-358.
- Mill, John Stuart, *Sobre la libertad*, Trad. Pablo Azcarte, Alianza Editorial, Madrid, 1997.
- Mistral, Gabriela, *Lectura para mujeres*, Secretaría de Educación Pública, México, 1925.
- Muñiz, Elsa, *Cuerpo, representación y poder. México en los albores de la Reconstrucción Nacional*, Universidad Autónoma Metropolitana-Miguel Ángel Porrúa, México, 2002.
- Programa Nacional de la Mujer. *Más mujeres al Congreso*, Programa Nacional de la Mujer, México, 1998.
- Saloma Gutiérrez, Ana María, *Las hijas del trabajo. Fabricantes cigarreras de la Ciudad de México en el siglo XIX*, Tesis para obtener el grado de Doctora en Antropología, México, 2001, Escuela Nacional de Antropología e Historia.
- Tuñón, Enriqueta, *¡Por fin ya podemos elegir y ser electas!*, Instituto Nacional de Antropología e Historia/Plaza y Valdés, México, 2002.
- Tuñón, Julia *Las Mujeres: Una historia olvidada*, Planeta, México, 1987.

Hemerografía:

El Universal, México, años 1952-1953.

El Excélsior, México, años 1952-1953.

Heller, Agnes, "Los movimientos culturales como vehículo del cambio" en, *Letra internacional*, No.8, Madrid, 1987-1988, Invierno, pp. 21-25.

Muñiz, Elsa, "Garzones, flappers y pelonas: en la década fabulosa ¿de qué modernidad hablamos? en *Fuentes Humanísticas*, 21/22, Departamento de Humanidades, UAM-A, 2001, pp. 3-15.

Documentos:

Archivo General de la Nación, Fondo Adolfo Ruiz Cortines, c. 685, exp. 545. 2/1, 5 fs.

Archivo General de la Nación, Fondo Adolfo Ruiz Cortines, c. 864, exp. 545.2/1, 5f. 13 de octubre de 1953: Se publica en el Diario oficial del 17 de octubre de 1953.

Archivo General de la Nación, (AGN), Fondo Lázaro Cárdenas del Río, exp. 544.1/15.

Carranza, *Ley sobre Relaciones Familiares*, Imprenta del Gobierno, México, 1917

Congreso Feminista de Yucatán, Anales de esa Memorable Asamblea, Mérida Yucatán, Talleres Tipográficos del Ateneo Peninsular, 1916, p.127.

Diario de Debates del Congreso Constituyente, 1916-1917, Ediciones de la Comisión Nacional para la Celebración del Sesquicentenario de la Proclamación de

la Independencia Nacional y del Cincuentenario de la Revolución Mexicana, México, 1960.

Primer Congreso Feminista de la Liga Pan-Americana de Mujeres, Talleres Linotipográficos “El Moldelo”, México, 1923.

Fuentes electrónicas:

Declaración de los derechos de la Mujer y de la Ciudadana, redactado en 1789 por Olimpia de Gouges para ser decretado por la Asamblea Nacional Francesa, en: <http://nomadant.wordpress.com/textos/textos/derechos-mujer/>

Capítulo III

La crisis de 1994-1995 en México

Aguilar Zínser, Adolfo, “La negociación del Fobaproa” en Gabriel Székely (Coord.) *Fobaproa e Ipab, el acuerdo que no debió ser*, México, Océano, 1999, pp.95-96.

Aupin Birch, Juan “Del Fobaproa al Ipab, de marzo a diciembre de 1998” en Ricardo Solís Rosales (coord.) *Del Fobaproa al Ipab. Testimonios, análisis y propuestas*. México, UAM-Plaza y Valdés, 2000, pp. 57-73.

Banco de México, *Informe Anual*. Años varios, México, ed. Banco de México.

Becerra Ricardo, Salazar Pedro, Woldenberg, José, *La mecánica del cambio político en México*. Elecciones, partidos y reformas. México, Cal y Arena, 2005.

- Bousquet, Nicole. "From Hegemony to Competition: Cycles of the Core?" en Terence K Hopkins Immanuel Wallerstein, (Eds.) *Processes of the World-System*, California, USA, Sage Publications, 1980, pp. 46-83.
- Castañeda, Jorge, *La Herencia. Arqueología de la sucesión presidencial en México*. México, Alfaguara, 1999.
- Márquez, Enrique, *Porqué perdió Camacho. Revelaciones del asesor de Manuel Camacho Solís*. México, Océano de México, 1995.
- Oppenheimer, Andrés, *México en la frontera del caos*. México, ed. Banco de México, 2002.
- Palma, Esperanza, *Las bases políticas de la alternancia en México. Un estudio del PAN y el PRD durante la democratización*. México, UAM, 2004.
- Ramírez de la O, Rogelio, "La crisis del peso mexicano y la recesión de 1994-1995: ¿Previsible entonces, evitable en el futuro?" en Roett, Riordan, (Comp.) *La crisis del peso mexicano. Perspectivas internacionales*, México, FCE, 1996, pp. 37-42.
- Roett, Riordan "La devaluación mexicana y la respuesta estadounidense: políticas del Potomac al estilo de 1995" en Riordan Roett (comp.). *La crisis del peso mexicano. Perspectivas Internacionales*, México, FCE, 1996, pp. 58-81.
- Salinas de Gortari, Carlos, *México. Un paso difícil a la modernidad*. Barcelona, Plaza y Janés, 2000.
- SHCP, *Desincorporación de Entidades Paraestatales. Información básica de los procesos*. México, SHCP-FCE, 1994.

- Solís Rosales, Ricardo (coord.). *Del Fobaproa al Ipab. Testimonios, análisis y propuestas*, México, UAM-Plaza y Valdés, 2000.
- Strachey, John, *Naturaleza de las crisis*. México, El Caballito, 1973.
- Tello, Carlos, *Estado y Desarrollo Económico: México 1920-2006*. México, UNAM, 2007.
- Torres Espinosa, Eduardo, *Bureaucracy and Politics in Mexico. The case of the Secretariat of Programming and Budget*. USA, Ashgate Publishing Company, 1999.
- Torres Gaytán, Ricardo, *Un siglo de devaluaciones del peso mexicano*. México, Siglo XXI, 1980.

Hemerografía:

- El Financiero*, 14 de septiembre de 1992.
- Revista de Comercio Exterior*, mayo de 1989.

Capítulo IV

La rebelión neozapatista en Chiapas

- Anónimo. *Popol Vuh*. México, Fondo de Cultura Económica, 1993.
- Benítez, F. *Los indios de México*. T. I. México, Era, 1976.
- Camacho, D. y Lomelia, A. *Francisco José Grajales Godoy: a caballo hacia la modernidad*. Tuxtla Gutiérrez, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, 2000.

- Centro Nacional de estudios Municipales. "Los municipios de Chiapas" en *Enciclopedia de los municipios de México*. México, Secretaría de Gobernación, 1988. pp.
- Chávez, M. *El derecho agrario en México*. México, Porrúa, 2007.
- Fuente, J. de la. "Desarrollo de comunidades indígenas en México" en UNESCO. *Investigación sociológica y vida rural en América Central, México y la región del Caribe*. Brujas, 1966, pp.
- Fritscher, M. *Estado y sector rural en México: 1976-1982*. México, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 1985.
- García de León, A. *Resistencia y utopía*. México, Era., 1997.
- Hernández, R. y Rock, R. *Zócalo rojo*. México, Océano, 1982.
- López, A. *La lucha por los ayuntamientos. Una utopía viable*. México, Siglo XXI, 1986.
- Muñoz, G. *20 y 10. El fuego y la palabra*. México, La Jornada ediciones, 2003.
- Pérez, Ma. E. y Guillén, D. *Chiapas. Una historia compartida*. México, Instituto José Ma. Luis Mora, 1994.
- Pozas, R. *Juan Pérez Jolote*. México, Fondo de Cultura Económica, 1983.
- Rojas, R. *Chiapas. La paz violenta*. México, La Jornada ediciones, 1995.
- Rovira, G. *Mujeres de maíz*. México, Era, 1998.
- Secretaría de Programación y Presupuesto. *México: desarrollo regional y descentralización de la vida nacional*. México, SPP, 1988.

Tello, C. *La rebelión de Las Cañadas*. México, Cal y Arena, 1996.

Unidad de la Crónica Presidencial. *Las razones y las obras*. México, Fondo de Cultura Económica, 1983, 1984 y 1985.

Viqueira, J.P. y Sonnleitner, W. (coordinadores). *Democracia en tierras indígenas*. México, El Colegio de México-Instituto Federal Electoral, 2000.

Documentos:

Archivo General de la Nación. Galería 3. Grupo documentales Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari.

Hemerografía:

Beaucage, P. "La condición indígena en México" en *Revista Mexicana de Sociología*. Año L. No.1. Enero-marzo de 1988. Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, pp.

Cañas, et. al. "Elaboración del pozol en Los Altos de Chiapas" en *Ciencia*. Vol. 44. No. 2. (mes o estación del año)1993. Academia de Investigación Científica, pp.

Información sistemática. (1979-1983) *Revista de índices e información procesada*. México, Información Sistemática A.C.

BIBLIOGRAFÍA

- Periódico Excelsior*. Lunes 14 de octubre de 1974.
- Secretaria de Desarrollo Social. *Gaceta de Solidaridad*. (1990-1994). Comunicación quincenal del Programa de Solidaridad. México, Secretaría de Desarrollo Social.

Fragmentos para la historia. México en el siglo XX, se terminó de imprimir en noviembre de 2008, en Artes Impresas Eón, S.A. de C.V. Fiscales núm. 13 Col. Sifón., C.P. 09400, Del. Iztapalapa, Tels.: 56 33 02 11 y 56 33 90 74; <info@arteon.com> La edición consta de 1 000 ejemplares.

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo



Azcapotzalco



COORDINACIÓN
DE SERVICIOS
DE INFORMACIÓN

Formato de Papeleta de Vencimiento

*El usuario se obliga a devolver este libro en la fecha
señalada en el sello mas reciente*

Código de barras. 2896086

FECHA DE DEVOLUCION

- Ordenar las fechas de vencimiento de manera vertical.
- Cancelar con el sello de "DEVUELTO" la fecha de vencimiento a la entrega del libro



2896086

UAM
F1226
F7.3

2896086

Fragmentos para la histor

El presente no es en principio un libro de texto, es más bien un ejercicio que algunos profesores dedicados a la investigación histórica nos hemos propuesto realizar a partir de ciertas inquietudes y preocupaciones que nos ha dejado la práctica docente. A través de nuestro trabajo como profesores universitarios, hemos encontrado que, uno de los retos a la vez más complicados y fascinantes de la enseñanza y aprendizaje de la historia, es el de transmitirle a los estudiantes, la profunda complejidad de los procesos histórico-sociales en los que los protagonistas jugaron un papel fundamental, al tomar decisiones que a la postre resultaron decisivas. Consideramos que las coyunturas que marcan la importancia de ciertos acontecimientos, son además, producto de los procesos que en un momento dado colocan a los sujetos en situaciones cuyas opciones se ven limitadas, y eso es, en buena medida, lo que le imprime un carácter dramático, en muchas ocasiones incluso trágico, al devenir de los acontecimientos de la historia.